

Benito Juárez

***Documentos,
Discursos y Correspondencia***

Tomo 2, capítulo VI

Selección y notas de
Jorge L. Tamayo

Edición digital coordinada por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Tomo revisado y anotado por
Luis Alberto Arriola Viruell

Versión electrónica para su consulta
Aurelio López López



Año 2006

Tomo 2, capítulo VI

**Anotado y revisado por
Héctor Cuauhtémoc Hernández silva
(UAM – Azcapotzalco)**

Capítulo VI

Juárez en el ministerio de Justicia

Año de 1855

CAPÍTULO VI

JUÁREZ EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Año de 1855

El general Juan Álvarez lo emplea como secretario y pronto se convence de sus grandes dotes políticas; lo designa representante de Oaxaca en la Junta que prescribe el Plan de Ayutla y al ocupar la presidencia provisional en Cuernavaca incluye a Juárez en su Gabinete como ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, iniciándose así su actuación en el ámbito nacional.

Del primer ministerio forman parte Juárez, [Melchor] Ocampo, [Ignacio] Comonfort y [Guillermo] Prieto. Es notoria entre ellos una “diferencia del modo de juzgar las cosas”, por lo que Ocampo renuncia al ministerio de Relaciones a los pocos días y Juárez le secunda presentando también su dimisión. Ocampo relata esta crisis en un patético documento que él mismo llama *Mis 15 días de Ministro*.

Las diferencias hicieron crisis con motivo de la convocatoria al Congreso Constituyente, porque Comonfort insistía en que en el Consejo nombrado al amparo del Plan de Ayutla se le diera participación a los sacerdotes en forma importante, acaso la mitad; también reclamaba colocación para los jefes y oficiales del ejército santannista.

Con cordialidad, el general Álvarez le suplica a Juárez retire su dimisión ofreciendo que se reorganizará el gabinete, continuando Comonfort en Guerra y llamando a Joaquín Cardoso a Relaciones, Santos Degollado a Fomento y Ponciano Arriaga a Gobernación.

Afortunadamente, a pesar de no llevarse a cabo tales designaciones, logra salvarse la crisis y ello da oportunidad para que Juárez presente, a consideración del Presidente interino, el proyecto de la Ley de Administración de Justicia Orgánica de los Tribunales de la

Nación, del Distrito y Territorios, que sin gran discusión fue aprobada expidiéndose el 22 de noviembre de 1855 y promulgándose al día siguiente.

Esta Ley es, indudablemente, el primer gran paso reformista, porque representa la abolición de los fueros que permitían la existencia jurídica de sectores privilegiados, destacándose, entre ellos, el clero y las órdenes religiosas.

Ha pasado a la historia con el nombre de Ley Juárez como justo homenaje a su empeñosa labor, en la que fue auxiliado por “los jóvenes oaxaqueños licenciados Manuel Dublán y don Ignacio Mariscal”, como reconoce con justicia en *Apuntes para mis hijos*. En las siguientes páginas se reproducen su texto:

Hija genuina de la Revolución de Ayutla, la *Ley de Juárez* era una ley revolucionaria —ha escrito Justo Sierra—, dada por una autoridad, que tenía por sola fuente de poder la revolución, declaró que siendo aquélla una ley general, es decir, federal, los estados no podían ni modificarla ni variarla.¹

Algunos, entre ellos Justo Sierra, han puesto en duda la paternidad de Juárez en este texto legal, pero si se recuerda toda su actuación como litigante, funcionario judicial y gobernador de Oaxaca, en que lucha por la igualdad ante la ley, por la eliminación de la intervención del clero en los asuntos civiles, se tendrá que reconocer que la Ley Juárez no es sino la materialización de sus anhelos y aspiraciones.

Para obtener idea de la necesidad de realizar esta reforma, vale la pena reproducir párrafos que el licenciado Antonio Martínez Báez cita de un estudio del licenciado Jacinto Pallares:

Durante la dominación española fueron establecidos sucesivamente multitud de tribunales especiales para la administración de justicia, muchos de ellos revestidos también de

¹ Justo Sierra, *Juárez, su obra y su tiempo*, XIII, p.97.

facultades de orden gubernativo en el ramo que estaba bajo su inspección. A la época en que se publicaron las ordenanzas de intendentes (1786), cuyo objeto fue unificar y organizar bajo un plan menos monstruoso todos los ramos de la administración pública, había en México las siguientes órdenes de tribunales:

1.- Fuero común o justicia real u ordinaria. 2.- Juzgado de indios. 3.- Fuero de Hacienda, subdivido en muchos juzgados especiales. 4.- Fuero eclesiástico y monacal. 5.- Fuero de la bula de la Santa Cruzada. 6.- Fuero de diezmos y primicias. 7.- Fuero mercantil. 8.- Fuero de minería. 9.- Fuero de mostrencos, vacantes e intestados. 10.- Fuero de la Acordada. 11.- Fuero de la Santa Hermandad. 12.- Fuero de la Inquisición. 13.- Fuero de residencias o de pesquisas y visitas. 14.- Casos de Corte y otros recursos al Consejo de Indias. 15.- Fuera de Guerra.

Tal era la complicada organización del poder judicial en México durante el gobierno colonial, de manera que existían 15 órdenes de tribunales, a los que agregando catorce más que comprendía el fuero de Hacienda y dos el de Guerra, resultaban 31 órdenes de tribunales, y esto sin contar algunos de poca importancia, pero que ejercían jurisdicción, como el protomedicato, el juzgado de matrícula de San Blas, el de Estado y Marquesado del Valle, el de gallos, el de la pelota, los conservadores de algunos mayorazgos, etc.²

La nueva organización dada al gobierno colonial por la ordenanza antes citada, subsistió hasta la Constitución española de 1812, que estableció los alcaldes de los pueblos, los jueces de letras de partido y los tribunales o audiencias con atribuciones casi idénticas a las que hoy tienen esos funcionarios. Suprimió todos los fueros, pero dejó subsistentes el de hacienda, el eclesiástico, el militar, el de minería y el mercantil, los cuales,

² Jacinto Pallares, *El Poder Judicial*, México, 1874, p. 35.

según las alternativas de la política, ora subsistían bajo el régimen central, ora desaparecían bajo las prescripciones de la primera Constitución de México de 1824, excepto el de guerra y el eclesiástico, que permanecieron incólumes hasta que el reformador ciudadano Benito Juárez, por su ley del 23 de noviembre de 1855, redujo el primero a delitos puramente militares o mixtos de los individuos del ejército, y el segundo a delitos comunes de los eclesiásticos, suprimiéndolo para los negocios civiles y haciéndolo renunciable.³

También cita la opinión de don Blas J. Gutiérrez, al comentar el artículo 42 de la Ley de Juárez, en que estimando que esta legislación es aún moderada, dice así:

Por lo pronto no pudo avanzar hasta este punto el ministro, ciudadano Benito Juárez, en el artículo que se anota, quizá porque aún esta en su cenit el fanatismo religioso, aún no consolidado el gobierno, y había necesidad de contemplar a un número influyente de hombres que se habían militarizado en los mismos campos en que combatieron al dictador en favor de la igualdad, contraprincipio que hasta hoy mismo no ha podido sofocarse y que ha producido tan varias resoluciones, dictadas para fijar el punto de prisión de los militares, aún en el caso de ser procesados por la justicia ordinaria por delito común.

Forzoso es reconocer el gran paso que dio el artículo anotado con la abolición de parte de los fueros eclesiásticos y militar, despertando así el espíritu reformista de un modo valiente para su tiempo, desafiando la cólera todavía omnipotente del clero y de los retrógrados y abriendo paso a las francas manifestaciones de los ciudadanos que ya no deberías temer más la acogida en el Gobierno.⁴

³ *Ibidem*, p. 37.

⁴ Blas J. Gutiérrez, *Las Leyes de Reforma*, México, 1868, I.

Finalmente, habría que reproducir alguno de los párrafos del ensayo que en el centenario de la expedición de esta Ley preparó el licenciado Antonio Martínez Báez:

La *Ley Juárez*, que se ocupa de restablecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, con sus respectivas competencias, y de la creación del Tribunal Superior del Distrito, así como de la organización de la justicia civil y criminal del Distrito y Territorios, contiene, además, ciertas reformas a las normas procesales o al trámite de los negocios judiciales; pero siendo importantes los objetos mencionados, como que se refieren todos ellos a esa función que afecta directamente a la vida y a los intereses materiales y espirituales del hombre, que es la administración de justicia, la trascendencia de ese acto revolucionario, tanto por la coyuntura histórica en que surge, como por el sacudimiento que produjo en todos los sectores nacionales, reside en dos artículos contenidos en el capítulo de Disposiciones Generales y en un artículo transitorio: los que no tienen por sí mismos ningún carácter desquiciados, por absurdos o por arbitrarios en sus preceptos, sino que objetivamente considerados aún, podrían calificarse de moderados, como lo fueron efectivamente, se ajustan con estricto apego a las reglas formales de la técnica y de la lógica jurídica y a las substantivas de la soberanía nacional y de la igualdad jurídica, base esencial de toda organización democrática.

El artículo 42 declaró la supresión de los Tribunales especiales, con excepción de los eclesiásticos y militares; pero dispuso que los tribunales eclesiásticos cesarían de conocer en los negocios civiles y continuarían conociendo de los delitos comunes de individuos de su fuero, mientras se expedía una ley que arreglara ese punto. En cuanto a los tribunales militares, el propio artículo 42 prescribió que cesarían también de conocer de

los negocios civiles y que conocerían tan sólo de los delitos puramente militares o mixtos de los individuos sujetos al fuero de guerra. Finalmente, dicho artículo ordenó que sus disposiciones serían generales para toda la República y que los Estados no podrían variarlas ni modificarlas.

A su vez, el artículo 44 dispuso que el fuero eclesiástico en los delitos comunes, que se dejó subsistente en el artículo 42, sería renunciable.

En forma congruente con los anteriores preceptos permanentes y dictado para su futura observancia, el artículo 4º de los transitorios de la *Ley Juárez*, dispuso que los tribunales militares pasaran a los jueces ordinarios respectivos y los negocios civiles y causas criminales sobre delitos comunes y que lo mismo hicieran los tribunales eclesiásticos con los negocios civiles en que cesaba su jurisdicción.

No obstante los temperamentos que en dichos artículos se hacían en cuanto a la supresión de los tribunales especiales y a la afectación parcial del fuero eclesiástico, la medida tuvo una grande reacción, muy explicable si se atiende a que todo privilegio nunca puede ser disminuido sin violencia o sin grandes resistencias, pues el único afán de quienes lo detentan estriba en aumentarlo o en afianzarlo incommoviblemente.⁵

Para completar la información sobre este primer paso de la Reforma, se reproducen a continuación de la Ley de Juárez, el dictamen y la resolución del Congreso Constituyente al confirmarla, según decisión adoptada el 22 de abril de 1856, por 82 votos contra uno.

La protesta airada del clero por la nueva ley no tarda en dejarse sentir. Se ha incluido una serie de cartas enviadas por los arzobispos y obispos al gobierno, en donde ponen de manifiesto su agitación. Frente a esta embestida, Juárez contesta con seguridad y firmeza, pero a la vez

⁵ Antonio Martínez Báez, *La Ley Juárez*, México [1955], Cuadernos del Círculo de Estudios Mexicanos, n. 5, pp. 2 y 3.

tiene que estar luchado en el frente interno por la tendencia moderada y timorata de Comonfort.

Ante la polémica desatada, Juan Bautista Morales publica un editorial en *El Siglo XIX*, donde analiza, objetiva e imparcialmente, la Ley Juárez.

Al fin, el 9 de diciembre, el Presidente Juan Álvarez le acepta su renuncia, seguramente porque también él había decidido dejar la situación en manos de Comonfort, frente a las intrigas palaciegas y las sublevaciones, como la de Manuel Doblado, enarbolando el antiguo lema de “Religión y Fueros”.

Al retirarse el general Álvarez, el general Comonfort asume la presidencia el 11 de diciembre y, no obstante su tendencia moderada, tuvo que mantener en vigor la Ley de Juárez y exigir su cumplimiento, pese a la creciente protesta del clero y de los militares tradicionalistas.

DOCUMENTOS

Año de 1855

SE NOMBRA AL GENERAL JUAN ÁLVAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Correspondencia particular
del ministro de Estado y del despacho de Guerra y Marina

Palacio Nacional de México, octubre 9 de 1855

Excmo. Sr. don Manuel Doblado
Guanajuato

Muy apreciable amigo:

Los acontecimientos que han tenido lugar en Cuernavaca y aquí, son tan públicos que estoy seguro de que al recibir usted esta carta ya estarán en su noticia. Sólo le explicaré que la elección del Presidente interino se fijó en la persona del señor Álvarez porque los representantes que lo votaron quisieron justamente dar esa muestra de gratitud al antiguo veterano de la independencia y al constante sostenedor de las libertades patrias. El señor Álvarez no podrá venir a esta capital porque su vejez, sus enfermedades, y aun sus sencillos hábitos, no se lo permiten; ha establecido el gobierno en Cuernavaca, y para atender las necesidades del momento, así como para iniciar las reformas que exigen la revolución y el estado de desorganización en que dejó a la República la dominación del general Santa Anna, dispuso que viniese yo a la capital con el doble carácter de ministro de Guerra y general en jefe del ejército, autorizado ampliamente para obrar en todos los ramos de la administración pública; y aquí me

tiene usted con un ímprobo trabajo, cuando pensaba ir a descansar ya, después de año y medio de campaña.

Al llegar a esta ciudad se me hizo creer que los cuerpos que forman la guarnición, descontentos por la elección del Presidente e instigados por los reaccionarios, podrían poner a estos pacíficos vecinos en un conflicto que habría retardado un poco el fin de la guerra civil sin ventaja alguna para aquéllos; pero, afortunadamente, el buen sentido de estos militares se ha sobrepuesto a las seducciones y a los amañes, y la tranquilidad pública se encuentra por ahora inalterable y creo que continuará así, dándonos tiempo para emprender las reformas y mejoras que exige este nuestro desventurado país.

Es inútil que ponga a la disposición de usted los encargos con que me ha honrado la bondad del señor Presidente, porque sabe usted que soy su amigo y que dispone de mí de todas maneras; pero si le ofreceré con sinceridad ser el agente más eficaz y empeñoso del departamento de Guanajuato, de suerte que, para cualquiera cosa que a usted se ofrezca respecto de esa fracción importante de la República, por la que tengo tantas simpatías, no hará más que indicarme sus deseos y yo, para satisfacerlos, ejerceré toda mi influencia cerca del señor Presidente y demás compañeros de gabinete.

Consérvese usted bueno y disponga de la buena voluntad de su amigo que lo aprecia y b. s. m.

Ignacio Comonfort

Aumento:

Mis finos recuerdos para el señor Rocha y su apreciable familia.

CARTA CIRCULAR PARTICIPANDO SU DESIGNACIÓN
COMO MINISTRO DE JUSTICIA⁶

Cuernavaca, octubre 12 de 1855

Excelentísimo señor gobernador del Estado de Nuevo León

Muy señor mío de mi consideración y aprecio:

Por un afecto de la bondad del excelentísimo señor Presidente de la República, he sido encargado del ministerio de Justicia, recibiendo un testimonio de confianza que ha comprometido mi gratitud a aceptar un puesto sólo por corresponder de alguna manera a la honra con que se me distingue, y en él me ofrezco sinceramente a las órdenes de usted no para cumplir con una fórmula de cortesía, sino para tener oportunidad de suplicar a usted, como lo hago, me preste su eficaz cooperación en el desempeño de ese encargo, que de otra manera no podría llevar cumplidamente en las actuales circunstancias en que hay tanto que reformar en el importante ramo de administración que se me ha encomendado, como en todos los restantes.

Espero, por tanto, del patriotismo de usted y su anhelo por el triunfo de los principios liberales, que se servirá favorecerme con sus indicaciones y consejo sobre la materia que dejo indicada; seguro de que

⁶ Carta idéntica hemos encontrado dirigida a varios gobernadores. Hemos seleccionado ésta para poder reproducir la respuesta del señor general [Santiago] Vidaurri, en la que se incurre en el error de llamar al ministerio de “Gracia y Justicia”.

siempre las recibirá con la más viva gratitud, su afectísimo amigo y
obediente servidos q. b. s. m.

Benito Juárez

CONVOCATORIA PARA EL CONGRESO CONSTITUYENTE

Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores

El excelentísimo señor Presidente interino se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El ciudadano Juan Álvarez, Presidente interino de la República Mexicana, a sus habitantes, sabed:

Que en cumplimiento del artículo 5° del Plan de Ayutla adoptado por la nación, y de acuerdo con el Consejo de Estado, he decretado la siguiente

CONVOCATORIA

Artículo 1°.- Se convoca a un Congreso Extraordinario para que constituya libremente a la nación bajo la forma de república democrática representativa.

Artículo 2°.- La convocatoria para el Congreso es la expedida en diciembre de 1841, con las modificaciones que las actuales exigencias de la nación hacen indispensables.

Bases para las elecciones

Artículo 3°.- La base de la representación nacional será la población.

Artículo 4°.- Los estados y territorios que deben nombrar representantes son: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Distrito, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,

México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Sinaloa, Sonora, Sierra Gorda, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Isla del Carmen y Zacatecas.

Artículo 5º.- Por cada 50,000 almas se nombrará un diputado, y también por una fracción que exceda de 25,000. En los estados y territorios donde la población fuere menor que la señalada en la base se nombrará siempre un diputado. Se elegirán tantos diputados suplentes como propietarios.

Artículo 6º- El censo que regirá para estas elecciones será el que sirvió en las elecciones últimas para el Congreso General.

Artículo 7º- En los estados y territorios donde se hubiere formado un nuevo censo oficial, a él se arreglarán las elecciones.

De las juntas en general

Artículo 8º- Para la elección de diputados se celebrarán juntas primarias, secundarias y de estado.

Artículo 9º- Tendrán derecho para votar en las juntas primarias: los nacidos en la República y lo que fueren ciudadanos con arreglo a las leyes.

No tendrán derecho a votar:

- I. Los que no hayan cumplido 18 años de edad.
- II. Los que tengan causa criminal pendiente, durando este impedimento desde el mandamiento de prisión hasta el pronunciamiento de la sentencia absolutoria.
- III. Los que con arreglo a las leyes hayan perdido la calidad de mexicanos.
- IV. Los que hayan sido condenados por sentencia judicial a sufrir alguna pena infamante.
- V. Los que hayan hecho quiebra fraudulenta calificada.
- VI. Los que pertenezcan al clero secular y regular.
- VII. Los vagos y mal entretenidos calificados de tales conforme a las leyes.

Artículo 10º- Para facilitar las elecciones primarias y favorecer la ordenada libertad, los ayuntamientos, donde los haya, o la primera autoridad política local donde no los hubiese, dividirán los términos de su comprensión en secciones que contengan 500 almas.

Artículo 11º- Los ayuntamientos o la primera autoridad política local, en su caso, harán formar por medio de comisionados de las mismas secciones, padrones de las personas que hubiere en ellas y tengan derecho a votar, a cada una de las cuales se les dará boleta para que voten con ella. Esta operación deberá estar concluida el domingo anterior al que se señalare para la elección y se fijará en paraje público de la sección lista de los ciudadanos que hayan recibido boleta.

Artículo 12º- En los padrones se pondrá el número de la sección, el de la casa o la seña de ella, el nombre del ciudadano, el oficio de que vive y si sabe escribir, y las boletas se pondrán en los términos siguientes: “Calle o barrio, o rancho, o hacienda, C. N. el nombre del que recibe la boleta”.- “Sabe, o no sabe escribir”.- “Firma del comisionado”.

Artículo 13º- Se celebrarán juntas primarias en toda población que llegue a 500 personas y sólo para su formación serán presididas por los comisionados que hayan nombrado los ayuntamientos o las autoridades políticas locales en su caso.

Artículo 14º- Los pueblos que lleguen a 500 personas y las haciendas o ranchos, sea cual fuere su población, corresponden para las elecciones a la junta más inmediata.

Artículo 15º- Las juntas primarias se celebrarán el día 16 de diciembre próximo.

Artículo 16º- Reunidos a lo menos siete ciudadanos a las nueve de la mañana en el sitio más público que se hubiere designado y avisado el día antes por los ayuntamientos o autoridades políticas locales en su caso, y presidiendo el acto cada comisionado, según está dicho, procederán a nombrar un presidente, dos secretarios y dos escrutadores.

Artículo 17º- Instalada la junta, preguntará el presidente si alguno tiene que exponer queja sobre cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona, y habiéndola se hará pública justificación verbal en el acto. Resultando cierta la acusación serán

privados los reos de voto activo y pasivo. Los calumniadores sufrirán la misma pena y de este juicio no habrá recurso.

Artículo 18º- Si en el acto de la junta primaria alguno reclamare por no haber recibido boleta, la expresada junta decidirá sin apelación, y si resultare a favor del reclamante, lo admitirá a votar, haciendo que conste en el acta y expidiéndole una boleta en esta forma: “Se declara que el ciudadano N. tiene derecho a votar”.

Artículo 19º- Si se suscitaren dudas sobre si en alguno de los presentes concurren las calidades requeridas para votar, la junta decidirá en el acto y su decisión se ejecutará sin recursos.

Artículo 20º- Los individuos de la clase de tropa permanente y los de milicia activa que estén sobre las armas o en asamblea, y los generales, jefes y oficiales, votarán como cualquier ciudadano en su respectiva sección.

Artículo 21º- Para votar, los individuos de la clase de tropa serán empadronados y recibirán boleta conforme a lo prevenido para los demás ciudadanos y no serán admitidos a dar su voto si se presentasen formados militarmente y conducidos por jefes, oficiales, sargento o cabos.

Artículo 22º- Los individuos que forman la mesa se abstendrán de hacer indicaciones para que la elección recaiga en determinadas personas.

Artículo 23º- Se procederá al nombramiento de electores primarios, eligiendo uno por cada 500 habitantes de todos sexos y edad.

Artículo 24º- Si el censo de cada sección diere más de 500 habitantes, se nombrará otro elector, siempre que el exceso sea igual a la mitad de 500 pero, no siéndolo, no se contará con él.

Artículo 25º- Los ciudadanos concurrentes a la junta estarán provistos de la boleta que se les haya expedido para acreditar su derecho a votar, en la que llevarán designadas o designarán en aquel acto por escrito o ratificando el voto si no saben escribir, tantas personas cuantas exija el número de electores que toque aquella junta o sección, y está boleta la pondrán por el buzón en el área dispuesta para recibir la votación.

Artículo 26º- Concluida ésta, el secretario, a la vista del presidente, escrutadores y demás individuos concurrentes, abrirá el arca en que se ha

recibido la votación y, sacando de una en una las boletas dirá en voz sólo los nombres de los electos en cada una y, al mismo tiempo, ambos escrutadores llevarán la computación de votos formando las listas correspondientes y, terminadas que sean, publicará el presidente en voz alta los nombres de los electos, que serán los que hayan reunido más votos. En caso de igualdad decidirá la suerte.

Artículo 27º- En seguida se extenderá el acta de la elección, que firmarán el presidente, escrutadores y secretario. A cada uno de los electos se le dará su credencial bajo esta fórmula: “en la junta primaria el C. N., con tantos votos.- Fecha.- Firma de los individuos que componen la mesa”.- El expediente formado con las boletas, listas y actas, se dirigirá a la junta secundaria por conducto del comisionado.

Artículo 28º- Para ser elector primario se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, no estar imposibilitado de derecho para desempeñar las obligaciones inherentes a la ciudadanía, ser mayor de 21 años, del estado seglar, vecino y residente en la municipalidad y no ejercer en ella jurisdicción.

Artículo 29º- No se comprenden en la restricción anterior las autoridades elegidas popularmente.

De las Juntas secundarias o de partido

Artículo 30º- Éstas se compondrán de los electores primarios congregados en las cabeceras de partido, a fin de nombrar los electores que en las capitales de estado, distrito o territorio han de elegir diputados.

Artículo 31º- Las juntas secundarias se celebrarán el día 23 del citado diciembre.

Artículo 32º- Los electores primarios se presentarán a la primera autoridad local de la cabecera del partido, la que preparará el lugar para las reuniones de éstos y asentará sus nombres en el libro en que han de extenderse las actas de la junta.

Artículo 33º- Tres días antes de las elecciones se congregarán los electores y nombrarán de entre ellos mismo un presidente, un secretario y

dos escrutadores, pasando inmediatamente aviso de esto a la primera autoridad política del lugar.

Artículo 34º.- Ésta remitirá a la junta los expedientes de las elecciones primarias que hubiere recibido.

Artículo 35º.- Después del nombramiento de la mesa, los electores presentarán sus credenciales para que sean examinadas por una o más comisiones, que nombrará el presidente de acuerdo con el secretario y escrutadores, y las credenciales de éstos se examinarán por una comisión que nombrará la junta. Las comisiones presentarán su dictamen el día siguiente al de la reunión.

Artículo 36.- Reunidos en dicho día los electores, se leerán los informes sobre las credenciales y, hallándose reparo sobre las calidades requeridas, la junta resolverá en el acto y su resolución se ejecutará sin recurso.

Artículo 37.- En el día y hora señalados en el artículo 31, se reunirán los electores y ocuparán sus asientos sin preferencia; leerá el secretario los artículos que quedan bajo el rubro de “juntas secundarias” y hará el presidente la pregunta que se contiene en el artículo 17, y se observará cuanto en él se previene.

Artículo 38.- Acto continuo, los electores primarios nombrarán a los secundarios de uno en uno por escrutinio secreto mediante cédulas.

Artículo 39.- Por cada 20 electores primarios de los que se nombraren en todos los pueblos o secciones del partido se elegirá un secundario.

Artículo 40.- Si resultare un exceso de electores, igual o mayor que la mitad de 20, se nombrará otro elector secundario; pero, si el exceso no llega a la mitad, nada valdrá.

Artículo 41.- Si la población del partido no hubiere dado 20 electores primarios, se nombrará sin embargo un secundario sea cual fuere aquélla.

Artículo 42.- En las juntas en que haya de nombrarse un solo elector secundario no se procederá a la elección sin tres primarios a lo menos.

Artículo 43.- En los estados, distritos o territorios cuya población no diere, según la proporción indicada, 20 electores secundarios, siempre se elegirá ese número, repartiéndose éste entre los partidos según su población respectiva.

Artículo 44.- Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores examinarán los votos y se tendrá por electo el que haya reunido a lo menos la mitad y uno más de ellos y el presidente publicará cada elección. Si ninguno hubiere reunido la pluralidad absoluta de sufragios, los dos en quienes haya recaído el mayor número entrarán a segundo escrutinio, quedando electo el que reúna el número mayor. En caso de empate se repetirá la votación y, si volviere a haberlo, decidirá la suerte.

Artículo 45.- En seguida se extenderá el acta de elecciones, que firmarán el presidente, escrutadores y secretario, y a cada uno de los electores se les dará una credencial bajo esta fórmula: “En la Junta secundaria (de tal partido) ha sido nombrado elector secundario el ciudadano N. con tantos votos.- Fecha.- Firma del presidente, escrutadores y secretario”. El expediente, que se formará con los que se hubieren reunido de las juntas primarias y copia firmada por el presidente, escrutadores y secretario del acta de la elección hecha en el partido, se remitirá a la junta de la capital del estado, distrito o territorio, por conducto de la primera autoridad política.

Artículo 46.- Para ser elector secundario o de partido se requiere: ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, no estar imposibilitado de derecho para desempeñar las obligaciones inherentes a la ciudadanía, pertenecer al estado seglar, ser mayor de 25 años, avecindado en el Partido o con residencia de un año y no ejercer jurisdicción en él.

De las Juntas de Estado

Artículo 47.- Las juntas de estado se compondrán de los electores secundarios nombrados en los partidos de cada estado, distrito o territorio y se congregarán en las capitales de ellos a fin de elegir diputados.

Artículo 48.- Esta elección se celebrará el día 6 de enero del año de 1856.

Artículo 49.- Los electores se presentarán a la primera autoridad del estado, distrito o territorio, la que les preparará un local conveniente y sentará sus nombres en el libro en que han de extenderse las actas de la junta.

Artículo 50.- Tres días antes de la elección se congregarán los electores a puerta abierta y nombrarán un presidente, dos escrutadores y un secretario de entre ellos mismos, e instalada la junta lo participará a la primera autoridad política para que le remita el expediente de las elecciones de partido y el libro de que habla el artículo 49.

En seguida se leerá este decreto y las credenciales igualmente que las certificaciones de las actas de las elecciones hechas en las cabeceras de partido, a fin de que, examinadas por la comisión o comisiones que nombre el presidente de acuerdo con los escrutadores y secretario, informen al día siguiente si todo está arreglado. Las credenciales del presidente, secretario y escrutadores serán revisadas por tres individuos que nombre la junta, quienes informarán sobre su legalidad en aquel mismo día.

Artículo 51.- Reunidos los electores, se leerán los informes y hallándose reparo sobre las certificaciones o sobre las calidades de los electos, la junta resolverá en el acto y su resolución se ejecutará sin recurso.

Artículo 52.- En el día señalado para esta elección, congregados los electores en el lugar que se les haya designado, sin preferencia de asientos, a puerta abierta, hará el presidente la pregunta prevenida en el artículo 17 y se observará cuanto en él se dispone.

En seguida los electores nombrarán, por cédulas que depositarán en ánforas, primero, los diputados propietarios y, en seguida, los suplentes. El presidente, secretario y escrutadores serán los últimos que votarán.

Artículo 53.- Concluida cada votación, los escrutadores con el presidente y secretario harán el escrutinio de los votos y se declarará como electo aquel que haya reunido la mitad y uno más. Si ninguno se

hallare con la pluralidad, se hará segunda votación sobre los dos que hayan reunido mayor número y quedará elegido el que obtenga la pluralidad. En caso de empate se repetirá la votación; si volviere a haberla, decidirá la suerte y, concluida la elección, se publicará por el presidente.

Artículo 54.- El secretario de la junta extenderá el acta de las elecciones, en la que hará constar que la junta electoral ha elegido a los diputados N. y N. para que constituyan a la nación mexicana bajo la forma de República democrática representativa, sentando por base su independencia, y para que revisen las actos de la última administración dictatorial, así como los del actual Ejecutivo interino provisional, conforme al artículo 5º del Plan de Ayutla, reformado en Acapulco el 11 de marzo de 1854. Firmarán esta acta el presidente y todos los individuos de la junta. De ella se sacarán varias copias certificadas por el presidente, los escrutadores y secretario, una de las cuales se entregará a cada diputado para que le sirva de credencial y otra se remitirá inmediatamente a la primera autoridad política del estado, distrito o territorio en unión del original, para que archivando éste en su secretaría eleve la copia al ministerio de Relaciones, a fin de que éste la pase al Congreso en su primera junta preparatoria.

Artículo 55.- El presidente de la junta hará que se publique en los periódicos la lista de los diputados electos.

Artículo 56.- Para ser diputado se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años, pertenecer al estado seglar, poseer un capital (físico o moral), giro o industria honesta que le produzca con que subsistir.

Los individuos de la junta de estado pueden ser nombrados diputados siempre que reúnan las dos terceras partes de votos de los individuos que componen la junta.

Artículo 57.- El Presidente interino de la República no podrá ser electo diputado.

Artículo 58.- Si una misma persona fuese elegida por un estado, distrito o territorio del que no sea vecino y por el en que esté avecindado,

subsistirá la elección por el de la vecindad, y por el otro estado vendrá al Congreso el suplente a quien corresponda.

Si una misma persona fuere elegida por el estado de su nacimiento y otro cualquiera, subsistirá la primera elección yendo al Congreso a representar el segundo estado el suplente respectivo. Si concurriesen en una misma persona dos elecciones, la una por el estado de su nacimiento y la otra por el de su vecindad, se preferirá la segunda y se llamará al suplente a quien corresponda, como en los casos anteriores.

Concurriendo en la misma persona varias elecciones por estados que no sean ni de su vecindad ni de su nacimiento, la suerte decidirá a cuál de ellos debe representar.

Prevenciones generales

Artículo 59.- Ninguno podrá excusarse de los cargos expresados en esta Convocatoria. El Congreso decidirá sobre el impedimento que alegue para ser diputado o continuar siéndolo.

Artículo 60.- En las juntas no se presentarán los ciudadanos con armas, ni habrá guardia.

Artículo 61.- Para deliberar en las juntas electorales de partido y en los colegios electorales de estado, se necesita la presentación de proposiciones y su admisión previa por la mayoría de las propias Juntas. El presidente de cada una de ellas concederá la palabra por turno y por sólo dos veces, a dos electores de los que la pidan en pro y dos de los que la pidan en contra. El uso de este derecho no podrá exceder de media hora.

Artículo 62.- Concluida la elección, se disolverán inmediatamente las juntas y cualquiera otro acto en que se mezclen será nulo.

Artículo 63.- En los estados y territorios lejanos, donde por cualquier evento no se recibiere oportunamente esta Convocatoria, el gobernador o jefe político, de acuerdo con su consejo, señalará los días en que deban verificarse las elecciones y demás actos correspondientes.

Artículo 64.- Todas las dudas que se ofrezcan acerca de las elecciones serán resueltas por las juntas respectivas, menos cuando se trate de impedimento físico para ser diputado.

Artículo 65.- Las mismas juntas conocerán de las acusaciones que se hicieren contra algunos individuos por haber usado de violencia, cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinadas personas o de cualquier crimen cuyo objeto sea quebrantar la presente ley. La pena que podrá imponerse es la privación del derecho de votar o de ser votado.

De la instalación del Congreso

Artículo 66.- Los diputados se hallarán en la ciudad de Dolores Hidalgo, el día 14 de febrero de 1856, y en este día comenzarán las juntas preparatorias que estimen necesarias para la presentación y calificación de sus credenciales y activarán por todos los medios posibles el complemento de su número.

Artículo 67.- La última junta se celebrará el día 17 de dicho mes y en ella se nombrarán presidente, vicepresidente y secretarios, y hecha esta elección se anunciará la instalación del Congreso Constituyente, que abrirá sus sesiones al siguiente día.

Artículo 68.- El Supremo Poder Ejecutivo concurrirá a este acto tan solemne. El Presidente de la República pronunciará un discurso que será contestado por el del Congreso en términos generales.

Artículo 69.- El Congreso no podrá ocuparse absolutamente de otro asunto que no sea la formación de la Constitución y leyes orgánicas que se citen en ella, y la revisión de los actos de que habla el artículo 5º del Plan de Ayutla reformado en Acapulco.

Artículo 70.- Llenarán ambos objetos dentro del término de un año.

Artículo 71.- Cada uno de los diputados prestará antes de la instalación del Congreso y ante el presidente que hayan electo juramento solemne bajo la siguiente fórmula: P. “¿Juráis desempeñar leal patrióticamente vuestro encargo conforme al Plan de Ayutla reformado en Acapulco y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación?”-

R. “Sí, juro”.- “Si así lo hicieréis, Dios os lo premie; si no, Dios y la nación os lo demanden”.

Artículo 72.- Los diputados son inviolables por las opiniones que emitan en el desempeño de sus augustas funciones y en ningún tiempo ni por autoridad ninguna podrán ser reconvenidos ni molestados por causa de ellas.

Artículo 73.- Se abonarán \$ 2 por legua a los ciudadanos diputados en razón de viático y \$ 250 cada mes por razón de dietas. Tanto los viáticos como las dietas se cubrirán por las rentas de los estados que representen.

Artículo 74.- Luego que la Constitución se hubiere concluido, se jurará y firmará por todos los diputados presentes. Acto continuo se presentará el Presidente de la República a jurarla y dispondrá que sea jurada y publicada solemnemente en toda la nación.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en Cuernavaca, a 16 de octubre de 1855.

Juan Álvarez.

Al ministro de Relaciones Interiores y Exteriores,
Ciudadano Melchor Ocampo.

Y lo comunico a V. E. para su cumplimiento.

Dios y Libertad. Cuernavaca, octubre 17 de 1855.

(Melchor) Ocampo.

JUÁREZ PARECE UN HOMBRE CIRCUNSPECTO

México, octubre 24 de 1855

Sr. Lic. don Manuel Doblado

Amigo y compañero muy querido:

Por los periódicos se impondrá usted del nombramiento de ministerio, en lo que lo único que hay de notable es que ni Yáñez ni Cardoso aceptaron la cartera de Relaciones, que está aún vacante, a pesar de que se dice que Lafragua fue nombrado y aceptó. Parece que Comonfort tiene empeño positivo en rodearse de algunos moderados para neutralizar la influencia casi dominante del partido puro. Difícil es por hoy la empresa, particularmente cuando el nombramiento ha recaído en miembros del partido exaltado.

No puede decirse con completa seguridad cuál sea el programa de esta administración, pero en lo general se presume que hará grandes reformas, particularmente en lo relativo al clero, ejército y empleados.

Hoy he hablado con el señor Juárez; me pareció un hombre bastante circunspecto y, si hemos de creer a su conversación vaga y general, no nos dará muchas leyes sino las puramente precisas y consultando siempre el interés general, sin marcar en sus disposiciones el espíritu de partido que tan fuerte ha sido para nuestra patria.

La conducta de usted en el período que lleva de gobernador, me hace creer que obrará lo mismo, y quizá está reservado a usted formar, de todos los hombres que valen algo en nuestra sociedad, un solo partido, en que, aunque no se cambiasen de pronto sus creencias políticas, vengan por fin a no reconocer más bandera que la de la razón y la justicia.

Ojalá y así sea, porque, para mi, atravesamos un período tan difícil, en que la convulsión de nuestra sociedad puede ser el origen de desconocimientos parciales, que acabe con nuestra unidad nacional.

Se dice que pronto estará en Tlalpan o Tacubaya el general Álvarez, y que para entonces se dictarán ciertas providencias sobre la extinción de todos los fueros y otras de mucha importancia en lo que toca a la Hacienda pública.

Cualquier novedad que ocurriere con positivo gusto se la comunicaré a usted, éste su muy adicto amigo y seguro servidor q. b. s. m.

Rafael Martínez de la Torre

JUÁREZ RENUNCIA AL MINISTERIO DE JUSTICIA

Al excelentísimo ministro de Relaciones:
(Melchor Ocampo)

Los medios de acción que la mayoría del gabinete juzga indispensables para que el gobierno satisfaga las actuales exigencias de la nación, son diferentes de los que ha propuesto el excelentísimo señor ministro de la Guerra [el general Comonfort], en las diversas conferencias que con él se han tenido. Esta diferencia del modo de juzgar las cosas, nacida de las mejores intenciones, entorpecería la marcha del gobierno; y para [evitar] este mal de trascendencias funestas a la nación, V. E. ha renunciado la cartera de Relaciones. La misma consideración me obliga a hacer dimisión del ministro de Justicia, que el Excmo. señor Presidente interino de la República se dignó encomendarme.

Suplico a V. E. se sirva dar cuenta a S. E. con esta renuncia, manifestándole mi más profunda gratitud por la consideración que me dispensó honrándome con su confianza.

Acepte V. E. las seguridades de mi atenta consideración y particular aprecio.

Dios y Libertad. Cuernavaca, octubre 21 de 1855.

Benito Juárez.

VIDAURRI CELEBRA QUE JUÁREZ ESTÉ EN EL GABIENTE

Monterrey, octubre 31 de 1855

Excelentísimo señor ministro de Gracia y Justicia

Don Benito Juárez

Muy señor mío de todo mi aprecio:

Por la muy estimable de usted de 12 del actual, me he impuesto con la mayor satisfacción de que el Excmo. señor Presidente de la República tuvo a bien encargarlo del ministerio de Justicia.

Doy a usted la debida enhorabuena por haber merecido la confianza del Primer Magistrado de la República y, desde ahora, me prometo de sus luces bien conocidas en el país, de su patriotismo y de su amor a los principios liberales que ha adoptado la nación, que la administración de justicia recibirá de usted las importantes reformas que necesita.

Agradezco a usted mucho su atención al comunicarme su nuevo empleo y en el cual le desea todo género de felicidades, su afectísimo amigo y obediente servidor q. b. s. m.

Santiago Vidaurri

SOMBRÍO PANORAMA: EL PAÍS EN CRISIS POLÍTICA

Correspondencia particular
Del ministro de Estado
Y del Despacho de Guerra y Marina.

Palacio Nacional de México, noviembre 10 de 1855

Sr. Lic. don Manuel Doblado

Mi querido amigo:

Es en mi poder su grata de 5 del actual, y no he podido conseguirle las carabinas porque los señores Comonfort y Prieto se fueron a Tlalpan el jueves y todavía no vienen, aunque creo que llegarán en la noche.

El asunto del señor Liceaga queda recomendado. Con el señor Leal recorrí ayer los ministerios para conseguir el armamento y se presentó la dificultad de la falta de los señores ministros.

La camarilla que asiste al señor Álvarez sacó varias órdenes, entre ellas la de compra de cañones por valor de 250,000 pesos. El señor Comonfort se disgustó de la ocurrencia y se dirigió a Tlalpan a presentar su renuncia. He sabido que no se le admite; pero este suceso y la ausencia de [noticias de] la capital ha tenido al mundo político inquieto y en combinación de mentiras, pues a todas horas aseguran el pronunciamiento de la Ciudadela, a cuya cabeza se han puesto los señores (generales) Haro, (José López) Uraga, y el (coronel Manuel) Robles (Pezuela), y otras veces anuncian el pronunciamiento de “Religión, Fueros y Comonfort”. Todo ello es pura charla; pero lo

positivo es la pérdida del tiempo para todos los negocios, lo que debe dar un resultado funesto.

La situación de la República no puede ser peor, cuando por todos lados amenaza la escisión y cuando hasta los estados más inmediatos al centro desconocen al Gobierno General para sus deliberaciones. Yo separo la exigencias de la revolución de otras, que sólo son obra del desconcierto, el cual sólo se puede evitarse formando una liga las personas que están dirigiendo los estados, cuyo punto de unión sea el centro; de este pensamiento me ocupé en mi anterior, y cada día me parece más urgente, ya porque aumentan los males, como por la falta de acción del centro, que no lo veo ocuparse en poner el remedio.

Cuanto se creía que la presidencia del señor Álvarez fuere puramente transitoria, se ha venido a encontrar que, halagado por el poder y reducido por las personas que medran a su sobra, no piensa en separarse, y que conociendo esas personas que tendrían menos influencia si el señor Álvarez llega a la capital, lo mantienen fuera de ella, inventándole pronunciamientos todos los días, ocasionando un grave mal por el entorpecimiento que se ocasiona a los negocios con la falta del Presidente.

Como algunos periódicos de la capital han trato bajo sentido antiliberal el Estatuto de ése, me había ocurrido el pensamiento de dirigir un remitido firmado por varios guanajuatenses, en que se manifestara que el Estatuto era obra del Consejo y no de usted; pero temí que al hacer esta manifestación (el Lic. Francisco de P.) Rodríguez, o cualquier otro del Consejo, fuera a asegurar la parte que usted había tomado en el negocio, con lo que ponía a usted de peor condición, El silencio de usted en esta materia y en las demás me priva de instrucciones para obrar como quisiera.

Marina será repuesto en Querétaro.

La Huasteca se ha erigido en nuevo estado.

Suspendo la presente para agregar algo que merezca la pena, si
hubiere cosas nuevas, repitiéndome suyo, que atento b. s. m.

L. M. Ceballos

[Aumento]

He arreglado para conseguir de los respectivos ministros que el pago de
la deuda reclama se haga con los derechos de la conducta del dinero que
sale para Veracruz. En el correo próximo diré a usted si ha pasado;
suplicándole que me oriente usted de no prestarle este recurso, de cuál se
podría echar mano y que usted recogiera en este estado.

Vale

CERTEROS JUICIOS DE PONCIANO ARRIAGA
SOBRE EL PAÍS

San Luis Potosí, noviembre 10 de 1855

Excmo. Sr. Lic. don Manuel Doblado
Guanajuato

Mi muy estimado compañero y amigo:

Doy a usted las más expresivas gracias por la eficacia con se sirvió cumplir los encargos que me tomé la libertad de hacerle con el objeto de tener noticias positivas de mi hijo; he recibido ya cartas de él mismo, que me escribe desde el Fresnillo, cesando enteramente mis cuidados en esta parte.

Muchos amigos de esta ciudad han hecho empeños a fin de que me encargase del gobierno del estado; pero ha sido imposible acceder a sus deseos porque no quiero autorizar mudanzas peligrosas que pudieran desacreditar la situación presente, y porque no me es posible tampoco dejar de obsequiar los deseos del Excmo. señor Presidente de la República, que me llama con instancia al ministerio de Gobernación. Pronto, pues, marcharé a la capital, y me es sensible no tener una larga conferencia con usted acerca del actual estado de las cosas, porque mi viaje debe ser directo y lo más breve posible.

Sin embargo, yo desearía que usted tuviese la bondad de escribirme frecuentemente, y con toda franqueza me dijera su opinión acerca de las que yo he formado por lo poco que he visto después de mi regreso a la República. Usted me conoce y sabe muy bien cuan entusiasta soy por las ideas políticas, y sin embargo, creo que las cuestiones sociales de nuestro pobre país merecen atención.

El pueblo sigue, como siempre, ignorante y miserable; en todas las industrias gozan los extranjeros de ventajas y privilegios nocivos a los mexicanos; la propiedad territorial esta monopolizada por pocos y grandes señores que han establecido en sus fincas una especie de sistema feudal; las contribuciones pesan sobre los objetos de primera necesidad y sobre todos los productos del país; no hay vías de comunicación; no están desarrollados los elementos de vida social de la República y los mexicanos vemos quitarse y ponerse gobiernos sin que en lo positivo mejoren nuestras esperanzas. Es verdad que a pesar de todas estas causas y de otras muchas que usted conoce perfectamente, nuestro país guarda una situación muy diferente a la que tenía en el tiempo del régimen colonial; pero si esto se verifica porque la ley del progreso es invariable, aunque muchas veces lenta, no por eso dejo de abrigar muy vivos deseos de que los hombres de la época y situación presentes se ocupen en meditar sobre las causas radicales del malestar que nos aflige, a fin de que la revolución que acaba de consumarse sea fecunda en resultados y deje señalada en nuestra historia una página que honre a los mexicanos liberales de rectas intenciones, y que no, por serlo, desconocen que las mejoras del país deben fundarse sobre elementos indestructibles.

Usted tiene toda la capacidad necesaria para conocer el objeto de estas ligeras indicaciones y yo le estimaré mucho se sirva decirme cuanto le ocurra sobre los medios de cambiar, en lo posible, la situación social de nuestras cosas

Que usted sea tan feliz como lo desea su adicto compañero, amigo y servidor, q. b. s. m.

Ponciano Arriaga

COMONFORT EN CORDIAL RELACIÓN CON DOBLADO

Correspondencia particular del ministro de
Estado y del Despacho de Guerra y Marina

Palacio Nacional de México, noviembre 14 de 1855

Excmo. Sr. don Manuel Doblado
Guanajuato

Mi muy estimado amigo:

Agradezco a usted cordial y debidamente su amistosa deferencia en los negocios de Vega y de Carrasco; pienso colocar al primero en la Sierra Gorda, pero le encargo a usted que le busque un buen secretario que lo dirija.

Acabo de disponer que se entreguen a don Lorenzo Ceballos 200 carabinas a la *fige* para la guardia nacional de ese estado; acepte usted esta nueva prueba que le doy de confianza que me merece; obro también de este modo por las simpatías que tengo hacia Guanajuato.

El excelente talento de usted ha sabido comprender perfectamente mi situación con respecto al trabajo que me abrumba y que no me permite ocuparme de mis negocios particulares; mucho es que pueda despachar los públicos en trece horas que por lo menos dedico cada día para corresponder a las exigencias del puesto que desempeño. Sin embargo, me es muy grato mantener viva la correspondencia con mis amigos, aunque no pueda dedicarles muchos renglones como mi afecto deseara; le suplico, por lo mismo, que me siga favoreciendo con su indulgencia y con sus apreciables letras.

Agradezco mucho los nuevos testimonios de la buena amistad con que usted me honra; yo me complaceré en no escasearle los de la mía y, contando siempre con el aprecio con que me distingue, me repito su atento servidor y afectísimo amigo q. b. s. m.

Ignacio Comonfort

EL GENERAL ÁLVAREZ
SE TRASLADA A LA CIUDAD DE MÉXICO

México, noviembre 14 de 1855

Sr. Lic. don Manuel Doblado

Mi querido amigo y compañero:

Como indiqué a usted en mi anterior, no era tal el desacuerdo entre los ministros que produjeron un cambio. Es cierto que hubo algunas diferencias, pero éstas se allanaron, aunque, para mí, no creo que Comonfort esté muy satisfecho con sus compañeros, que de buena gana substituiría con amigos íntimos.

Don Juan Álvarez al fin se resolvió a venirse a México y mañana o pasado hará su entrada. Hoy entraron algunas de sus fuerzas y mañana deben salir varios cuerpos para ese departamento para formar un cantón en la ciudad de León al mando del general Zuloaga. De las antiguas fuerzas pocas quedan en esta ciudad, y la guarnición se compondrá en su mayor parte de los surianos, en quienes tiene mucha confianza el Presidente.

El pensamiento de formar ese cantón ha sido muy halagüeño para el señor Álvarez, y el jefe, como usted sabe, es de toda la confianza de Comonfort. De varias maneras se ha glosado la idea, y muchos creen que vendrá a parar todo en la disolución de los cuerpos por la falta de disciplina en lo relativo a la deserción. Yo no creo que éste sea el pensamiento dominante, porque veo la necesidad de que haya siempre un pie de ejército regular.

Don Ponciano Arriaga ha admitido el ministerio de Gobernación, y pronto lo tendremos en México. Igual cosa se dice del general (Santos) Degollado en el de Fomento; pero esto no lo sé de una manera positiva.

No me conviene la transacción de las barras de la Trinidad en los términos que usted me propone, y de ello hablaremos el próximo mes entrante que pienso ir a esa ciudad.

Entonces tendré el gusto de dar a usted un abrazo, y entretanto, reciba usted el afecto de su muy adicto amigo y servidor q. b. s. m.

Rafael Martínez de la Torre.

RENUNCIA OCAMPO AL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES

(Sr. Gral. Juan Álvarez)
(Presidente Interino de la Republica)

Excmo. Señor:

Cuando nombrado confidencialmente por V. E. ministro de Relaciones e invitado para formar el Gabinete, hice presente la ignorancia inculpable en que me hallaba sobre la situación de los hombres y las cosas, V. E. se dignó insistir en sus órdenes hasta el punto y en términos de que hubiera sido necesario no ser hombre para rehusar por mas tiempo el servirle. Pasados, pues, tres días, acepté el nombramiento oficial; la grave y vital necesidad que yo veía en aquellos momentos era que el gobierno prontamente apareciese organizado.

Ahora comienzo ya a comprender la situación y por las últimas (noticias)⁷ que he tenido por el señor ministro de la Guerra he sabido, entre otras cosas, el verdadero camino que sigue la presente revolución. Yo lo suponía ya; pero no puedo dudarlo, cuando el mismo señor ministro me lo ha explicado. Entonces y, muy detenida y fríamente, hemos discutido nuestros medios de acción y yo he reconocido que son inconciliables, aunque el fin que nos proponemos sea el mismo.

Suponiendo ambos sistemas de medios igualmente acertados, como sin duda son igualmente patrióticos, hay de la parte del señor ministro de la Guerra los antecedentes de poseer toda la tradición y el espíritu del Plan de Ayutla, no menos que acabar de sellar con largos y muy meritorios sacrificios su decisión por la causa de la libertad.

⁷ Destruído en el original.

Como en la administración los medios son el todo, una vez que se ha conocido y fijado el fin, he creído de mi deber, llegando como he al terreno de las imposibilidades, separarme del ministerio de Relaciones, reconociendo que no es ésta mi ocasión de obrar, porque yo no entraré en este camino y porque la naturaleza misma de lo adelantado que se está, impide ya separarme de él.

Así, pues, espero que V. E., haciéndome la justicia de creer que he tomado una resolución invariable y que la apoyo en mi convicción y mi conciencia, se dignará, como rendidamente se lo suplicó, aceptar mi renuncia de la cartera que me había confiado.

Conviene que V. E. sepa y aprovecho la ocasión de repetirlo, que en mí tiene un amigo apasionado y que no por llenar las fórmulas de la urbanidad sino por desahogar mi corazón, le pido acepte con mi gratitud por sus bondades, mi mas estrecha adhesión y mis respetos.

Dios y libertad, Cuernavaca, octubre 20 de 1855.

Melchor Ocampo

MIS 15 DÍAS DE MINISTRO

**Remitido del ciudadano Melchor Ocampo
al periódico titulado *La Revolución***

**México
Establecimiento tipográfico de Andrés Boix,
Cerca de Santo Domingo número 5
1856**

Carta de envío a los redactores de *La Revolución*

Pomoca, noviembre 14 de 1855

Amigos y señores míos:

Acabo de leer en el número 2,510 del *Siglo XIX*, que corresponde al 1º de noviembre corriente, en la tercera columna de la página 4 y bajo el rubro de “Crisis”, este párrafo:

Nos han asegurado que el señor Comonfort manifestó abierta y francamente, que si el gobierno no emprendía las reformas que reclama la situación del país y no seguía una marcha en consonancia con las primitivas tendencias de la revolución, estaba decidido a presentar la renuncia formal e irrevocable de su cartera.

Tan notables aserciones de parte de quienes informaron a los señores redactores del *Siglo*, indican que el señor Presidente o los otros miembros del gabinete se oponen a las primitivas tendencias de la revolución. Si así fuere, han variado mucho de las intenciones que les conocí y con que los dejé. Pero como hace tan pocos días que salí del ministerio, y como era posible para algunos explicarse ahora mi salida tomando por dato el que han asegurado a los señores redactores del *Siglo*, suplico a ustedes se dignen insertar el adjunto escrito en su acreditado periódico, a fin de que se conozcan mejor ciertos pormenores que no dejan de tener hoy importancia. Quince días hace que volví a esta casa de ustedes y escribí el adjunto papasal, a fin de no olvidar los hechos, y aquí se estaría hasta que pasaran las pasiones del momento, si la publicación a que me he referido no me obligara a ésta, que es ya natural defensa.

Soy de ustedes señores redactores, amigo agradecido y obligado servidor q. b. s. m.

Melchor Ocampo

Mis 15 días de Ministro

La publicidad es la mejor de las garantías en los gobiernos. Si cada hombre público diese cuenta de sus actos, la opinión no se extraviaría tan fácilmente sobre los hombres y sobre las cosas. Siguiendo estas dos reflexiones que a mi mente se ofrecen como axiomas, he creído que es un deber mío publicar, cuando sea oportuno, los motivos de mi conducta pública cuando fui nombrado representante por Michoacán, hasta que me separé de los ministerios de Relaciones y Gobernación. No diré todo lo que observé y pasó; parte por consideraciones a algunas personas, parte por extraño a mi principal intento, parte por que lo juzgo perjudicial hoy a la causa misma de la revolución, cuyo objeto y feliz desenlace deseo; pero seguro de que nada de lo que calle perjudicará a la debida exactitud y claridad de lo que escriba.

El 17 de septiembre llegué a la República de vuelta de mi destierro, y el 23 a México. Cuando recibí el nombramiento de consejero del Distrito, apenas llegado a esa ciudad rehusé sin la menor hesitación,⁸ y tuve que vencer mi habitual deseo de obsequiar a uno de los amigos que más amo. Por cuantas seducciones de raciocinio y sentimiento son posibles a persona de imaginación, sensibilidad y gran talento, procuró domar mi primera, instintiva y después reflexionada repulsa. Lo más que consiguió fue que no publicara mi renuncia. Uno de mis más marcados defectos es la prontitud en las resoluciones, siendo otro, aunque menor, porque no siempre incido en él, la obstinación con que persisto en la resolución tomada. Sin embargo, al recibir poco tiempo después mi nombramiento de representante, dudé, y por varios días, de lo que debía hacer. No veía claro mi deber en aquel caso. Juzgué tal duda como una degeneración de mi carácter y doliéndome de ello con algunos amigos,

⁸ Duda. HCHS.

tuve ocasión de ir formando juicio. Al fin, por lo que todos me decían, y principalmente por el dictamen de personas cuya imparcialidad, sensatez y benevolencia eran para mí seguridades de acierto, me resolví a ir a Cuernavaca, no sin una notable repugnancia; aunque no hubo uno solo que me hablara contra el viaje.

Salí pues de México por la diligencia del 3 de octubre, y en la mañana del 4 pasé desde temprano a la casa llamada Cerería, en la que estaban alojados muchos de los representantes, en su mayor parte antiguos amigos míos. Oí varios cómputos sobre la inmediata elección, y dije, porque a ello se me invitó, que yo iba a votar por el señor Álvarez, no por su mérito, aunque se lo reconozco grande e innegable, porque considero la suprema magistratura una comisión de difícil desempeño, y no una recompensa de buenos servicios, sino porque creí que era el único ante cuyo nombre callasen los ambiciosos vulgares que se creían con derecho a ella. Enemigo como siempre he sido de toda intriga, aunque sea electoral, supliqué al señor Alcaraz, que allí se hallaba, se dignara acompañarme, prometiéndole decirle luego lo que iba a hacer. Salidos de la casa, le aseguré que mi negocio era “hacer que hacía”, a fin de libertarme de listas y combinaciones cabalísticas. Andando a la ventura, llegamos a las doce, hora citada para reunimos. El consejo se instaló nombrando por aclamación su presidente al señor Farías y a mí su vice.

Hecha la elección del señor Álvarez, que se sabía de antemano, como después diré, el señor Farías nombró una comisión, cuyo presidente fui, y cuyo objeto era, según las instrucciones que se nos dieron, hacer saber al señor Álvarez su elección, felicitarlo en nombre de la nación, invitarlo a jurar luego y acompañarlo. Pasamos, pues, inmediatamente a cumplir nuestro cometido, y presentado el juramento acompañamos al nuevo Presidente de la República al *Te Deum* que se cantó en la parroquia, en donde todo estaba preparado. Al salir de la iglesia, el señor Presidente, a quien yo daba el abrazo, me dijo que le ayudase, como ministro interino, a formar su gabinete. Accedí desde luego a tan honrosa invitación, recalcando sobre la palabra interino, y dando a entender que tal interinato lo entendía yo por sólo aquel trabajo. Supliqué al señor Presidente me designara hora, suponiendo que por

avanzada e incómoda no podía ser aquélla, y S. E. se dignó citarme para las cinco de esa tarde.

Pena me causa recordar las circunstancias en que fui introducido: rodeaban varias personas al señor Presidente, y la convención, que era general a mi llegada, continuó sobre el tono más de tertulia que de consejo de Estado. Invitado para que dijera mis candidatos, me abstuve de hacerlo delante de tantas personas, alegando la gravedad del caso, la dificultad de tal elección, y sobre todo, la conveniencia de dar participación en ella al señor Comonfort. El señor general Miñón propuso entonces que fuese nombrado ministro de Guerra el señor general Villarreal, exponiendo los méritos que había contraído en la campaña por los buenos servicios prestados a la revolución. El señor Villarreal se excusó, alegando, entre otras razones, la de decirle que había nacido en La Habana, que esta procedencia extranjera podía llevarse a mal por la oposición; a su turno indicó para ministro del mismo ramo al señor general Miñón. Después de cierta ligera porfía de urbanidad entre ambos señores, este último me interpeló directamente para que dijese si no me parecía bien el señor Villarreal. Yo, que me hallaba ya violento, alcé la voz, consiguiendo que todos me escuchasen; hice ver que no teníamos ley ni reglamento que nos forzasen a tal festinación y supliqué al señor Presidente esperásemos hasta el siguiente día, puesto que se aseguraba que en él llegaría a Cuernavaca el señor Comonfort. El señor Presidente, después de exponer la necesidad que había de hacer saber prontamente el resultado de la elección a los departamentos y a las naciones amigas, consintió en que aplazáramos el nombramiento hasta las diez de la mañana siguiente.

[Inútil espera]

A la hora citada estuve puntual en la sala de recibir, esperando que el señor Presidente se desocupara de las varias personas que supe lo acompañaban, y que me llamase. Así permanecí hasta cerca de las doce, hora en que suponiendo que no le hubiera sido posible darse tiempo para que yo lo viese, le dejé un recado, después de haber procurado tomar acta

de mi estancia y permanencia, hablando con diversas personas de la hora que iba siendo y del motivo de mi espera. Como el estado de salud del señor Presidente y algún hábito anterior que supuse, atendiendo al clima en que ha vivido, me había hecho creer que reposaba un poco en las altas horas del día, me hice ánimo de salir a encontrar al señor Comonfort, entrapando, si así puedo decirlo, aunque me ruborice de ello, las horas que faltaban para su llegada.

Hablé, en efecto, cuatro palabras con el señor Comonfort, antes de que entrara en la población, pero sólo de felicitaciones amistosas y de la ansiedad en que me había tenido; dejé después que se adelantara. Con el señor Álvarez estuvo largas horas, y ya en la noche y en la misma casa que nos sirvió después para establecer un simulacro de ministerio, el señor Comonfort y yo debatimos muy largamente; primero, mi repulsa de entrar al gobierno, fundada en mi ignorancia casi absoluta de la situación, de las personas y de las cosas; segundo, de la admisión de él para el ministerio de la Guerra, punto que discutimos y porfiamos mucho, logrando yo, según entiendo, convencerlo de esa conveniencia; tercero, de los nombramientos de los señores Juárez y Prieto, propuestos y apoyados por mí, y que fueron desde luego admitidos por el señor Comonfort, porque habían ya precedido largos razonamientos sobre las cualidades que en general se necesitaban para los ministerios de Justicia y Hacienda, y las especiales de nuestro caso; cuarto, sobre la teoría del señor Comonfort, quien quería que el ministerio estuviese formado por mitad de moderados y progresistas; quinto y último, sobre el nombramiento del señor Lafragua para Gobernación, nombramiento que yo resistí. Nada más adelantamos, y convenimos en volver a discutir al día siguiente, por ser ya tan entrada la noche; nos establecimos en la misma casa y avisamos a nuestras respectivas habitaciones que pernoctábamos fuera.

[Caminar de acuerdo]

Yo resistía el nombramiento del señor Lafragua, no tanto por sus hábitos, que, según he oído decir, se diferencian mucho de los míos, cuanto por el

principio, calificado por mí de error, que el señor Comonfort pretendía establecer, sobre que el gabinete se compusiese mitad de moderados y mitad de puros; creía y creo que entre nosotros no debía atenderse ni aún mentarse tal distinción, y que debía componerse el gabinete de personas que pudieran caminar de acuerdo, sin buscarles antecedente filiación. Confesaré también un mal pensamiento que tuve y me asaltó tan luego como el señor Comonfort me habló del ministerio de Gobernación. Fue el de que dejándome con el nombre de jefe del gabinete, si al fin entraba yo a él, se me excluía de la intervención directa que, en caso de admitir, deseaba yo tener en el régimen del interior del país. Confieso esta mi ambición, que por la primera vez de mi vida he tenido específica, determinada cuando en cualquiera otra circunstancia sólo he tenido en general la de ser útil, así como otros tienen la de ser sabios, ricos, poderosos, valientes, hábiles, etcétera. Yo ambicioné para la hipótesis de que fuera ministro, influir directamente en la política interior, y no reducirme a ser un duplicado del ministerio de Hacienda (pero sin tesoro), para arreglar reclamaciones, cumplimientos y ceremonias, más uno que otro rarísimo negocio verdaderamente diplomático. Y quise la intervención directa porque soy de esas personas que no dan consejo si no se les pide, y que no creyéndose tutores ni guardianes de los otros, no están pendiente de lo que esos otros hagan o no. Todo lo que no es deber mío, dejo que los otros lo cumplan como sepan, y de seguro que hubiera dejado plenísima libertad al que hubiese sido ministro de Gobernación, sin entenderme yo en su ramo sino cuando él me lo pidiera. Respeto las luces superiores, probidad y mérito del señor Lafragua, con cuya amistad me honro desde el año de 42; y si rechacé su nombramiento fue porque reprobaba el sistema de equilibrio en el gabinete, y porque deseaba yo en él mayor acción. No reflexionaba en la fatuidad con que naturalmente aparecía yo, queriendo encargarme de los dos ministerios; y lo que es peor y declaro para mi mayor confusión, que ahora que en la calma lo considero, ahora que ya han pasado las excitaciones del momento, todavía tengo la presunción de sentirme con fuerzas para haber procurado el desempeño de ambos.

[Puntos de diferencia]

El señor Comonfort me calificaba de puro, y yo me abstuve de hacer toda calificación de su persona. Hasta ese día yo había visto con suma indiferencia esa subdivisión del partido liberal, considerándola por mis reminiscencias fundadas más bien en afecciones personales a los señores Pedraza y Gómez Farías, que no en los ligeros tintes que creí lo separaba. Habiéndome conservado extraño a la política, siempre que no estaba en servicio público; no habitando en la Capital sino sólo en los períodos en que alguna elección me imponía tal deber, y conservando en las votaciones de ambas cámaras una especie de independencia salvaje, que puedo decir que forma parte de mi carácter, nunca tuve ocasión ni voluntad de meditar ni estudiar los puntos de diferencia entre puros y moderados.

Había, sí, creído distinguir, aunque de un modo vago, que aquéllos eran, sí más activos y más impacientes, más cándidos y más atolondrados, mientras que los otros eran, sí más cuerdos y más mañosos, más negligentes y tímidos; pero nunca había profundizando estas observaciones. Debo al señor Comonfort, con ocasión del largísimo debate que entre nosotros se sostuvo sobre esto, haber aclarado un poco mis ideas, y poder decir hoy que vislumbro yo mejor lo que los divide, que soy decididamente puro, como aquel señor se dignó llamarme, y del modo que yo lo entiendo. Mis amistades políticas, sin embargo, habían sido siempre las de los llamados moderados, y mi conducta pública y privada, sin habérmelos propuesto nunca por modelo, más parecida a la de éstos.

[Cuestión de matices]

Comprendo más clara y fácilmente estas tres entidades políticas: progresistas, conservadores y retrógrados, que no el papel que en la práctica desempeñan los moderados. Los progresistas dicen a la humanidad: “Anda, perfeccionate”, los conservadores: “Anda o no, que de esto no me ocupo, no atropelles las personas, ni destruyas los intereses

existentes"; los retrógrados: "Retrocede, porque la civilización te extravía". Los unos quieren que el hombre y la humanidad se desarrollen, crezcan y se perfeccionen; los otros, admitiendo el desarrollo que encuentran, quieren que quede estacionario; los últimos, admitiendo también, aunque a más no poder, ese mismo desarrollo, pretenden que se reduzca de nuevo al germen. Los conservadores, consintiendo el movimiento y regularizándolo, serían la prudencia de la humanidad, si reconociesen la necesidad del progreso y en la práctica se conformasen con ir cediendo gradualmente; única condición, la de consentir en ser sucesivamente vencidos, que volvería sus aspiraciones y su misión legítimas, como lógicas y racionales; pero en la práctica nunca consienten en ser vencidos: los progresos se cumplen a pesar de ellos, y después de derrotas encarnizadas, y haciendo perder a la humanidad tiempo, sangre y riquezas; con sólo conservar el estado de actualidad (*statu quo*) se convierten en retrógrados. Estos son unos ciegos voluntarios que reniegan la tradición de la humanidad y renuncian al buen uso de la razón.

[Nunca es tiempo]

¿Qué son en todo esto los moderados? Parece que deberían ser el eslabón que uniese a los puros con los conservadores, y este es su lugar ideológico, pero en la práctica parece que no son más que conservadores más despiertos, porque para ellos nunca es tiempo de hacer reformas, considerándolas siempre como inoportunas o inmaduras; o si por rara fortuna las intentan, sólo es a medias e imperfectamente. Fresca está, muy fresca todavía la historia de sus errores, de sus debilidades y de su negligencia.

Los liberales se extienden en la teoría hasta donde llega su instrucción, y en la práctica hasta donde alcanza la energía de su carácter, la sencillez de sus hábitos, la independencia de sus lazos sociales o de sus medios de subsistencia.

Nosotros no estamos aún bien clasificados en México, porque para muchos no están definidos ni los primeros principios, ni arraigadas las

ideas primordiales; buenos instintos de felices organizaciones, más que un sistema lógico y bien razonado de obrar, es lo que forma nuestro partido liberal. Nada más común que encontrarse personas que defienden el principio, y que en la aplicación teórica o práctica inciden en groseras contradicciones. Verdad es que en el estado actual de la humanidad y bajo un punto de vista más genérico, pocas personas hay cuyo conjunto de ideas forme un todo razonado y consecuente; pero al menos en una sola serie de ideas, en los puntos prominentes se debían evitar las contradicciones. ¡Hay, sin embargo, liberales que creen que el hombre es más inclinado al mal que al bien, que el pueblo debe estar en perpetua tutela, que los fueros profesionales deben extenderse a todos los actos de la vida, que convienen los monopolios y las alcabalas, con otras mil lindezas de la misma estofa! Por otra parte, en todos los partidos hay buenos y malos, exagerados y simplemente entusiastas, moderados y tibios, atrasados y morosos. Las mismas calificaciones de puros y moderados son presuntuosas e inadecuadas.

La moderación y la pureza son dos virtudes: poseerlas una ventaja, y desapreciarlas un extravío. ¡Cuántos moderados hay con pureza! ¡Cuántos puros con moderación! Aún en cada subdivisión de un mismo partido, aún en las subdivisiones mejor marcadas se encuentran todos los tintes. ¿Es acaso imposible en la política reunir una convicción bastante profunda para que muera sin transigir y bastante prudente para contenerse en límites racionales? No, no, mil veces no, ¡Pobre del género humano si así fuese! No sólo se encuentra esta feliz combinación, sino que es más común de lo que se cree. Todos los días se ven ejemplos de ella en la vida común

[Vida y acción]

Nada de esto, sin embargo, discutimos el señor Comonfort y yo (suplico se me perdone la digresión): entendiendo cada uno lo que podía por puro o por moderado, el Sr. Comonfort quería que en el gabinete hubiera tanto de unos como de otros. Yo sostenía que puesto que ambos confesábamos que entre moderados y puros había alguna diferencia, y

puesto que debíamos de marcar más esa diferencia porfiando sobre ella, no se debía equilibrar el gabinete. Yo decía: que toda colisión entorpece cuando no paraliza el movimiento; que en la economía del poder público, tal como ahora se entiende aún en un régimen constitucional, el Ejecutivo es el movimiento, la acción; que en una dictadura, tal como la que por la naturaleza de las circunstancias íbamos a ejercer, el Ejecutivo debía ser todo, movimiento y vida, si no quería suicidarse o perder la ocasión de ser útil; que el equilibrio es justamente una de las ideas opuestas a la de movimiento, etcétera. No pudiendo convenirnos en las primeras horas de esa mañana, nos fuimos a ver al señor Presidente, quien oyó con benevolencia y calma el resumen de nuestras anteriores discusiones, y cuando me convencí que en la discusión nada adelantábamos y que no hacíamos más que repetirnos, di las gracias al señor Presidente por su confianza, le aseguré que vista la imposibilidad en que me hallaba, renunciaba al honor de servirle, y pedido su permiso me retiré, dejándolo con el señor Comonfort.

Muy contento, satisfecho de haber salido a tan poca costa del compromiso en que me había puesto la confianza del señor Presidente, sólo pensaba yo en pedir al consejo la admisión de la renuncia que pensaba hacer, cuando siendo ya tarde me avisaron que el señor Comonfort deseaba verme. Inútil es que repita cuanto volvimos a decir; explanamos ampliamente nuestras ideas, y varias veces rogué al señor Comonfort que fuese a avisar al señor Presidente que yo me excluía de todo participio en el nombramiento del ministerio, y que ya no sabía cómo explicarme. Bien entrada ya la noche, habiendo el señor Comonfort oído por la cuarta o quinta vez que estaba yo agotado, que ya no sabía cómo variar la repetición de las mismas cosas que habíamos estado diciendo sobre mi ignorancia de la situación, sobre el equilibrio del ministerio, etcétera, me dijo que yo había vencido, a pesar de mi protesta de no pretender triunfo alguno; que desistía de su sistema y de su candidato, pero que yo entraría al ministerio y éste se compondría de solo nosotros cuatro. Entonces, no pareciéndome ya decente resistir yo cuando se me cedía, me comprometí a servir los ministerios de Relaciones y Gobernación, y resolvimos ir a invitar a nuestros compañeros y avisar al

señor Presidente, terminando yo esta conferencia con estas o semejantes palabras: “Pues bien, seré ministro, aunque con gran riesgo de tener que dejar de serlo dentro de poco”.

[Ánimo firme]

Llamaba yo a esto riesgo, porque dos o más veces había yo explicado en los debates, que los que aceptasen las debían hacer con el ánimo firme de permanecer al lado del señor Álvarez durante toda su administración, en razón de que la salida de cualquiera de los ministros desacreditaba al gabinete y daba por lo menos a pensar que algo malo había visto dentro de él quien salía, cuando procuraba sacar a salvo su reputación.

Vimos a los señores Juárez y Prieto, quienes también nos resistieron con buenas razones. Yo no olvidaré nunca (y esta es buena ocasión para hacer constar el hecho y con él mi gratitud perenne) que ambos señores, pero más cordialmente el señor Juárez, se resignaron a ayudarnos, por ser Presidente el señor Álvarez, y nosotros quienes rogábamos y en cuya compañía iban a trabajar.

Avisado el señor Presidente, confirmó gustoso, según se digno mostrárnoslo, el nombramiento que habíamos concertado.

El Sr. Comonfort nos aseguró que había convenido con el señor Presidente que iría a México al siguiente día, y que era necesario que fuese ampliamente facultado para determinar lo que allí fuese preciso para el restablecimiento de la tranquilidad. Convenimos entonces en que cada ministro lo facultarla por su ramo, dudando todos o al menos yo, de la regularidad que habría en delegar nuestras facultades. Así marchó al día siguiente a la capital teniendo yo la satisfacción de ver poco después que los temores sobre la situación de ella eran infundados, como lo había dicho a cuantos quisieron oírmelo. En efecto, antes de la llegada del señor Comonfort, ya se había entregado el mando al Sr. García Conde, garantía que pareció suficiente puesto que así continuó después.

II

Nosotros creíamos que la permanencia del señor Comonfort sería de uno o dos días, y cuando supimos la pacificación anterior a su llegada, no dudamos que inmediatamente se volvería al lado del señor Presidente. Comenzamos, pues, o a lo menos comencé yo, a escribirle en ese sentido casi diariamente, exponiéndole los graves inconvenientes de su lejanía. Llegué hasta preguntarle en una carta si pensaba organizar la República o en establecer dos gobiernos. Nada quiero decir de algunos de sus decretos, como la supresión de la orden de Guadalupe, cuya urgencia no comprendo todavía. Estando en México pensó en hacer ir allá al señor Prieto, lo que resistimos constantemente. Por fin, vino y lo recibimos con el gusto y cordialidad que debíamos.

En la misma noche del día de su llegada mostraba al señor Juárez una carta recibida de México y escrita por el señor García Conde. Cuando yo entré inmediatamente me la hizo leer.

Confieso que su lectura me hizo muy desagradable impresión. En ella se pintaba como peligrosísima la situación de México, y el señor García Conde no le veía más remedio que la inmediata vuelta del señor Comonfort. Cuando terminé la lectura, arrojé la carta sobre la mesa, diciendo: “Me parece muy torpe”.⁹ El señor Comonfort, sin embargo, hizo valer la autoridad de quien la escribía, y el abismo a cuyo borde estábamos, concluyendo con la necesidad de volverse luego. El tiempo nos confirmó que ni el mal era grave, como a algunos parecía, ni el remedio eficaz el que se quería aplicar, pues que el enfermo se curó por sí solo.

Unánimemente nos opusimos a este segundo viaje, declarando, como un ultimátum de nuestra parte, que de no volver todos juntos, ninguno iría, y resolvimos: que siendo el señor Comonfort la persona de

⁹ El original del borrador de *Mis quince días de ministro*, que hemos tenido a la vista, gracias a don Genaro Rubio, dice: “que a la vez que la carta del Sr. García Conde, llegó otra del Sr. Juan Hidalgo dirigida al Sr. Presidente. Ambas por correo extraordinario” (Nota de Ángel Pola).

más confianza con el señor Presidente, emplease todos sus esfuerzos para resolverlo a ir cuanto antes a la dizque peligrosa ciudad. Recuerdo que, entre otras cosas, dije al señor Comonfort: “¿Cómo, señor, se asusta cuando le dicen que hay un toro de petate, usted que ha combatido al lobo rabioso cuando tenía las garras afiladas?”.

En la mañana del día siguiente y muy temprano nos reunimos de nuevo, y el señor Comonfort nos dijo: que investido como estaba del doble carácter de ministro de la Guerra y de general en jefe [del ejército de la revolución], consideraba que sus obligaciones eran diversas e incompatibles por las circunstancias: que su investidura de general en jefe lo hacía responsable de la tranquilidad pública: que no sabría qué responder a la nación si aquella se viese perturbada, pudiendo probársele que en su mano había estado conservarla: que por eso, y reservándose esta investidura, renunciaba la cartera de la Guerra, para quedar más expedito y volver a México, porque así creía que podrían sus servicios ser más útiles a la revolución. Luego que concluyó su exposición, dejando mi asiento, le supliqué dijera cuáles eran los síntomas que en nosotros advertía capaces de hacerle juzgar imposible su permanencia en nuestra compañía. “Hablo de síntomas –dije-, y no de hechos, porque, ¿qué hemos hecho durante la ausencia de usted que de tal modo merezca tan severa reprobación, o que le impida seguir con nosotros? Nada hemos hecho, nada de sustancia, aunque he juzgado estos los momentos más preciosos: nada, temiendo encontrarnos en contradicción con el gobierno que usted iba estableciendo en México. Y usted ¿qué ha hecho en punto a soldados? No lo sé, ni quiero saberlo, porque su ramo, usted lo desempeña como sepa. Pero en esto no es tal mi torpeza que ignore que usted comenzó su reforma por una ley insuficiente de desertores, cuando habíamos hablado y aún puedo decir convencido, pues que no lo contradijo usted, que por tal ley de desertores y amplísima, debía acabarse tal arreglo. Simples trámites y medidas sin trascendencia han sido todos nuestros actos. El nombramiento de gobernadores, puntos sobre el que urgía la opinión pública, lo he consultado con usted, mandándole mi proyecto a México, y aún está pendiente porque usted

tiene la ciencia de hechos que deseo aprovechemos...¹⁰ ¿Qué es, pues, lo que obliga a usted a renunciar el ministerio? ¿Y qué debemos esperar sus compañeros para mañana, para de aquí a ocho días, para después que habrá llegado el caso de tomar medidas sin consulta ni venia de usted, y que por desgracia, para nuestra paz, le parezcan desacertadas? (Desde ese momento conocí que yo estorbaba y dudé un instante si convendría esperar a que me echaran). Sería yo quien renunciara, pues que no soy aquí sino un intruso”.

La discusión, variando de medios y a veces de objeto, se prolongó inútilmente todo el día. Durante ella me echó en cara el Sr. Comonfort mi exclamación de la noche anterior: “Me parece muy torpe”. Por toda explicación le di el ningún fundamento que yo reconocía a sus temores y

¹⁰ He aquí algunos fragmentos de una carta inédita del general Comonfort al señor Ocampo, fechada en México el 14 de octubre de 1855, los cuales fragmentos ratifican lo que el autor dice del general Comonfort:

“Acaba de entregarme el Sr. don Joaquín Moreno las dos apreciables de usted del día de ayer, que tengo la satisfacción de contestarle.

Estoy por el indulto general para desertores, pero éste debe ser acompañado de otras medidas que necesito acordar con ustedes, no puedo darlo.

Sobre el nombramiento de gobernadores he dado a usted francamente mi opinión y pensaba explicarme más con usted a nuestra vista la semana que entra, más supuesto que hoy deben de haber quedado nombrados réstame sólo apoyar la determinación de usted.

Lafragua irá a Francia si usted quiere nombrarlo, y si usted quiere esperarme para que hablásemos sobre nombramientos de los demás ministros y cónsules se lo agradecería mucho, pues que de dichos nombramientos podríamos sacar ventajas a favor de la misma resolución.

No he puesto en posesión del gobierno del Distrito al Sr. Miñón porque el acuerdo de el excelentísimo señor Presidente no se me ha comunicado por el ministerio respectivo, y porque no me parece prudente en estos momentos. A mi juicio Manuel Alas o Sabás Iturbide serían los más a propósito.

Mi convicción crece todos los días más sobre la necesidad que hay de que el señor Presidente se traslade a esta capital porque en esta circunstancia el tiempo se pierde y hay necesidad de acción en nuestras medidas; a fin de lograrlo me tendrán con ustedes la semana entrante sin fijarles días porque no es posible decirlo”. [Nota de Ángel Pola].

a los del señor García Conde, atribuyéndolos a exceso de celo, ya que no podía ni figurárseme que tales aprensiones eran poco sinceras. Dije que las cartas hubieran podido hacernos “el coco”, pero que ya no éramos niños, y que la peor de las persuasiones que conmigo podían emplearse era la amenaza, pues que de ordinario me confirmaba en la resolución contra la cual se me hacía.

[Calificación de Intruso]

En la noche repetí mi resolución de separarme del ministerio, mi calificación de intruso en una revolución en la que sólo de lejos y muy secundaria e imperfectamente había tomado yo parte. Mis compañeros todos me instaron amistosamente para que unidos soportásemos la situación, y el señor Juárez me dijo cosas que me enternecieron y me cortaron la palabra. Propuso el mismo señor, para terminar por aquella noche, que a otro día discutiéramos un programa, y así nos despedimos, bien resuelto yo a no ceder en mi resolución de separarme. Hablé de ella a algunos amigos; pocos me hacían justicia, entre los que el señor don Sabás Iturbide, cuya elevación de alma y entereza de carácter, eran para mí apoyo y fundamento; otros me hacían cargos graves por lo que llamaban mi deserción y el abandono que suponían que hacía yo de las deseadas reformas. Pero ¿era posible que permaneciese yo en una administración en que no tenía más título que la voluntad del señor Presidente, de la que no estaba muy seguro para el caso de antagonismo, y con una contradicción tan evidente por parte del que más derecho tenía a formarla; contradicción que ni siquiera esperó motivo plausible de desavenencia, o que tomó por tal la ocasión de resistirnos a su vuelta a México, vuelta tan no urgente que pudo permanecer aún con nosotros sin que estallara el soñado volcán de la capital? Con razón uno dijo, hablando del señor Comonfort en esta circunstancia: “Es el casero que viene por las llaves”. Resumen epigramático, pero exactísimo de la situación. Yo sentí bien que estorbaría mi inquilinato, pero entregué las llaves sin dudar.

Por dos veces, el Sr. Comonfort nos dijo: “Déjenme ustedes de general en jefe y como entonces cesa mi responsabilidad de gobierno, en mi calidad de soldado haré cuanto ustedes me manden”. Hasta se valió de un ejemplo muy expresivo.

[Entonces usted obedece]

Yo, que sin dificultad hubiera andado también ese camino, cargando con la responsabilidad que nunca he huido por mis actos, le dije en las dos veces: “Bien, pero entonces usted obedece al ministro de la Guerra que nosotros nombremos”. Y en ambas ocasiones me contestó que suponía que nosotros nombraríamos un ministro de la Guerra con quien pudiese entenderse. Debo, una vez por todas, manifestar que en todas nuestras discusiones había plena libertad, absoluta franqueza, inmejorable intención en bien del país y, al menos por mi parte puedo decirlo, entera buena fe, ninguna segunda intención, desprendimiento y desinterés perfectos. Creo que la memoria de estas conferencias será siempre grata a nuestro corazón y halagará siempre nuestro amor propio, y creo también que nos hubieran honrado mucho en el concepto de personas sensatas e imparciales que las hubiesen presenciado. Pero en estas dos ocasiones en que el señor Comonfort propuso quedar de simple jefe, me pareció notar que, sin que él lo advirtiera, sin que pudiera formularse siquiera interiormente su pensamiento, quería ser y no ser director de la cosa pública, cumplir y no cumplir ciertos compromisos personales, tener la gloria, si alguna había, y no la responsabilidad de la situación; me pareció notar en su ánimo ciertas miradas retrospectivas que hubiera deseado borrar con ciertas aspiraciones (no personales) del porvenir. Es muy posible que yo haya juzgado mal; tengo la experiencia de que frecuentísimamente me equivoco, y si asiento estas conjeturas es sólo para dar cuenta de la disposición de mi espíritu en aquellas horas solemnes. Debo también decir que durante todos nuestros debates me pareció el señor Comonfort, como siempre lo había conocido, patriota sincero y ardiente, hombre generoso y probo.

Al siguiente día, y conforme con la indicación del señor Juárez, nos volvimos a reunir, e interrogados por el Sr. Comonfort sobre si llevábamos nuestro programa, yo dije que no, como persona convencida de que todas aquellas fórmulas eran inútiles para que yo dejara el ministerio, y como quien ya llevaba en la bolsa el borrador de su irrevocable renuncia; el señor Juárez contestó igualmente que no. El Sr. Comonfort, repitiéndonos que estábamos con los fines de la revolución, nos leyó entonces un borrador de su programa (sería de desear que lo publicase), en cuya mayor parte estábamos en efecto conformes, mientras su enunciación se conservaba en las regiones vagas de la generalidad. Pero en tal programa había puntos cuya simple lectura me hubiera convencido de nuestro disentimiento, si necesidad hubiese yo tenido de esa convicción. Entre los últimos había artículos sobre los cuales ni los principios podían sernos comunes; y así, cuando el Sr. Comonfort, cambiando de medio dijo en una especie de epílogo, no escrito, que en nuestros principios, no ya en los objetos o fines de la revolución, estábamos de perfecto acuerdo, me fue indispensable contradecirle y ponerle como ejemplo la explanación de dos puntos.

Estos eran tomados de la guardia nacional: el primero, que se dividiría en móvil y sedentaria; el segundo, que el ser guardia nacional era un derecho pero que ninguno tenía el gobierno para obligar a este servicio a quien lo repugnase. Del primer punto ni quería yo explicación puesto que fui el primero (pueden consultarse los documentos de la época 1846) que había introducido entre nosotros la división de la guardia en movable, sedentaria y de reserva; pero después vi la suma necesidad que tenía yo de tal explicación cuando el señor Comonfort nos dijo que entendía por guardia móvil la que se compusiera de los proletarios (sic) y por sedentaria la que se formase de los propietarios. No menos nueva era para mí la teoría de que el ser guardia nacional era un derecho pero no un deber. En caso de que yo pudiera admitir esos sistemas truncos sobre el deber y el derecho, más bien que el de los utilitarios, preferiría para este punto de guardia nacional el de los místicos que sólo reconocen deberes y no derechos. En tal sistema evitaría a lo menos ese bárbaro absurdo llamado contingente de sangre.

[Sobre Derecho y Deber]

Yo hubiera de buena gana aprovechado la ocasión para explicar mis ideas sobre derecho y deber, y para demostrar, tanto así me alucino, que la fuente del derecho y del deber es la necesidad de las relaciones, y que por lo mismo, toda relación necesaria es derecho por el lado que ostensiblemente halaga, y deber por el que grava también ostensiblemente. De la necesidad que a veces tenemos de armarnos con los productos de la industria humana, ya que la naturaleza nos negó las pieles duras, las astas y colmillos, las pezuñas y espinas, los picos y las garras, reemplazando todos esos medios perfectos con la experiencia y la mano; del derecho natural de defendernos hubiera yo inferido y probado fácilmente el derecho y la obligación de ser guardia nacional. Nunca, sin embargo, hubiera podido encontrar buenas razones para que los pobres sacrificasen sin recompensa su tiempo, sus esfuerzos y su sangre en favor de los comparativamente ricos, ni por qué sólo entre propietarios y proletarios había de desempeñarse la defensa de una nación, ni tampoco por qué el gobierno no tendría derecho de hacer cumplir con sus obligaciones a los que las despreciaran. No nos eran, pues, comunes unos mismos principios al señor Comonfort y a mí, aunque en lo superficial nos fuesen comunes los fines u objetos de la revolución.

Puede servir también de ejemplo este otro dato: el Sr. Comonfort pretendía que en el consejo hubiera dos eclesiásticos, ¡como garantía del clero! No lo discutimos, el momento no era oportuno; pero cualquiera que tenga la razón fría convendría en que el consejo formado según el Plan de Ayutla, era de representantes, no de clases, sino de departamentos considerados como entidades políticas. Por otra parte, parece que el Sr. Comonfort se olvidaba en ese proyecto de que era miembro del gobierno, porque un gobierno cualquiera debe ser la suma de las garantías y asegurarlas a todos sus súbditos, permanentes o transeúntes, naturales o extranjeros. Él es la garantía por excelencia y quien piense hallarla fuera de él es un iluso o un necio. Ahora, si han de pedírsele garantías a la comunidad, en ese mismo hecho se reconoce que se tiene intereses contrarios a esa comunidad y la petición de tales

garantías es el acto de más insolente descaro, el más notorio que puede darse de lesa majestad nacional. Además ¿de qué modo dos eclesiásticos pueden ser garantía del clero? ¿Impidiendo la acción del gobierno cuando a aquél le convenga? ¿Dos eclesiásticos bastarían para maniatarlo cuando no estuviese impotente? ¿De qué parte del clero habían de escogerse? ¿De la que entre él mismo, ya por sólida e ilustrada piedad, ya por bastardas miras quiere las reformas, o de la parte que las resiste a todo trance y llama impiedad al sólo hablar de ellas? Para que fuesen siquiera el simulacro de tan quimérica garantía, no era el general en jefe del Plan de Ayutla, sino el clero el que debía nombrarlos a fin de que mereciesen su confianza. ¿Y las otras clases, ya que clases se habían de nombrar, y los otros intereses, qué garantía tenían...?

¡En verdad que es fecunda en observaciones tal especie!

[Deferencia al Señor Juárez]

Pero lo repito, no era aquél el momento oportuno de hacerlas; así y por abreviar, y porque sólo me presté a aquella reunión por deferencia, principalmente al Sr. Juárez, que la había propuesto, hice someramente algunas observaciones al programa, y luego dije: que como su lectura no me había hecho mudar de ideas, y como llevaba en la bolsa el borrador de mi renuncia, suplicaba a mis compañeros me permitiesen leerlo, a fin de que en el seno de la amistad, me dijese qué debía cambiarse para no perjudicar el Gabinete, de querer lo cual estaba yo muy lejos. De pronto no pareció mal a mis otros compañeros, pero oída una observación del Sr. Comonfort, convenimos en que se suprimieran tres palabras de la renuncia, cambiando una frase. El borrador decía: “He sabido entre otras cosas que la presente revolución sigue el camino de las transacciones”. La nota oficial dijo: “He sabido entre otras cosas, el verdadero camino que sigue la presente revolución”.¹¹ Cuando el Sr. Comonfort objetó la redacción primaria, creí que me desmentía, pretendiendo en aquel

¹¹ Ver anexo A al final de este documento, o enlazarse a él. [el Ing. Tamayo puso como anexos A y B, dos largas notas que Ángel Pola insertó en la edición que hizo de este documentos en su Biblioteca Reformista. HCHS].

momento no haber dicho en el día anterior el camino de las transacciones. Exaltado yo entonces, le repetí: que así me lo había dicho; que estaba yo en mi derecho, repitiendo con exactitud lo que había pasado entre nosotros, y que apelaba al intachable testimonio de los señores Juárez y Prieto. Tenía yo tan presente lo del día anterior, como si en aquel instante estuviera pasando.

III

Cuando el Sr. Comonfort me había dicho, hallándose en pie: “pues no, señor, la revolución sigue el camino de las transacciones”, le interrumpí, parándome también, y dije: “Ahora sí nos entendemos: encuentro en lo que acaba usted de asegurar una razón más para que me separe yo, yo que puedo considerarme aquí como intruso. Había creído que se trataba de una revolución radical, a la Quinet: yo no soy propio para transacciones”.¹² El Sr. Comonfort repuso: "Esas doctrinas son las que han perdido la Europa"; y yo, en vez de manifestar mi asombro por oír de su boca semejantes palabras, en vez de contestar que ni la Europa está perdida, ni son idénticas las doctrinas de Quinet y las de Cabet, Proudhon, Luis Blanc, etc., me contenté con repetir: "Pues yo no soy propio para transacciones". Me hería pues su observación, porque de pronto me pareció un mentís.

[La palabra transacciones]

Entró después en ciertas explicaciones sobre el camino de que había hablado el día anterior, recordando y reconociendo qué había dicho de las transacciones; pero que quiso decir ciertas consideraciones a las personas, etc.

Después de estos comentarios dijo: “suplico a usted que no use de la palabra transacciones”.

¹² Ver anexo B.

- ¿Quiere usted, le pregunté entonces, que ponga que la revolución sigue el camino de ciertas consideraciones a las personas?

- No, tampoco.

- ¿Pues el camino, en términos generales, que sigue la revolución?

- No, No.

- ¿Le parece a usted bien, entonces, que funde mi renuncia en que repentinamente he perdido la chaveta, y en que sin sentirlo, me he vuelto mentecato, puesto que callando mis verdaderas razones para hacerla, no encontré ni inventaré ninguna plausible?

Convenimos, por último, en que usaría de la palabra camino sin especificación y así lo hice, y en que, por instancias de los señores Prieto y Juárez, todos daríamos nuestra dimisión. Combatí la renuncia del señor Prieto con mi antiguo argumento de que la Hacienda es terreno neutral, y con mis razones y con mis ruegos le insté para que continuase. Todo lo resistió, alegando su necesidad de pensar ya seriamente en el porvenir de su familia, en el uso común de separarse todo el gabinete, cuando se separaba el considerando como su jefe, etc.

Mis compañeros pasaron a ver al señor Presidente, sin saberlo yo, y en una larga sesión arreglaron con S. E. el nuevo ministerio, compuesto, según se me dijo en la tarde, de los señores Cardoso, Arriaga, Juárez, Comonfort, Prieto y Degollado; y resucitando así los ministerios de Gobernación y Fomento que yo había procurado suprimir, y sin los cuales creo que bien puede pasarse la República, siempre que los ministros de Relaciones y de Hacienda quieran trabajar con tesón y método, El ministerio de Fomento, principalmente, me parece un error, atendido nuestro estado. Consolídense las garantías y gástese algo en superar los obstáculos que a la inmigración presenta la lejanía de nuestras mortíferas costas en la Mesa Central en que hay alguna vida, aprovechando principalmente ahora la alarma que las doctrinas del *nounozinjismo* deben producir en los emigrantes que de Europa piensen venir a Estados Unidos; dedíquense algunos presidios a unos caminos y contrátense otros en subasta pública, vigilando sus trabajos; divídase la hipoteca de las fincas rústicas, de manera que puedan éstas partirse en lotes accesibles a las pequeñas fortunas, para que no anden la propiedad y

el capital agrícola en diversas manos; refórmense los aranceles, bajándolos; quítense las alcabalas y monopolios; ábranse nuevas carreras para las ciencias exactas y de observación; déjese, sobre todo, plenísima libertad para que cada cual haga cuanto no perjudique a un tercero, y el fomento vendría por sí solo. Entre nosotros, en donde el movimiento es tan corto y los negocios y empresas tan pequeños, gastar tantos miles de pesos en sostener un ministerio de Obras Públicas, es comprar un instrumento más caro que la obra que con él debe hacerse, es querer un *fomento* adrede en su tanto igual a un *bienestar público* mandado hacer. ¿Por qué no instituir por ideas semejantes un ministerio de felicidad?

Cuando algunos amigos me refirieron lo que por tan festinado procedimiento se había convertido en mi destitución y el nombramiento de mis sucesores; confieso que me sorprendí, a pesar de que sigo en cuanto puedo el consejo de Horacio sobre no admirarse de nada; sentí, particularmente, que no fuesen mis compañeros los que me lo notificasen. El señor Prieto fue el primero que después me dijo el resultado; y si no hubiera yo tenido a medio concluir el nombramiento de gobernadores y el de... y ciertas supresiones... y el de otros señores del exterior, y si no hubiese temido que pareciera que mostraba un berrinche pueril, que no sentía, dejándolo todo en el estado que estuviese, de seguro que me hubiera ido inmediatamente a México, aun sin presentar mi renuncia, puesto que ya tenía sucesores, Absténgome de intento de escribir sobre esto toda reflexión, que no por eso dejarán de ocurrir a cualquiera persona que se digne leer estos imperfectos apuntes.

El domingo hice de todos mis nombramientos, supresiones y reformas de algunas legaciones, un solo acuerdo; y en compañía del señor Comonfort a quien había yo rogado fuese conmigo a ver al señor Presidente, di cuenta a este señor de todo lo hecho, leí en seguida el acuerdo que lo resumía, procurando que el Sr. Comonfort siguiese con la vista cada renglón de mí lectura y la di en alta voz mi renuncia que dejé en manos del señor Presidente. Deseando que el acuerdo se examinase más y sin estar yo allí, lo dejé al mismo señor pidiéndole lo firmara, si lo aprobaba definitivamente, y al Sr. Comonfort tuviese la bondad de recogerlo firmado y me lo entregase. Me despedí oficialmente del señor

Álvarez con cierta solemnidad, que hasta me pareció que lo conmovía, lo mismo que al Sr. Comonfort. Creo inútil entrar en más pormenores.

Mis antiguos compañeros de ministerio se vinieron a México; yo me quedé a esperar la sesión que el consejo debía tener el miércoles. Quería esforzar la renuncia que de él hice al entrar al ministerio, o recabar una licencia siquiera de dos meses, si tal renuncia no era admitida, como varios amigos me lo habían anunciado. Yo no encuentro palabras bastante enérgicas con qué censurar la costumbre por la que en la República nos creemos autorizados para faltar a todas las consideraciones, aún las de la simple urbanidad, a toda corporación a que lleguemos a pertenecer. Muy atentos aun con nuestros sirvientes domésticos, muchos de nosotros se creerían degradados si lo fuesen con sus iguales, luego que estos iguales forman cuerpo, y debían por lo mismo ser más considerados. Es un fenómeno que no puedo comprender, aunque lo he observado mil veces. Me quedé, pues, aun a riesgo de parecer ridículo (hasta ridículo parece ya cumplir con ciertos deberes) a esperar que el consejo se dignara tomar una resolución sobre mí. La renuncia no se admitió, pero conseguida nueva licencia por dos meses, he venido a cuidar de mí y a poner fin a mi destierro, que consideré duraba hasta que llegué a mi casa y vi mi familia.

A mi paso por México procuré visitar a mis antiguos compañeros, habiendo recibido visita de los señores Juárez y Prieto; pero no pudiendo encontrarlos de despedida, ni al señor Comonfort, les dejé cartas de ella. Quejábamele a este señor en la que dirigí, de que contase a algunos de sus amigos, así me lo habían asegurado, “que no podía ir conmigo porque yo trataba de ir a brincos”. Se fundaba mi queja en que no habiendo habido ocasión de que yo le expusiese *mi sistema de medios*, no lo consideraba con derecho para calificarlos ni en bien ni en mal. He recibido aquí su respuesta: en ella desmiente tal aserción contra mí; y todo lo explica por el empeño que algunos tienen en desunirnos; empeño, sin embargo, que yo no puedo sospechar en las personas de cuya boca lo supe y que con esta publicación sabrán a quién echar la culpa de este mentís.

He llenado, como mi corta prudencia me lo ha permitido, el deber que creo tenía de satisfacer a las personas que se habían dignado poner en mí su confianza. Dejo a su juicio calificar si es cierto, como lo dije en mi renuncia, que había llegado yo al terreno de las imposibilidades; y aunque a algunos les ocurran medios por los cuales hubiera yo podido conservar el puesto, no dudo que los habrán desechado como deseché yo algunos que se me indicaron por juzgarlos indecorosos e indignos. Si erré, lo siento mucho por mí, y por las personas que en mí confiaban; pero desgraciadamente yo no puedo juzgar sino por mi propio entendimiento. Espero, con el temor natural de la reflexión, pero con plena confianza por parte de la conciencia, el juicio de los contemporáneos y de la posteridad, si es que ésta llega a ocuparse de mí.¹³

Pomoca, noviembre 18 de 1855.

Melchor Ocampo

¹³ El periódico *La Revolución* en que primeramente se publicó este escrito, veía la luz pública en la Ciudad de México. A la vez, con el mismo nombre, se publicaba otro periódico en Guadalajara. [Nota de Ángel Pola].

Anexo A

Ministerio de Relaciones
Interiores y Exteriores

Excelentísimo señor Presidente Interino de la República

Excelentísimo señor:

Cuando nombrado confidencialmente por V. E. ministro de Relaciones, e invitado para formar el gabinete, hice presente la ignorancia culpable en que me hallaba sobre la situación de los hombres y las cosas. V. E. se dignó insistir en sus órdenes, hasta el punto y en términos de que hubiera sido necesario no ser hombre para rehusar por más tiempo el servirle. Pasados, pues, tres días, acepté el nombramiento oficial: la grande y vital necesidad que yo veía en aquellos momentos, era que el gobierno prontamente apareciese organizado.

Ahora comienzo ya a comprender la situación, y por las últimas y muy dilatadas conferencias que he tenido con el señor ministro de la Guerra, he sabido entre otras cosas, el verdadero camino que sigue la presente revolución. Yo lo suponía ya, pero no puedo dudarlo cuando el mismo señor ministro me lo ha explicado. Entonces, y muy detenido y fríamente, hemos discutido nuestros medios de acción, y yo he reconocido que son inconciliables, aunque el fin que nos proponemos sea el mismo.

Suponiendo ambos sistemas de medios igualmente acertados, como sin duda son igualmente patrióticos, hay de la parte del señor ministro de la Guerra los antecedentes de poseer toda la tradición y el espíritu del Plan de Ayutla, no menos que acabar de sellar con largos y muy meritorios sacrificios su decisión por la causa de la libertad.

Como en la administración los medios son el todo, una vez que se ha conocido y fijado el fin, he creído de mi deber, llegado como he al terreno de las imposibilidades separarme del ministerio de Relaciones, reconociendo que no es esta mi ocasión de obrar, porque yo no entraré en ese camino, y porque la naturaleza misma de lo adelantado que se está pide ya separarse de él.

Así, pues, que V. E. haciéndome la justicia de creer que he tomado una resolución invariable, y que la apoyo en mi convicción y mi conciencia, se dignará, como rendidamente se lo suplico, aceptar mi renuncia de la cartera que me había confiado.

Conviene que V. E. sepa, y aprovecho la ocasión de repetirlo, que en mí tiene un amigo apasionado, y que no por llenar las fórmulas de la urbanidad, sino por desahogar mi corazón, le pido acepte con mi gratitud por sus bondades, mi más estrecha adhesión y mis respetos.

Dios y Libertad. Cuernavaca, octubre 20 de 1855.

Melchor Ocampo

ANEXO B

[“¿Me quiebro pero no me doblo!”]

Permítaseme citar, entre otros que pudiera, estos dos actos de mi vida, que prueban eso mismo: que yo no soy propio para transacciones. A las ocho de la noche de un día de correo, siendo yo gobernador constitucional de Michoacán, recibí en copia los Tratados de Guadalupe. Por uno de sus artículos se establecía que las fuerzas americanas sostendrían a nuestro gobierno en caso de pronunciamiento contra él. Reconocí y confesé luego que tal artículo era diestro de ambas partes contratantes, y necesario si se quería conseguir el principal objeto del Tratado, la paz. Inmediatamente que lo leí, oficié al señor consejero decano, llamado por la Constitución en las faltas del gobernador, que a las ocho de la mañana siguiente se dignara pasar a recibirse del gobierno por juzgarme yo moralmente imposibilitado de continuar en él. Escribí también al señor Otero, que sin negar yo que en la sociedad hubiese alcaldes, verdugos y otros empleados así, yo no quería ser verdugo ni alcalde, ni unirme en ningún caso con los enemigos naturales de mi patria contra sus propios hijos, aun cuando éstos errasen. Al otro día entregué el gobierno, y dije a la Legislatura, ante la cual tenía pendiente mi renuncia desde que vi que era imposible la guerra, que me la admitiese o me castigase, porque ni un solo momento más continuaría yo en el gobierno.

Cuando se trataba de elegir Presidente al señor Arista, me opuse cuanto pude a su nombramiento, especialmente ante el señor Pedraza, a quien pronostiqué que si Arista era electo, volvíamos á las vías de hecho; puede atestiguarlo el señor Haro y Tamariz, quien me lo ha recordado después, y quien accidentalmente entró a visitar al Sr. Pedraza pocos momentos después de que yo lo había dejado. De esa administración hice yo parte en el Senado y en el gobierno de Michoacán, también por compromiso que no es del caso explicar, y apoyé al Sr. Arista cuanto me fue posible por el mismo temor de que, de lo contrario, volveríamos a las vías de hecho. Quién acertó y quién erró entre los que combatían y defendíamos tal administración, nos lo ha dicho ya una triste experiencia.

Cuando aquélla cayó y fue electo Presidente el señor Ceballos, tuvo la bondad, en la misma tarde del día de su elección, de escribirme una carta en la que me recomendaba que avisásemos el Sr. Zincúnegui (comandante general de Michoacán) y yo a los pronunciados, que bien podían volverse pacíficamente a sus casas sin temor de que se les persiguiese, porque, agregaba, que la revolución no debía terminarse con las armas. Le contesté que yo no veía, como S. E., ni creía que los pronunciados se fuesen a sus casas; que puesto que la revolución no había de castigarse, yo no era el hombre a propósito para el caso, porque no había de transigir con ella; **que mi carácter era tal, que prefería quebrarme a doblarme**,¹⁴ y que, en consecuencia, iba a dejar inmediatamente el gobierno para no servir de obstáculo al bien del país, ya que éste lo creía hallar en las transacciones. La otra parte beligerante transigió, y ya vimos todo lo que la República adelantó y ganó en el camino de las transacciones.¹⁵

¹⁴ Frase subrayada por el editor de la versión digital. HCHS.

¹⁵ En el borrador de *Mis quince días de Ministro* encontramos este aditamento: “El Sr. Ceballos, indignado acaso de que me atreviese a ver de modo distinto que S. E., al leer mi carta dijo; “Pues que se quiebre” y dio orden al Sr. Pérez Palacios, para que inmediatamente dejarse [sic] a Morelia, sin duda con el fin de que los pronunciados, que se hallaban en Pátzcuaro, vinieran a quebrarme, y conmigo a toda aquella desgraciada ciudad, que ningún delito tenía en mi falta de elasticidad. Por esta misma inflexibilidad dejé también el ministerio de Hacienda, pocos meses antes, pero no quiero distraerme y hacer más largo este escrito”. [Nota de Ángel Pola en la edición que hizo de este documento a principios del siglo XX. HCHS].

PROCLAMA DEL GENERAL ÁLVAREZ
AL TRIUNFO DEL MOVIMIENTO DE AYUTLA ¹⁶

Mexicanos:

Al aproximarme con fuerzas respetables a la capital de la República, en estas circunstancias graves y solemnes en que la nación se encuentra acéfala y expuesta a ser destrozada por la anarquía y encadenada a la voluntad caprichosa del más fuerte, creo de mi deber dirigiros la palabra para calmar vuestros temores sobre el objeto y deseos que me dirigen: temores justos y fundados, si se recuerda que en tantas cuantas revoluciones que se han sucedido en nuestro país, en el largo período de 25 años, se han hecho promesas que no se han cumplido, juramentos que se han traicionado, y la nación, que guiada por el deseo de mejorar la situación cooperaba al triunfo de revueltas, era engañada en sus esperanzas y recibía por único premio de su aquiescencia, la anarquía, la deshonra y la esclavitud. Testigo de tantos infortunios, disculpo vuestros recelos y quiero prevenirlos descubriéndoo con lealtad mis intenciones.

Sabéis, compatriotas, que restablecida en 1847 la forma de gobierno que la nación adoptó en 1824 para su régimen interior, el país comenzaba a marchar haciendo las reformas administrativas que eran indispensables para restablecer la paz y conquistar gradualmente los derechos que necesitan los mexicanos para ser verdaderamente libres, y aunque la carta de 24 no era la más adecuada para esta empresa por los contraprinicipios que contenía y que causaban el desnivel de la sociedad, sin embargo, los hombres juiciosos y patriotas esperaban purgarla de esos

¹⁶ Este documento manuscrito está dentro de un sobre que dice en su exterior “Autógrafo de Juárez. Manifiesto que escribió para don Juan Álvarez”. El examen del manuscrito convence que se trata de letra de Juárez.

vicios por medio de reformas lentas discutidas en la calma y sancionadas por los legítimos representantes del pueblo; pero la impaciencia de algunos, la falta de resignación de otros para someterse a las decisiones de la mayoría, y la mala fe de muchos, hicieron estallar la revolución de Jalisco, de que una facción astuta y maligna se supo aprovechar llamando a regir los destinos de México al hombre que tantas pruebas había dado de su incapacidad para gobernar. No obstante, la mayoría de la nación quiso dar una tregua a la resistencia para detener el curso de la guerra civil con la esperanza de que la edad avanzada, la experiencia y los reveses de la fortuna, haciendo más cuerdo al caudillo de la facción triunfante, lo inclinarían a escuchar los consejos sanos del patriotismo y a legitimar con medidas justas y prudentes el poder usurpado que ambicionaba. Aquella esperanza se alentó cuando en un documento solemne el general Santa Anna ofreció, a presencia del mundo entero, aceptar el poder a condición de emplearlo en beneficio de la sociedad sin permitirse venganzas por agravios infundados que fingió perdonar y sin proteger partidos ni facciones. Con promesas tan explícitas como halagüeñas, la nación toleró que se depositase en manos de aquel hombre el poder más amplio e ilimitado que jamás mexicano alguno había obtenido. ¡Promesas engañosas! ¡Vanas ilusiones que pronto se disiparon!

Testigos habéis sido, mexicanos, de que apenas se posesionó el Gral. Santa Anna de la silla presidencial de la República, cuando se convirtió en jefe y protector de la facción que ha deshonrado nuestra historia con sus excesos y que para dominar sobre esclavos envilecidos ha sacrificado, a su feroz encono, a los ilustres defensores de la libertad. Instrumento y cómplice de facción patricida, el Gral. Santa Anna comenzó su gobierno aprisionando y desterrando a ciudadanos pacíficos y honrados, sin otro motivo que el de satisfacer su deseo innoble de vengar supuestos agravios. De aquí nació la alarma y el descontento públicos. A las primeras reclamaciones que el patriotismo le hizo de la fe prometida, contestó con la hacha del verdugo y comenzó a correr la sangre de víctimas inocentes en Veracruz, en Guanajuato y en Yucatán. Y como si se quisiera agregar el insulto al agravio, se cubrieron las filas

del ejército con aventureros españoles y se solicitaron regimientos extranjeros para que el amor de la patria no detuviera la sangrienta cuchilla de los soldados del despotismo. Se hizo más: se desmembró el territorio nacional, vendiéndose por la miserable suma de 10 millones el valle de la Mesilla.

Esta serie de atentados, entre otros muchos, haría comprender al hombre menos avisado que se intentaba esclavizar a los mexicanos, desnaturalizándose la obra que sellaron con su sangre los padres de la independencia. ¿Y podía yo permanecer indiferente a la vista de tanta ignominia? ¿Yo que había sido colaborador de aquellos héroes ilustres, debía resignarme a ver malogrado el fruto de sus afanes y sacrificios? No, compatriotas. El amor de mi Patria y el deseo de ver a mis conciudadanos felices bajo los auspicios de la libertad y de la paz, reanimaron mis fuerzas abatidas por la edad y por las enfermedades, y no vacilé en ocurrir al llamado de los valientes ciudadanos que en Ayutla y en Acapulco, lanzaron, los primeros, la voz de libertad y guerra a la tiranía. El programa que se me presentó llenaba mis deseos porque en su triunfo no sólo veía la caída del hombre que en su loca temeridad creía pender de su voluntad el destino de los mexicanos, sino la destrucción de los abusos y principios antisociales que dando al menor numero beneficios y preeminencias con perjuicio de la comunidad, mantienen al país en constante agitación conduciéndolo a la degradación y a la muerte. Preveía que si la Providencia coronaba mis esfuerzos con la victoria, tendría la dulce satisfacción de ver a mi patria marchar próspera y feliz por la senda de la libertad y de la civilización y, si la suerte me era adversa, llevaría a lo menos al sepulcro, el consuelo de haberme sacrificado en defensa de sus sacrosantos derechos.

Con esta resolución me lancé al combate como se lanzó Hidalgo en 1810. Combate desigual pero noble y glorioso, porque contra los elementos formidables que la tiranía había reunido para sostener su despótica dominación, yo no tenía que un pueblo inerme; pero un pueblo que tenía la conciencia de sus derechos y quería ser libre. Se emprendió una lucha cruel, una guerra sin cuartel de parte del despotismo que juró mi exterminio y el de todos los que osaban hacer frente a sus demasías.

Llenáronse las prisiones de nuevas víctimas, se levantaron cadalsos en todas partes, se aumentaron las listas de proscripciones y destierros, y la delación, el incendio, el robo y el asesinato fueron autorizados y premiados con escándalo del buen sentido. Mas estos criminales atentados no bastaron a extinguir la chispa que brotó en Ayutla. La guerra era contra la nación y por esto es que los golpes del despotismo revivían el entusiasmo de los patriotas que cada (día) saltaban a la arena por todos los ángulos de la República, hasta que, generalizado el incendio después de una sangrienta lucha de 18 meses, el tirano, sobrecogido de espanto, buscó su salvación en la fuga, dejando a los cómplices de sus atentados la tarea infame de fomentar la anarquía y abrazar el partido de la revolución para ahogarla después con más facilidad y a mansalva. Ellos lo han procurado y no cesan de trabajar para realizar sus criminales designios. Se lisonjean de que la división de los patriotas les ofreciere el triunfo y la venganza; pero por fortuna la revolución se dio una enseña que la guiase para no extraviarse en su marcha y se creó una ley cuya exacta observancia debía salvarla de los embates de la anarquía y del aspirantismo. Esa ley salvadora es el Plan de Ayutla que juré sostener y he sostenido. Fiel a mis juramentos, como jefe de la revolución, la he venido a cumplir nombrando y convocando a los representantes del pueblo para que elijan al ciudadano que deba regir los destinos del país.

Luego que se instale el nuevo gobierno nacional, la revolución quedará consumada y yo terminaré mi sagrada misión ofreciendo al primer magistrado de mi patria el acatamiento que le es debido, mi profunda sumisión a sus altas determinaciones y mi débil pero sincera cooperación para sostener las reformas útiles y saludables que deban hacerse y que la patria demanda para afianzar su libertad, consolidar su independencia y procurarse la dicha de que es digna por sus elementos.

Habéis ya visto, mexicanos, los motivos que me han conducido a este lugar y las intenciones de que estoy animado. He cumplido mi deber luchando por la independencia y libertad de nuestra cara patria. A vosotros corresponde conservar esos preciosos objetos cooperando con vuestros esfuerzos al sostén de las autoridades que el voto público encargare la dirección de vuestros destinos y respetando los derechos del

hombre, sean cuales fueren sus opiniones, sea cual fuere su origen, Y si el despotismo osare otra vez levantar su estandarte entre vosotros, uníos y volad al combate con la seguridad de que el triunfo será vuestro, porque el pueblo que unido pelea por su libertad, es invencible. Tened presente y no olvidéis jamás que nuestros padres conquistaron la independencia sin necesidad de extranjero auxilio y que nosotros hemos reconquistado hoy nuestra libertad siguiendo el noble ejemplo que nos dejaron. Conservad esta gloria que, felices o desgraciados, honrará siempre nuestra memoria y formará el orgullo de nuestros hijos. Conciudadanos: próximo al sepulcro, pocos días me restan de vida, pero si en el momento del peligro pudiere aún empuñar la espada con que tantas veces he escarmentado a los tiranos, contad con vuestro compatriota y amigo.

(Noviembre de 1855)

(General Juan Álvarez)

CRISIS MINISTERIAL POR LA RENUNCIA
DE GUILLERMO PRIETO

México, noviembre 17 de 1856

Señor licenciado don Manuel Doblado

Compañero y amigo muy querido:

Estamos otra vez en crisis ministerial por la renuncia de Prieto, quien no quiere continuar en el ministerio si no se le deja en absoluta libertad para llevar adelante su programa. Hoy al medio día se leían en junta de ministros las condiciones que puso y no he sabido el resultado de la conferencia, porque una ocupación urgente me lo ha impedido. Tal vez continuará por unos días, mientras llega [Ponciano] Arriaga, a quien esperan con grande entusiasmo los del partido puro, porque creen que Prieto, Arriaga y Juárez formarán mayoría en todas las cuestiones y se llenarán las exigencias de la revolución.

Comonfort, hombre de contemplaciones, ve que pierde terreno formando parte del gabinete y tengo entendido que si no hay un pronto cambio limitará sus pretensiones a tener el mando militar de todas las fuerzas que se acantonarán en el interior.

Muy mala impresión ha hecho en ésta la tropa del Sur y, muy particularmente, la oficialidad que es gente toda del pueblo, a juzgar por su traje. Pocas son las simpatías que hay por ellos y todo el mundo confiesa que la edad y estado de salud del señor Álvarez, dejando a un lado otras consideraciones, no le permiten hacer un buen Presidente en una época en que los vencedores y vencidos necesitarán enfrenarse para no caminar violentamente a la escisión.

Con ansia espero el próximo correo para saber algo relativo a esos lugares, pues yo no he perdido todavía la fe de que esto se salve, habiendo mexicanos que conserven algún amor a su Patria.

Deseo a usted que se conserve bueno y ordene cuanto sea de su agrado a su muy adicto amigo y servidor q. b. s. m.

Rafael Martínez de la Torre

CONTINÚA EL DESACUERDO EN EL GABINETE

México, noviembre 17 de 1855

Señor don Manuel Doblado
Guanajuato

Siempre querido Manuel:

Hoy recibirás mi última de 14 del corriente, en la que te participó el desenlace que tuvieron aquí los sucesos relativos a Comonfort, y como por ellos verás que nuestras esperanzas se desvanecieron, no creí prudente ni cuerdo enseñarle la tuya del 12.

El desacuerdo en el gabinete es cada vez mayor, como debes suponer. Ayer renunció Prieto, resuelto, según me ha dicho Mariano Yáñez, a no volver al ministerio, admítanle o no la renuncia, y sé que los hombres de la situación están haciendo grande fuerza de vela para conseguir que don Valentín (Gómez Farias), de feliz memoria, lo sustituya, para que todos podamos decir en coro: "Si malo es San Juan de Dios, peor es Jesús Nazareno", (El Lic. Benito) Juárez está también a marcharse y esperará ocho a diez días. Arriaga no aparece. (Miguel) Arriola (ministro de Relaciones) es una perfecta nulidad. Quedan pues, don Juan (Álvarez), con (el Lic. Anastasio) Zerecero, (José María) del Río, (Francisco de P.) Cendejas y compais, tan ignorantes como imprudentes y locos, siendo algunos de ellos bribones por añadidura, y a la cola una chusma de pintos indecentes y degradados, que son la mejor representación de este infeliz país.

¡Yo no sé que signo maldito nos persigue y que nos hace victimas del robo, del pillaje, de la prostitución y de la inmoralidad, unas veces y otras de la ignorancia y aun de la barbarie y de la brutalidad! ¡Oh, te morirías de vergüenza, como nos hemos muerto todos, al ver las hordas

de salvajes que se llaman Ejército del Sur, y en cuyo poder se encuentra hoy la capital de la República! ¡Ya querría yo que fuesen los de Atila, porque siquiera nos dominaría el soldado feroz, pero valiente: éstos son tan bárbaros y tan brutos como aquéllos y, a la vez, tan imbéciles y tan degradados como el negro! No entiendo qué sucederá con nosotros si la salvación no nos viene de por allá; aquí esto es absolutamente perdido.

Hoy giro contra ti por \$ 142,40, a tres días vista; pero debo advertirte, para que no extrañes el exceso en el giro, que 30 pesos corresponden a los gastos de camino que tiene que hacer nuestro colegial, y el resto, que son \$112,48, pertenecen a mi tutorado, don Juan Contreras, que me haces favor de cobrarle a Ramón Alcázar, para quien mandaré el recibo de Contreras por el próximo correo.

No ocurre por ahora otra cosa y, quedo, como siempre, tuyo.

Manuel Silíceo

COMONFORT SE MUESTRA LEAL Y RESPETUOSO CON EL
GRAL. ÁLVAREZ

Reservada

México, noviembre 10 de 1855

Excelentísimo señor gobernador don Manuel Doblado
Guanajuato

Mi muy apreciable amigo y señor:

Me he impuesto de la estimable de usted, fecha de anteayer, que por extraordinario he recibido, y a la verdad que han pasado algunos días antes que pudiera resolver lo que debía contestarle, porque los puntos que me toca en ella son tan graves, las circunstancias que nos rodean tan difíciles, que una determinación poco meditada podría, en vez de salvarnos, conducirnos a la más completa ruina.

Tengo muy presente las diversas manifestaciones que se ha servido hacerme de cuáles son sus ideas respecto de la cosa pública y cuáles son sus convicciones respecto de mi persona, y yo, con igual franqueza a la que se ha dignado usted dispensarme, le he hecho algunas reflexiones en cuanto a éstas, después de consagrarle un voto de reconocimiento, el más sincero, y le he demostrado, en cuanto a aquéllas, el acuerdo que existe entre nosotros, así en principios como sobre la elección de medios para levantar la situación y hacer algo bueno en favor de este desgraciado país. Pensando pues bajo unas mismas influencias, cada uno a su vez examina esa misma situación, ve el Plan de Ayutla y ve la marcha actual de la administración y al fin convenimos desde luego en que va muy atrás de lo que, según aquél, debiera ser; comprendemos que de este modo se llenan muy a medias las exigencias de la época y calculamos que si con

empeño no se trabaja en allanar el camino, destruyendo los obstáculos que lo embarazan, más que probable es que la nación llegue a verse en un conflicto supremo.

Sin embargo, tales circunstancias, que son hijas, en mi concepto, de diversas causas, en el de usted no conocen otro origen que el actual personal del gobierno, que, considerándolo sin prestigios, cree que debe variarse entrando yo a remplazarlo, porque se me supone el hombre llamado por el voto público para dirigir la nave del Estado. Agradezco ciertamente el elevado concepto que de mí tiene usted y lo estimo tanto más cuanto que recibo una nueva prueba de su amistad, que me honra demasiado. Pero aun dando por cierto que tal fuere la idea que de mí se tuviera en todo el país, se opondrían mil consideraciones justísimas a un paso como el que usted me indica; por ejemplo, ¿sería decente que yo empujase al señor Álvarez a las montañas del Sur para ocupar en seguida un puesto que le destinó ya la Providencia? No, sin duda; además, usted no puede desconocer estas dos verdades: primera, que el estado en que la revolución, al triunfar, encontró al país, era tan embarazoso, que difícilmente habría hombre, por grande que fuera su popularidad, por privilegiada que fuera su inteligencia, que no se viera detenido ante la infinidad de elementos contrapuestos que impedían la iniciación momentánea de las reformas que ofrece el Plan de Ayutla; segunda, que no llevamos más que un mes de administración, tiempo en que apenas puede tomarse conocimiento de los negocios, tiempo en que apenas pueden combinarse algunas medidas administrativas, tiempo, en fin, en que no puede aún juzgarse los actos de un gobernante. Pues bien, si esto es así ¿con qué antecedentes se justificaría la pretensión de separar al hombre público cuyos actos no pueden ser calificados todavía? Añada usted a esto la gratitud nacional, a que justamente se ha hecho acreedor el señor Álvarez, como primer jefe de la revolución que ha triunfado; la confianza que toda la nación ha tenido en la rectitud de sus intenciones, y la ilimitada que él, con tanta bondad, me ha dispensado públicamente, y hallará sin duda que a la injusticia se agregaría la ingratitud y acaso el crimen, presentando de nuevo el odioso ejemplo de que los libertados se

conviertan contra su libertador, ejemplo que comienza a manchar la historia nacional desde las primeras páginas de nuestra independencia.

Tenemos todavía que examinar la cuestión bajo otro punto de vista. No se necesita más que dirigir una ojeada sobre la actualidad para conocer que la República es un edificio de arena que por todas partes amenaza desmoronarse y si en este estado sufriera un sacudimiento, ¿cuáles serían los resultados? Claro es: la destrucción completa de una obra cuya existencia depende exclusivamente de la suavidad y tacto con que se procure conservar mientras adquiere solidez. Ahora, si yo soy o no el hombre de la situación, es un problema; si podré o no salvar al país, sólo Dios lo sabe; pero que un trastorno cualquiera en la actualidad, lo pierde, es cosa segura; pues ¿para qué aventurar un paso sacrificando tantos deberes, comprometiendo tantos intereses y aceptando tan inmensas responsabilidades? Si, como usted lo cree, la nación me otorga su confianza, si el voto público me llama a regir los destinos de la patria, esperemos con calma a que la imprenta y demás órganos pacíficos por donde los pueblos expresan su voluntad, así lo manifiesten y esté usted seguro de que, sin la menor violencia, trabajando sin descanso, como lo hago, a favor del país, los acontecimientos mismos, por un orden natural, me llevarán al puesto que la opinión pública me destine.

Entretanto, no dé usted gran valor a esos males secundarios a que se refiere, porque si bien es cierto que existen de la misma manera que existen defectos en toda obra que se comienza, no lo es menos que son bien fáciles de remediar, atendida la buena fe y purificada intención que hay realmente en las personas. Este es un punto que debemos, los que nos hallamos cerca del teatro de los sucesos, tomar a nuestro cargo, y haremos los esfuerzos posibles hasta conseguir rodear al gobierno del prestigio y respetabilidad para el cual deben contribuir todos con su cooperación sin perder de vista que lo que hagamos hoy, deberá servir de base para lo de adelante.

Este desgraciado país ha sufrido tanto que la menor violencia puede causar su disolución. El cansancio del pueblo no puede ser mayor; los resortes de la moralidad están todos relajados; la fe se ha perdido enteramente; el espíritu público está muerto, y bajo tan tristes auspicios

nos ha tocado a los caudillos de la última revolución la difícil tarea de una regeneración política y social. Como principio fundamental de ella debemos asentar el respeto al poder legítimamente constituido; es preciso poner término a revueltas que ya eran una costumbre, una enfermedad crónica que devoraba las entrañas de la patria; es preciso que la paz y el orden se consoliden a todo trance y que no se permita la adopción de otros medios que los legales; porque, de lo contrario, la inmoralidad seguirá como un torrente destructor, inundando nuestra carcomida sociedad y no habrá gobierno posible entre nosotros.

He sido quizá más difuso de lo que debiera; pero he querido manifestar a usted con lealtad y franqueza, corresponder la suya, mis ideas, explyándole las razones en que me fundo para que usted se persuada de que si no acepto las que usted me presenta, no es ciertamente por falta de gratitud sino porque hay inconvenientes de tal género que merecen toda consideración, por cuanto afectan los intereses mismos que defendemos, por cuanto comprometen el porvenir de la patria, Esto supuesto y contando, como creo que puedo hacerlo con su adhesión, me prometo que, según me lo ha ofrecido, correremos una misma suerte, y usted siguiendo mi camino me ayudará con su importante cooperación, con sus luces, con su influencia, a procurar salvar la situación y labrar la suerte futura de la patria, Algún día el mundo nos hará justicia, la historia consignará una página honrosa a nuestros patrióticos esfuerzos y nosotros descansaremos siempre en la conciencia de haber sacrificado todo género de intereses personales al bien general.

He visto el discurso de usted, de que me acompaña ejemplares; él es valiente y enérgico y sus principios son los míos en lo substancial, puesto que tengo la convicción de que una libertad prudente y moderada es lo único que puede sistemar la marcha de la República, víctima hoy de exageraciones y de abusos.

No me fue posible, por más que así lo quise, despachar ayer al extraordinario, porque habiendo venido ayer el señor Presidente a esta capital y, ocupados, además, de la renuncia que presentó el señor [Guillermo] Prieto —puesto que aún está pendiente—, los quehaceres se

multiplicaron para mí; disimule usted esta demora y crea que con ansia quiero volver a ver sus letras apreciables; en el entretanto, le deseo felicidades y me repito su afectísimo adicto amigo y servidor que lo saluda y l. b.l. m.

Ignacio Comonfort

LEY JUÁREZ

Ministerio de Justicia

El Excelentísimo señor Presidente interino se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El ciudadano Juan Álvarez, Presidente interino de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:

Que en el uso de las facultades que me concede el artículo 3º del Plan proclamado en Ayutla y reformado en Acapulco, he tenido a bien decretar la siguiente.

**Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica
de los Tribunales de la Nación,
del Distrito y Territorios**

Artículo 1º.- Entretanto se arregla definitivamente la administración de justicia en la Nación, se observarán las leyes que sobre este ramo regían en 31 de diciembre de 1852, con las modificaciones que establece este decreto.

Suprema Corte de Justicia

Artículo 2º.- La Corte Suprema de Justicia de la nación se compondrá de nueve ministros y dos fiscales. Para ser ministro o fiscal se requiere ser abogado, mayor de 30 años, estar en ejercicio de los derechos de ciudadano y no haber sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante.

Artículo 3º.- La Corte Suprema de Justicia se dividirá en tres salas. La primera, que será unitaria, conocerá de todo negocio que corresponda a la Suprema Corte en primera instancia. La segunda, que se compondrá de tres ministros, conocerá de todo negocio que deba verse en segunda instancia, y la tercera, de cinco, conocerá el grado de revista de todo negocio que según las leyes lo admita. Los ministros 1º, 2º, 5º, 8º y 9º, compondrán la sala de tercera instancia. Los Ministros 3º, 4º, y 7º, compondrán la segunda sala, y el 6º ministro formará la sala unitaria.

Artículo 4º.- Habrá cinco ministros suplentes, que deberán tener las mismas cualidades de los propietarios y residir en la capital de la República.

Artículo 5º.- Las faltas de los ministros se cubrirán llamando primero al fiscal que no hubiere pedido en el negocio y, en su defecto, a los ministros suplentes de que habla este decreto a quienes se llamará por turno. Los ministros suplentes gozarán, los días que funcionaren, de la mitad del sueldo que disfrutarían siendo propietarios; pero cuando sus funciones duren más de quince días, se les abonará el sueldo íntegro.

Artículo 6º.- Ni los ministros, ni los fiscales de la Suprema Corte de Justicia podrán ser recusados sin causa que compruebe. Sólo podrán excusarse por motivos que justificará la acusación.

Artículo 7º.- Cada sala tendrá una secretaría, en la que habrá los empleados siguientes:

Un secretario letrado.

Un oficial ídem.

Dos escribientes.

Un portero.

Un mozo de aseo.

El secretario de la primera sala lo será de la Corte plena.

Artículo 8º.- Para todas las salas habrá un escribano de diligencias y un ministro ejecutor. Cada fiscal tendrá un escribiente.

Artículo 9º.- La Suprema Corte de Justicia cesará de conocer de los negocios civiles y criminales pertenecientes al Distrito y Territorios; pero conocerá de los negocios y causas de responsabilidad del gobernador del

Distrito, de los magistrados del Tribunal Superior del mismo y de los jefes políticos de los Territorios.

Artículo 10º.- Corresponde a la Corte plena:

I.- Dar con audiencia fiscal las consultas sobre paso o retención de bulas en materia contenciosa.

II.- Recibir de abogados a los que ante ella lo pretendieren.

III.- Distribuir los negocios entre los fiscales.

IV.- Ejercer las demás atribuciones que las leyes vigentes en 1852 le encomendaron.

Artículo 11.- Pertenece a la tercera sala:

I.- El conocimiento de las competencias de que habla el artículo 29 de la ley de 14 de febrero de 1826.

II.- El de los recursos de protección y fuerza en negocios que corresponden a los juzgados de Distrito, tribunales de circuitos o a la Suprema Corte. Así como el de los que ocurran en el Distrito o Territorios.

III.- El de los recursos de nulidad que se interpusieren de sentencia pronunciada por la segunda sala de la misma Corte y por la sala colegiada del Tribunal Superior del Distrito.

IV.- El de todos los negocios cuya tercera instancia corresponda a la Suprema Corte.

Artículo 12.- Las salas serán permanentes y nunca se llamará a los ministros de una para cubrir las faltas que hubiere en otras. En caso de impedimento temporal, se suplirán dichas faltas del modo prevenido en el artículo 5º de este decreto.

Artículo 13.- Los magistrados propietarios y suplentes, y los fiscales de la Suprema Corte, serán juzgados como se dispone en artículo 139 de la Constitución de 1824, y no pudiendo al presente hacerse el nombramiento de jueces como en él se ordena, se verificará de la manera siguiente: en los casos en que según las leyes sea necesaria la declaración de haber lugar a la formación de causa, se hará ésta por el Consejo de Gobierno; y para organizar el tribunal que debe juzgar a los responsables, el gobierno formará una lista de 24 abogados residentes en la capital, que

tengan las cualidades que se requieren para ser ministro de la Suprema Corte y no sean jueces ni empleados de los tribunales. Llegado el caso de juzgar a algún responsable, el Consejo de Gobierno insaculará 24 cédulas con los nombres que compongan la citada lista y sacará por suerte la de los individuos que deben formar el tribunal

Artículo 14.- El mismo tribunal conocerá, conforme a las leyes, de los recursos de nulidad, siempre que ésta se haya causado en la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia.

Corte Marcial

Artículo 15.- La Suprema Corte de Justicia se erigirá en Corte Marcial, asociándosele al efecto siete oficiales generales y un fiscal de la misma clase, para conocer de las causas criminales puramente militares o mixtas, en los términos prevenidos en esta ley.

Artículo 16.- La Corte Marcial se compondrá de tres salas de justicia y una se llamará de ordenanza. Las salas de justicia serán de 1ª, 2ª y 3ª instancias. Formarán la de primera instancia los dos primeros ministros de la Suprema Corte, por el orden de su nombramiento, excluyendo al presidente y el 4º de los oficiales generales nombrados para la Corte Marcial; la de 2ª instancia se formará de los ministros letrados que sigan por el orden referido y el 5º de los oficiales generales; la de 3ª instancia de los tres letrados siguientes, por el mismo orden, con el 6º y el 7º militares.

Artículo 17.- La sala de ordenanza se formará de los tres primeros oficiales generales nombrados por la Corte Marcial y el fiscal de la misma clase. El último de los ministros letrados de la Suprema Corte concurrirá sin voto a la sala de ordenanza para dar su dictamen a los vocales en las dudas que les ocurran. El gobierno, al hacer los nombramientos de ministros, designará el presidente de esta sala, que lo será de la Corte Marcial.

Artículo 18.- La sala de ordenanza tendrá una secretaría compuesta de:

Un secretario, coronel efectivo del ejército.

Un oficial, teniente coronel ídem de ídem.

Dos escribientes, capitanes ídem de ídem.

Un portero.

Dos ordenanzas.

Artículo 19.- Habrá tres ministros suplentes, que serán también oficiales generales y cubrirán por turno las faltas temporales de los ministros propietarios.

Artículo 20.- La Corte Marcial se sujetará a la ley de 27 de abril de 1837 y reglamento de 2 de septiembre del mismo año, en todo lo que no se oponga a este decreto.

Artículo 21.- Los ministros propietarios y suplentes, el oficial y demás empleados de la Corte Marcial, disfrutarán solamente el sueldo que les corresponde por su empleo en el ejército.

Artículo 22.- Los ministros de la Corte Marcial serán juzgados por el tribunal y en la forma que se establece en el artículo 13 de este decreto.

Tribunal Superior del Distrito

Artículo 23.- Se establece un Tribunal Superior de Justicia en el Distrito que se compondrá de cinco magistrados y dos fiscales. Para ser ministro o fiscal, se requiere: ser abogado, mayor de 30 años, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y no haber sido condenado a alguna pena infamante. Habrá cinco ministros suplentes, que tendrán las mismas cualidades que los propietarios.

Artículo 24.- El Tribunal Superior del Distrito se dividirá en tres salas: dos unitarias de 2ª instancia y una compuesta de tres magistrados, que conocerá en 3ª. El tribunal pleno, en el acuerdo diario, sorteará los negocios de que se dé cuenta, entre las salas unitarias y los fiscales. El gobierno, al hacer el nombramiento de ministros, designará el presidente del tribunal.

Artículo 25.- La sala colegiada se compondrá del 1º, 3º, y 5º ministros, y las unitarias del 2º y 4º.

Artículo 26.- Las faltas temporales de los ministros se suplirán del modo siguiente: se llamará por su orden: primero a los fiscales, excluyendo al que hubiere pedido en el negocio; segundo, a los jueces de lo civil, exceptuando al que hubiese conocido del negocio en la 1ª instancia, y tercero a los suplentes. Un fiscal no podrá cubrir la falta de un ministro propietario sino por un mes, a cuyo término se seguirá el turno que este artículo establece. No podrá un mismo juez suplir en el tribunal por más de quince días continuos; pero seguirá supliendo los días precisos para terminar los negocios cuya vista hubiere comenzado. Los fiscales y los jueces, durante su suplencia, continuarán despachando sus demás negocios en las horas que les queden libres y los segundos no tendrán entonces más sueldo que el de sus empleos. Los suplentes, en igual caso, gozarán por cada asistencia la mitad del sueldo que en ese día les correspondiera, siendo ministros propietarios y, cuando su ocupación en el tribunal durare más de quince días, disfrutarán el sueldo íntegro.

Artículo 27.- Cada una de las salas del Tribunal Superior del Distrito, tendrá los empleados siguientes:

Un secretario letrado.

Un oficial ídem.

Dos escribientes.

El secretario de la sala de súplica lo será del tribunal pleno. Las faltas del secretario, por ocupación en alguna sala o por cualquiera otra causa, se suplirán por el oficial respectivo. Para todas las salas habrá dos abogados defensores de pobres, un escribano de diligencias, un archivero, un ministro ejecutor, un portero y dos mozos de aseo. Habrá dos escribientes para los fiscales.

Artículo 28.- Para el conocimiento de los negocios civiles y criminales del Distrito, el Tribunal Superior se sujetará a las leyes que sobre administración de justicia regían en 31 de diciembre de 1852, conociendo en los grados y conforme lo hacía la Suprema Corte de Justicia de la nación en aquella época.

Artículo 29.- El Tribunal Superior del Distrito conocerá de las causas de responsabilidad de los jueces de 1ª instancia del mismo y de los menores de la Ciudad de México. En este caso, y cuando funcionando

como tribunal de circuito, conforme a esta ley, defina la responsabilidad de un juez de Distrito, una de las salas unitarias conocerá en 1ª instancia y la sala colegiada en 2ª.

Dentro de un mes de instalado el tribunal formará su reglamento interior y lo presentará al gobierno para su aprobación.

Entretanto, observará el de la Suprema Corte de Justicia. El tribunal pleno recibirá de abogados a los que ante él lo solicitaren. La sala colegiada dirimirá las competencias que ocurran entre los jueces de distrito y conocerá de los recursos de nulidad que se interpongan de las sentencias pronunciadas por las salas unitarias.

Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito

Artículo 30.- Se restablecen los tribunales de circuito y juzgados de distrito, con las modificaciones que a continuación se expresan:

I. La sala colegiada del Tribunal Superior del Distrito, ejercerá las funciones de Tribunal de Circuito de México, y conocerá en 3ª instancia de los negocios pertenecientes al Territorio de Tlaxcala, que sean suplicables conforme a las leyes.

II. El Tribunal de Circuito de Culiacán conocerá en grado de súplica de los negocios pertenecientes al territorio de la Baja California.

III. El Tribunal de Circuito de Guanajuato comprenderá los Estados de Michoacán, Querétaro, Guanajuato y territorio de Sierra Gorda; se situará en la ciudad de Celaya y conocerá en 3ª instancia de los negocios pertenecientes al territorio expresado.

IV. El Tribunal de Circuito de Guadalajara comprenderá los estados de Zacatecas, Jalisco y el Territorio de Colima, y conocerá en 3ª instancia de los negocios pertenecientes a dicho territorio.

V. El Tribunal de Circuito de Mérida comprenderá los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y el territorio de la Isla del Carmen, y conocerá en 3ª instancia de los negocios pertenecientes al último.

VI. El Juzgado de Distrito de Sinaloa conocerá en grado de apelación de los negocios pertenecientes a la Baja California.

VII. El Juzgado de Distrito de Guadalajara, que residirá en Colima, conocerá en 2ª instancia de los negocios pertenecientes al territorio de Colima.

VIII. El Juzgado de Distrito de México conocerá en 2ª instancia de los negocios pertenecientes al territorio de Tlaxcala.

IX. El Juzgado de Distrito de Querétaro y Guanajuato, que residirá en la capital de este último Estado, conocerá en 2ª instancia de los negocios pertenecientes al territorio de Sierra Gorda.

X. El Juzgado de Distrito de Campeche conocerá en 2ª instancia de los negocios pertenecientes a la Isla del Carmen.

XI. En los Juzgados de Distrito de Michoacán, Oaxaca, San Luis y Zacatecas, desempeñarán las funciones de promotor fiscal los empleados de Hacienda respectivos.

XII. En los lugares donde residiere un juzgado de distrito y el tribunal de circuito, el promotor fiscal de éste lo será también del juzgado de distrito.

XIII. En cada uno de los tribunales de circuito y juzgados de distrito que conozcan de los negocios civiles y criminales pertenecientes a los territorios, habrá un escribiente, a más de los empleados señalados por la ley.

Artículo 31.- Los tribunales de circuito y juzgados de distrito conocerán de los negocios y en la forma que se determinó por las leyes de su creación y posteriores relativas hasta 31 de diciembre de 1852, ejerciendo además las atribuciones que se les encomienden por esta ley.

Artículo 32.- La responsabilidad de los jueces de los territorios será definida por los de distrito a quienes toque revisar sus fallos.

Juzgados de 1ª instancia en el Distrito y Territorios

Artículo 33.- Los juzgados de lo civil y de lo criminal continuarán en el Distrito bajo la forma que hoy tienen, sin más alteraciones que las que indica ley.

Artículo 34.- Se declara vigente la ley de 17 de enero de 1853 que creó los jueces menores, en lo que no se oponga a la presente.

Artículo 35.- En el territorio de la Baja California habrá un solo juzgado de lo civil y de lo criminal, con los empleados que se expresan en la planta que se agrega a esta ley.

Artículo 36.- El territorio de Colima seguirá formando un solo partido judicial, en el que habrá dos jueces de lo civil y de lo criminal, que se turnarán por semanas en el conocimiento de los negocios criminales que de nuevo ocurran.

Artículo 37.- En el territorio de la Isla del Carmen habrá un solo juzgado para los negocios civiles y criminales, bajo la forma que hoy tiene.

Artículo 38.- En la Sierra Gorda habrá también un solo juzgado de 1ª instancia, del modo en que hoy existe.

Artículo 39.- El territorio de Tlaxcala continuará dividido en dos partidos judiciales: el de Tlaxcala y el de Huamantla, en cada uno de los cuales habrá un juzgado para los negocios del ramo civil y criminal.

Artículo 40.- La parte del territorio de Tehuantepec que no se ha agregado al estado de Oaxaca, queda sujeta a las disposiciones que en este ramo dictare el gobierno del estado de Veracruz.

Artículo 41.- El partido judicial de Balancán, que se había segregado del estado de Tabasco, se sujetará a las disposiciones del gobierno de este estado.

Disposiciones Generales

Artículo 42.- Se suprimen los tribunales especiales, con excepción de los eclesiásticos y los militares. Los tribunales eclesiásticos cesarán de conocer en los negocios civiles y continuarán conociendo de los delitos comunes de individuos de su fuero, mientras se expide una ley que arregle ese punto. Los tribunales militares cesarán también de conocer de los negocios civiles y conocerán tan sólo de los delitos puramente militares o mixtos de los individuos sujetos al fuero de guerra. Las

disposiciones que comprende este artículo son generales para toda la República y los estados no podrán variarlas y modificarlas.

Artículo 43.- Se suprimen las auditorias de Guerra de las comandancias generales, Los jueces de distrito y, en su defecto, los jueces letrados de las respectivas localidades asesorarán a los tribunales militares, como lo previene la ley de 30 de abril de 1849. En el distrito se turnarán por semanas para ese efecto los jueces de 1ª instancia y de Distrito, El turno empezará por el juez de distrito, siguiendo los de lo civil y después los de lo criminal, por el orden de su numeración. El turno será para las causas que comiencen en la semana, pues en aquellas en que hubiere consultado un juez, seguirá haciéndolo el mismo hasta su conclusión.

Artículo 44.- El fuero eclesiástico, en los delitos comunes, es renunciable.

Artículo 45.- Los jueces del fuero común conocerán de los negocios de comercio y de minería, sujetándose a las ordenanzas y leyes peculiares de cada ramo. Los gobernadores y jefes políticos ejercerán las facultades económico-gubernativas que las ordenanzas de minería concedían a las diputaciones territoriales. Las disposiciones de este artículo y el anterior son para toda la República.

Artículo 46.- Continuarán vigentes la ley de 30 de abril de 1842 y sus correlativas que reglamentaron el uso del papel sellado, con las modificaciones que hizo el decreto de 27 de octubre último y, entretanto, la oficina respectiva dispone que se selle el papel correspondiente, los gobernadores de los estados, el del Distrito y los jefes políticos de los territorios podrán habilitar el necesario.

Artículo 47.- Ningún juez o magistrado podrá ser suspenso o removido sin previa causa justificada en el juicio respectivo.

Artículo 48.- El gobierno nombrará los magistrados, fiscales, jueces y demás empleados del ramo judicial, mientras la Constitución política de la nación disponga otra cosa. Al hacer los nombramientos, el gobierno designará el presidente y vice-presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 49.- Los sueldos de los empleados de que habla ley, serán los que se expresarán al fin de ella.

Artículo 50.- la declaración de inmunidad siempre que un reo se acoja al asilo, corresponde al superior inmediato.

Artículo 51.- En los procedimientos civiles se observarán las reglas contenidas en los artículos siguientes.

Artículo 52.- Los pregones no se darán hasta que la causa haya sido sentenciada de remate.

Artículo 53.- Para oponerse a la ejecución, se determinará expresa y detalladamente la excepción que se alega. La oposición que se hiciere de otro modo no surtirá efecto alguno.

Artículo 54.- Cuando el demandado se rehusé al reconocimiento de una firma, previos tres requerimientos, se le tendrá por confeso y se procederá a la ejecución y, cuando emplazado personalmente, se niegue a comparecer para hacer el reconocimiento, se procederá al secuestro de bienes, por vía de apremio, en cantidad correspondiente a la demanda.

Artículo 55.- En la vía ejecutiva no se admitirá apelación del auto de *exequendo*.

Artículo 56.- La adjudicación en pago por falta de postor, se hará en las dos terceras partes del valúo

Artículo 57.- Las tercerías excluyentes en ningún caso suspenden el curso del juicio ejecutivo, cuando no inician antes de pronunciada sentencia de remate.

Artículo 58.- Si la acción del opositor fuese ordinaria, se continuará el juicio ejecutivo hasta hacerse pago el ejecutante bajo la fianza correspondiente.

Artículo 59.- Cuando dicha acción fuese ejecutiva, continuará separadamente del juicio ejecutivo en que deberá acreditar el opositor su derecho y el principal promovido por el ejecutante, hasta que cada uno de ellos sea sentenciado de remate.

Artículo 60.- Pronunciada que sea la sentencia de remate en ambos juicios, si obtuviere el opositor, se le devolverán los bienes embargados, siendo la tercería del dominio; pero si fuere sobre preferencia de crédito,

el opositor y el ejecutante en el caso que éste hubiese también obtenido, entrarán desde luego al juicio sobre preferencia, llevándose entretanto adelante la ejecución hasta dejar realizados los bienes embargados, cuyo importe se depositará para hacer el pago al que acredite mejor derecho.

Artículo 61.- Si después de la sentencia de remate saliese el opositor con acción ejecutiva y la tercería fuese de dominio, se suspenderá el juicio ejecutivo en el estarlo en que se encuentre, hasta que se dé sentencia de remate sobre derecho del opositor, conforme a lo dispuesto en el artículo 59; pero si la tercería se funda en preferencia de crédito, la ejecución seguirá adelante, observándose lo prescrito en el artículo anterior.

Artículo 62.- En los secuestros por vía de providencia precautoria, si la parte embargada los contradijera, verificados que sean, se citará a audiencia verbal, para tenerla dentro de tercero día, y por lo que en ella se alegue se determinará la subsistencia o levantamiento de la medida precautoria. Si se necesitare de prueba, se presentará ésta en otra audiencia, que se verificará dentro de los seis días siguientes.

Artículo 63.- Las apelaciones de estos fallos se tratarán también verbalmente y la lista se verificará dentro de seis días de recibida el acta de 1ª instancia en el Tribunal Superior.

Artículo 64.- Nunca se esperará segunda rebeldía para decretar el apremio y en todas serán las costas a cargo de aquel que haya demorado la devolución de los autos.

Artículo 65.- En los negocios urgentes de arraigo, interdictos o medidas precautorias, el proveído se dictará dentro de una hora, bajo la responsabilidad del juez.

Artículo 66.- A todos los escritos se pondrán fecha y el escribano asentará el día y hora en que los recibe, a presencia de la parte.

Artículo 67.- Las notificaciones se harán dentro de 24 horas, personalmente o por instructivo, y en los negocios urgentes de que habla el artículo 65, sin pérdida de momento, No haciéndose así, el juez impondrá al escribano una multa del duplo de lo que debía devengar por la diligencia, y si el perjuicio causado fuere grave, suspenderá al escribano hasta que satisfaga a la parte o se le declare inculpable.

Artículo 68.- El actor, en su escrito de demanda y el reo, en la primera notificación que se le haga, señalarán la casa donde se les hayan de hacer las demás, y en ellas se les buscará hasta que den aviso contrario.

Artículo 69.- No pasarán los autos a tasación, sino cuando alguna de las partes lo exija, en cuyo caso el juez de la causa o el superior respectivo nombrará de entre los abogados al que deba hacer la tasación. Éste no cobrará derechos dobles.

Artículo 70.- Los escribanos no cobrarán buscas, debiendo a la primera dejar el instructivo, por el que se cobrará lo que corresponde a la notificación y nada más.

Artículo 71.- De todo auto se dará a la parte, al notificarla, copia si la pidiere, cobrándole un real por cada 22 renglones de los que excedan de 12.

Artículo 72.- Se omitirá en los juicios ordinarios la réplica y duplica por escrito. Contestada la demanda, el juez citará a audiencia verbal, en la que cada parte expondrá sobre los hechos y su derecho. Procurará el juez la avenencia y, no lográndose, citará para sentencias y el punto fuere de derecho. Si hubiere hechos que probar, quedarán asentados los puntos sobre que debe recaer la prueba. El término ordinario de no excederá de 60 días.

Artículo 73.- No es necesaria la habilitación del día o de la hora para actuar en cualquier momento, aun cuando sea de noche o día feriado, en los negocios criminales y civiles que fueren urgentes.

Artículo 74.- Los términos legales son improrrogables.

Artículo 75.- Todo término se contará de momento a momento, descontando los días feriados.

Artículo 76.- Los jueces de 1ª instancia del distrito conocerán en juicio verbal hasta la cantidad de \$ 800.

Artículo 77.- Quedan insubsistentes y sin efecto alguno todas las disposiciones que sobre administración de justicia se han dictado desde enero de 1863 hasta la fecha.

Artículos transitorios

1º. La Suprema Corte de Justicia y la Marcial se instalarán a los tres días de hechos los nombramientos de las personas que deben componerlas. Los nombrados prestarán juramento ante el Consejo de Gobierno, bajo la fórmula siguiente:

¿Juráis guardar y hacer guardar el Plan de Ayutla y las leyes expedidas en su consecuencia, administrar justicia y desempeñar fiel y lealmente vuestro encargo? -Si, juro- Si así lo hicieréis, Dios os lo premie, y si no. Él y la Nación os lo demanden.

2º. Todos los empleados nombrados a virtud de esta ley, prestarán el mismo juramento. Los ministros del Tribunal Superior del Distrito ante la Suprema Corte, en acuerdo pleno. Los jueces de circuito y de distrito y sus promotores, ante la misma, si residieren en la capital o ante el gobernador del estado en que residan; los jueces de 1ª instancia y los menores de la Ciudad de México, ante el Superior Tribunal del Distrito y todos los demás empleados ante su respectivo superior.

3º. Los tribunales especiales suprimidos en virtud de este decreto, pasarán todos los negocios que tuvieran a los jueces ordinarios y cuando aquellos se sigan a instancia de parte y hubiere varios jueces en el lugar, al que eligiere el actor.

4º. Los tribunales militares pasarán igualmente a los jueces ordinarios respectivos, los negocios civiles y causas crimínalas sobre delitos comunes, los mismo harán los tribunales eclesiásticos con los negocios civiles en que cesa su jurisdicción.

Planta de sueldos
de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior del Distrito,
tribunales de circuito, juzgado de distrito
y de primera instancia de los Territorios

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Nueve ministros y dos fiscales, a \$ 4 500		
Cada uno.....	\$	49 500
Tres secretarios, a \$2 400.....	“	7 200
Tres oficiales, a \$ 2 000.....	“	6 000
Seis escribientes, a \$ 500.....	“	3 000
Dos escribientes de los fiscales a \$ 500..	“	1 000
Un escribano de diligencias	“	600
Un ministro ejecutor	“	300
Tres mozos de aseo, \$ 400.....	“	1 200
	\$	<hr/> 69 400 <hr/>

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO

Cinco ministros y dos fiscales, a \$ 4 000.	\$	28 000
Tres secretarios, a \$ 2 000.....	“	6,000
Tres oficiales, a \$ 1 500.....	“	4 500
Un archivero.....	“	600
Seis escribientes, a \$ 500.....	“	3 000
Dos ídem de los fiscales, a \$ 500.....	“	1 000
Dos abogados defensores de pobres, a \$ 1 000.....	“	2 000
Un escribano de diligencia.....	“	600
Un ministro ejecutor.....	“	400
Un portero.....	“	400
Dos mozos de aseo, a \$ 200.....	“	400
	\$	<hr/> 46,900 <hr/>

TRIBUNALES DE CIRCUITO

MERIDA

Comprende los Estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y la Isla del Carmen

Un juez letrado.....	\$	2 500
El promotor fiscal.....	“	2 000
Ministro ejecutor.....	“	600
Un escribiente.....	“	500
	\$	<u>6 500</u>

PUEBLA

Comprende los Estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca

Un juez letrado.....	\$	2 500
El promotor fiscal.....	“	2 000
Escribano.....	“	1 000
Ministro Ejecutor	“	300
Para renta de casa	“	180
	\$	<u>5 980</u>

CELAYA

**Comprende los Estados de Michoacán, Querétaro, Guanajuato,
San Luis Potosí y Territorio de Sierra Gorda**

Un juez letrado.....	\$	3 000
El promotor fiscal.....	“	2 000
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
Para renta de casa	“	180
	\$	<hr/> 7 180

GUADALAJARA

Comprende los Estados de Jalisco, Zacatecas y Territorio de Colima

Un juez letrado.....	\$	2 500
El promotor fiscal.....	“	2 000
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
Escribiente.....	“	500
Para renta de casa	“	180
	\$	<hr/> 6 680

CULIACAN

Comprende los Estados de Sonora, Sinaloa y Territorio de Baja California

Un juez letrado.....	\$	3 000
El promotor fiscal.....	“	2 000
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
Un escribiente.....	“	600
Para renta de casa	“	120
	\$	<hr/> 7 120 <hr/>

MONTERREY

Comprende los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila

El juez letrado.....	\$	2 500
El promotor fiscal.....	“	2 000
El Escribano.....	“	1 200
El Ministro Ejecutor	“	300
Para renta de casa	“	180
	\$	<hr/> 6 180 <hr/>

DURANGO
Comprende los Estados de Durango y Chihuahua

El juez letrado.....	\$	2 500
El promotor fiscal.....	“	2 000
El Escribano.....	“	1 200
El Ministro Ejecutor	“	300
Para renta de casa	“	120
	\$	<hr/> 6 120 <hr/>

JUZGADOS DE DISTRITO

CHIAPAS

Reside en San Cristóbal de Las Casas

juez letrado.....	\$	2 000
promotor	“	1 500
Escribano.....	“	1 000
Ministro Ejecutor	“	300
	\$	<hr/> 4 800 <hr/>

CHIHUAHUA

juez letrado.....	\$	2 500
promotor	“	1 500
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
	\$	<hr/> 5 500 <hr/>

DURANGO

juez letrado.....	\$	2 000
promotor, el de circuito .		
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
	\$	<hr/> 3 500 <hr/>

GUANAJUATO Y QUERÉTARO

Reside en Guanajuato

juez letrado.....	\$	2 000
promotor	“	1 500
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
Escribiente.....	“	500
	\$	<hr/> 5 500

GUERRERO

Reside en Acapulco

juez letrado.....	\$	2 000
promotor	“	1 500
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
	\$	<hr/> 5 000

JALISCO

Reside en Colima

juez letrado.....	\$	2 000
promotor	“	1 500
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
Un escribiente.....	“	500
	\$	<hr/> 5 500

MÉXICO

juez letrado.....	\$	3 000
promotor	“	1 500
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
Un escribiente.....	“	500
	\$	<u>6 500</u>

MICHOACÁN

Reside en Morelia

juez letrado.....	\$	2 000
promotor, empleado de Hacienda respectivo.		
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
		<u>\$3 500</u>

NUEVO LEON Y COAHUILA
Reside en Monterrey

juez letrado.....	\$	2 000
promotor, el de circuito.		
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
	\$	<u>3 500</u>

OAXACA

juez letrado.....	\$	2 000
promotor, el empleado de Hacienda respectivo.		
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
	\$	<u>3 500</u>

PUEBLA

juez letrado.....	\$	2 000
promotor, el de circuito.		
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
	\$	<u>5 500</u>

SAN LUIS POTOSI

Juez letrado.....	\$	2 000
promotor, el empleado de Hacienda respectivo	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
	\$	<hr/> 3 500

SINALOA

Reside en Mazatlán

Juez letrado.....	\$	2 000
Promotor	“	1 500
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
Escribiente.....	“	500
	\$	<hr/> 5 500

TABASCO

Reside en San Juan Bautista

Juez letrado.....	\$	3 000
Promotor	“	2 000
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
	\$	<hr/> 6 500

TAMAULIPAS
Reside en el Puerto de Tampico

Juez letrado.....	\$	3 500
Promotor	“	2 500
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
	\$	<hr/> 7 500

VERACRUZ

Juez letrado.....	\$	3 500
Promotor	“	2 500
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
	\$	<hr/> 7 500

YUCATÁN
Reside en Campeche

Juez letrado.....	\$	2 000
Promotor	“	1 500
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
Un escribiente.....	“	500
	\$	<hr/> 5 500

ZACATECAS

juez letrado.....	\$	2 000
promotor, el empleado de Hacienda respectivo		
Escribano.....	“	1 200
Ministro Ejecutor	“	300
	\$	<hr/> 3 500

JUECES DE PRIMER INSTANCIA DE LOS TERRITORIOS

BAJA CALIFORNIA

Un juez de lo civil y criminal	\$	2 000
Un escribano.....	“	600
Un escribiente.....	“	400
Un comisario ejecutor	“	300
	\$	<u>3 200</u>

COLIMA

Dos jueces de lo civil y criminal, a \$ 1 000.	\$	2 000
Dos escribanos.....	“	1 000
Dos escribientes para ídem, a \$ 300.....	“	600
Dos comisarios ejecutores, a \$ 80.....	“	160
	\$	<u>3 760</u>

ISLA DEL CARMEN

Un juez de lo civil y criminal	\$	1 000
Un escribano.....	“	600
Un escribiente.....	“	360
Un comisario ejecutor	“	240
	\$	<u>2 200</u>

SIERRA GORDA

Un juez de lo civil y criminal	\$	1 000
Un escribano.....	“	500
Un escribiente.....	“	200
Para gastos de escritorio.....	“	120
	\$	<u>1 820</u>

TLAXCALA (DIVIDIDO EN DOS PARTIDOS)

Partido de Tlaxcala

Un juez de lo civil y criminal	\$	1 000
Un escribano.....	“	300
Un escribiente.....	“	180
Un comisario ejecutor	“	120
	\$	<u>1 600</u>

Partido de Huamantla

Un juez de lo civil y criminal	\$	1 000
Un escribano.....	“	300
Un escribiente.....	“	180
Un comisario ejecutor	“	120
	\$	<u>1 600</u>

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio Nacional de México, a 22 de noviembre de 1855.

Juan Álvarez

Al Ciudadano Benito Juárez.

Y lo comunico a V. E. para su inteligencia y fines consiguientes.

Dios y Libertad. México, noviembre 23 de 1855.

Benito Juárez

SE DA A CONOCER AL CLERO LA LEY JUÁREZ

México, noviembre 24 de 1855

Illmo. Señor Arzobispo de México

Ilustrísimo señor:

Acompaño a vuestra señoría ilustrísima [V. S. I.] dos ejemplares de la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, Distrito y Territorios, expedida con fecha de ayer para su cumplimiento, y a fin de que se sirva V. S. I. comunicarla a los tribunales eclesiásticos de su obispado para el mismo objeto.

Dios y Libertad.

Benito Juárez

EL ARZOBISPO DE MÉXICO SOMETE LA LEY JUÁREZ
A LA OPINIÓN DEL CABILDO

México, noviembre 25 de 1855

Excmo. señor ministro de
Justicia y Negocios Eclesiásticos

Excelentísimo señor:

Con la atenta comunicación de V. E. de ayer, he recibido dos ejemplares impresos de la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación; y por ahora no puedo decir a V. E. otra cosa, sino que en asuntos graves como el que contienen los artículos 42 y 44 de la Ley, y el 4º de los transitorios, debo antes de contestar oír a mi ilustrísimo y venerable cabildo, a quien con esta fecha paso un ejemplar de la Ley.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Lázaro (de la Garza),
arzobispo de México

EL CLERO PROTESTA CONTRA LA LEY JUÁREZ

México, noviembre 26 de 1855

Ilustrísimo señor doctor don Lázaro de la Garza
Dignísimo arzobispo de México

Ilustrísimo señor:

En contestación al oficio de V. S. I. del día de ayer, no duda este cabildo consultarle que inmediatamente proteste contra los artículos 42 y 44 de la ley, y el 4º de los transitorios, por atentar ellos directamente a los derechos de la Iglesia, y contrariar la disciplina establecida en los sagrados cánones; hallándose dispuesto este cabildo a suscribir esa protesta en compañía de V. S. I., si fuere de su superior agrado.

Reitera este cabildo a V. S. I. las seguridades de su aprecio y consideración.

Dios guarde a V. S. I. muchos años. Sala capitular de la Iglesia Metropolitana de México.

Manuel Moreno y Jove

José María Covarrubias

Salvador Zedillo

José Miguel Zurita

PROTESTA DEL ARZOBISPO
POR LA LEY SOBRE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Excmo. Sr. ministro de
Justicia y Negocios Eclesiásticos

Excelentísimo señor:

Después de haber oído a mi ilustrísimo y venerable cabildo sobre el contenido de los artículos 42 y 44 de la Ley sobre administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, y sobre el 4º de los transitorios de la misma Ley, de la que V. E. con fecha 24 del corriente me remitió dos ejemplares para su cumplimiento, consecuente a lo que el 25 dije a V. E., de que oído a mi ilustrísimo y venerable cabildo contestaría, voy a verificarlo, suplicando a V. E. eleve oficio al superior conocimiento del excelentísimo señor presidente.

Consta a V. E. que el privilegio del fuero, tanto en lo civil como en lo criminal, no es un privilegio concedido singularmente a mí, ni a otro individuo cualquiera del venerable clero; que tampoco es un privilegio dado en lo particular a los eclesiásticos de esta diócesis ni a los de otra cualquiera de las sufragáneas; que si este privilegio ha estado vigente y han disfrutado de él todas las iglesias de la República desde que se fundaron, fue y ha sido a virtud de que siendo un privilegio propio de todo el cuerpo eclesiástico, cuantos individuos lo componen han gozado de él por el hecho de pertenecer a este venerable cuerpo, sin otro requisito por su parte; que no ser cosa propia de ningún individuo, ni de diócesis alguna en particular, no ha quedado a su disposición lo perteneciente al fuero; que por esto las leyes generales de la Iglesia prohíben que de grado o por fuerza consienta alguno en la privación del fuero; que las penas que las mismas leyes imponen a los eclesiásticos que

de cualquier modo den su consentimiento contra el fuero, manifiestan la estrechez de semejante prohibición; y por último, consta a V. E. que en mi consagración juré guardar estos mismos principios o disposiciones generales de la Iglesia.

Nada de cuanto he dicho es asunto de disputa, sino cosas de puro hecho, como lo conocerá cualquiera que tenga noticia de lo dispuesto por la Iglesia en el particular, y de la ninguna libertad que para obrar en contra tienen los prelados.

Esto supuesto, y cierto como lo estoy, de que todos mis ilustrísimos y venerables hermanos los señores obispos de las iglesias sufragáneas siguen y han seguido siempre los mismos principios, hago, como prelado a nombre mío, de mí Illmo. cabildo y del venerable clero, por lo perteneciente a esta diócesis, y como metropolitano a nombre de los ilustrísimos señores obispos, mis sufragáneos, y del venerable clero de sus respectivas diócesis, la más solemne protesta que hacerse deba y sea necesaria contra el artículo 42 de la Ley, en la parte que dispone la cesación del fuero en lo civil, y contra cualquiera disposición que lo quite en lo que anuncia con respecto a lo criminal.

De la misma manera, como prelado de esta diócesis y como metropolitano, declaro que el artículo 44 es contrario a lo dispuesto por la Iglesia; que la renuncia que cualquiera individuo del clero haga del fuero, ya sea en lo civil, ya en lo criminal, es nula y de ningún momento, aun cuando lo jure; y que ya sea la renuncia de grado o por fuerza, sobre ser de ningún valor, quedará por lo mismo sujeto el que la haga, a las penas que la Iglesia impone a los contraventores, protestado, como protesto contra el dicho artículo.

Protesto asimismo, como prelado de esta diócesis y como metropolitano, contra el artículo 4º de los transitorios, en la parte que toca a los tribunales eclesiásticos; prohibiendo, como prohíbo, la remisión de autos que el artículo dice, por lo respectivo a los de esta diócesis y esperando que los ilustrísimos señores mis sufragáneos, harán igual prohibición en la parte que les tocó.

Y he juzgado un deber mío hacer las protestas que he expresado; y he de merecer a V. E. que al dar cuenta al Excmo. Sr. Presidente le

manifieste de mi parte, de la de mi ilustrísimo cabildo y de la de mis venerables hermanos los señores obispos de la República, que estando todos, como lo estamos, ciertos de su verdadera religiosidad y de su amor y respeto a la Santa Sede, y a su venerable cabeza el romano pontífice, esperamos que este asunto lo mandará pasar a nuestro Santísimo Padre, de cuya disposición estaremos pendientes, por no sernos posible obrar contra las leyes generales de la Iglesia, ni dar cumplimiento a disposición alguna que las contradiga.

Dios guarde a V. E, muchos años.

(México), Noviembre 27 de 1865.

Lázaro (de la Garza),
arzobispo de México

EL GOBIERNO INSISTE EN LA EXTINCIÓN DEL FUERO ECLESIAÍSTICO

Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos

Ilustrísimo señor arzobispo de México:

Di cuenta al Excmo. señor Presidente de la República con el oficio de V. S. I., fecha 27 del mes que finaliza, en la que protesta contra los artículos 42 y 44, y 4º de los transitorios de la ley de 23 del mismo mes, que inhibe a los jueces eclesiásticos del conocimiento de los negocios civiles, autoriza a los individuos del clero para renunciar su fuero en los delitos comunes, y manda pasar a los jueces ordinarios respectivos, los negocios civiles pendientes en los tribunales eclesiásticos. S. E. me ordena conteste a V. S. I. como tengo la honra de hacerlo, que antes de sancionar la mencionada Ley tuvo presente las razones en que V. S. I. apoya sus protestas, pero que siendo más poderosas las que pesaron en su ánimo para adoptar las medidas que contienen los artículos referidos, está resuelto a llevarlas a debida ejecución, poniendo en ejercicio todos los medios que la sociedad ha depositado en sus manos, para hacer cumplir las leyes y sostener los fueros de la autoridad suprema de la nación.

S. E. está profundamente convencido de que la Ley que ha expedido sobre administración de justicia, en manera alguna toca puntos de religión, pues en ella no ha hecho otra cosa que restablecer en la sociedad la igualdad de derechos y consideraciones, desnivelada por gracia de los soberanos que, para concederla, consultaron los tiempos y las circunstancias. La autoridad suprema, al retirar las gracias o privilegios que alguna vez concede, usa de un derecho legítimo que a nadie le es lícito desconocer y mucho menos enervar. Recuerde V. S. I. el

origen del fuero y, penetrado de esta verdad, no encontrará motivo para que el soberano ocurra al Sumo Pontífice y acuerde y combine con Su Santidad un punto que es de su libre atribución, y respecto del cual no reconoce en la tierra superior alguno.

Por todas estas razones que V. S. I. debe estimar en todo su valor y porque el deber mismo del Excmo. señor Presidente lo empeña en impartir a todas sus autoridades los auxilios necesarios para dar cumplimiento a la Ley, en cuyo caso las disposiciones de V. S. quedarán sin efecto, S. E. se promete del sano juicio de V. S. I., de su amor al orden y, sobre todo, del acatamiento que debe a la autoridad suprema de la nación, que sin trámite ulterior manifestará su obediencia a la ley, sean cuales fueren las protestas que haga para salvar su responsabilidad, si en algo la encuentra comprometida; en el concepto de que las consecuencias del desobedecimiento de la Ley serán de la exclusiva responsabilidad de V. S. I.

Dios y Libertad, México, noviembre 30 de 1855.

(Benito) Juárez

EL CLERO NO RENUNCIA AL FUERO SIN
EL CONSENTIMIENTO DEL PAPA

México, diciembre 1º de 1855

Excelentísimo señor ministro de
Justicia y Negocios Eclesiásticos

Excelentísimo señor:

Impuesto en el atento oficio de V. E., que recibí a las oraciones de la noche, debo contestarle que en mi nota 27 del próximo pasado, tuve el honor de manifestar a V. E. que las leyes generales de la Iglesia me prohibían que de grado o por fuerza diese mi consentimiento en la privación del fuero, ya fuese en lo civil, ya en lo criminal; que las mismas leyes prohibían estrechamente bajo la pena que expresan, el que algún eclesiástico renunciase su fuero; y que yo había jurado guardarlas y cumplirlas.

Indiqué, además, que este asunto pasase a nuestro Santísimo Padre el Romano Pontífice, no con el fin de sujetar a su jurisdicción la de la Nación, sino con el de que si lo tuviese a bien, me diese la libertad que no tengo, de prescindir de las leyes insinuadas y del juramento que digo; libertad que ningún otro puede darme, ni tomármela yo.

Este fue, en suma, el contenido de dicha mi nota del 27 del próximo pasado, y el fundamento de las protestas que entonces hice, y reproduzco en todas sus partes.

Suplico a V. E. que al elevar esta comunicación al superior conocimiento del Excmo. señor Presidente, le asegure de mis sinceros

respetos y debida consideración hacia su persona y a la suprema autoridad que ejerce.

Lázaro (de la Garza),
arzobispo de México

SE INSISTE EN QUE LA LEY JUÁREZ
SEA REVISADA POR EL VATICANO

México, diciembre 4 de 1855

Excelentísimo señor ministro de
Justicia y Negocios Eclesiásticos

Excelentísimo señor:

Después de las oraciones de la noche de ayer, me fue entregada la atenta comunicación de V. E., del mismo día, y en contestación tengo el honor de manifestarle, que las protestas que hice en 27 del pasado, que reproduje en 1º del corriente, y que reproduzco ahora en todas sus partes contra los artículos 42 y 44 de la Ley sobre Administración de Justicia, y contra el 4º de los transitorios de la misma, no salvarían mi responsabilidad ante Dios y ante los hombres si sólo las hubiese hecho de palabra; no puedo, por lo mismo, omitir los actos consiguientes y demostrativos de la sinceridad con que las hice; y estoy cierto de que esta conducta será de la superior aprobación del Excmo. señor Presidente, por su natural franqueza y buena fe.

La penetración de V. E. conocerá el trastorno, las innumerables cuestiones y disgustos que los artículos protestados van a producir, y que ciertamente no está en mi arbitrio evitar; y conocerá también que el único medio que hay es el que propuse desde el principio, de que este asunto se pasase a nuestro Santísimo Padre el Romano Pontífice, no con el fin de que a su autoridad y poder se sujete el de la nación, sino únicamente para que él, o me de por libre de guardar las leyes de la Iglesia que me prohíben que de grado ni por fuerza consienta en la privación del fuero y

del juramento que hice de cumplirlas, o me prevenga la conducta que debo seguir en el particular.

En nada se degradará con esto la dignidad de la nación, antes bien, dará ésta un testimonio de que observa para con la Santa Sede la consideración que se merece, y de que son sinceras sus miras de que todo se haga entre nosotros con la tranquilidad y calma que es de desearse reine en todas las clases de la sociedad.

Dios guarde a usted muchos años.

Lázaro (de la Garza),
arzobispo de México

EL OBISPO DEL POTOSÍ SE RESISTE
A ACATAR LA LEY JUÁREZ

San Luis Potosí, diciembre 5 de 1855

Excenentísimo señor don Benito Juárez,
Ministro de Justicia y
Negocios Eclesiásticos

Excelentísimo señor:

He recibido el oficio de V. E., que con fecha 24 del próximo pasado noviembre se sirvió dirigirme, acompañándome dos ejemplares de la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, encargándome al mismo tiempo que la comunique a los tribunales eclesiásticos del obispado.

Sé que debo obedecer a la autoridad, no sólo por el temor de desagradarle, sino por la conciencia, pues el que resiste a la potestad resiste a la ordenación de Dios; pero también sé que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres; así es que cuando la ley civil manda alguna cosa contraria a los deberes religiosos de un obispo, no puede éste sencillamente prestarle su obediencia sin hacer traición a sus deberes para con Dios, de quien es ministro. En este caso me encuentro con los artículos 42 y 44 de la citada Ley Orgánica, y el 4º de los transitorios de la misma. Prescindo del trastorno que estos artículos introducen en el derecho canónico y administrativo de la iglesia mexicana, y de la confusión que allí resultaría entre las potestades eclesiástica y temporal; y solamente llamo la atención de V. E. sobre unas verdades que como canonista conoce V. E., mejor que yo. El privilegio del fuero, ya sea civil, ya criminal, no es propio del eclesiástico

en lo particular, sino de todo el clero y de todas las iglesias de la República. Los obispos no somos árbitros del fuero eclesiástico para prestarnos a su extinción sin el acuerdo de la Silla Apostólica; y si estamos obligados a sostenerlo por los juramentos que prestamos al recibir la consagración episcopal; y por lo mismo, seríamos reos de un grave delito delante de Dios, si no protestáramos contra las disposiciones que son incompatibles con nuestros sagrados deberes, V. E. mismo vería con desprecio, y jamás tendría confianza de un prelado que, desentendiéndose de las obligaciones de su encargo pastoral, se olvidaba de cumplirlas; y éste, no hay duda, que por tan justo motivo merecería no sólo la indignación de Dios sino también la de los hombres.

Por lo expuesto, me veo obligado a protestar solemnemente por mí y en nombre del venerable clero secular y regular de toda mi diócesis contra el artículo 42 de la citada Ley, y contra el 44 de la misma, manifestando que los individuos del clero que renuncien al fuero, tanto en lo civil como en lo criminal, ejercen una acción del todo nula, quedan sujetos a las penas que la iglesia impone a los que hagan tal renuncia con infracción del derecho canónico. Y siéndome por la misma imposible cumplir lo dispuesto por el artículo 4º de los transitorios, relativo a los tribunales eclesiásticos, me veo igualmente obligado por lo sagrado de mis juramentos a protestar, como protesto, de la misma manera contra él, y a prohibir, como lo hago, la remisión de los negocios civiles de su jurisdicción a los jueces ordinarios que previene el repetido artículo.

Los principios religiosos que V. E. profesa le harán ver como justa mi conducta, y confiando en la rectitud de V. E., espero elevará esta comunicación al Excmo. señor Presidente interino de la República, e interpondrá su respetable influjo con S. E., cuyo catolicismo es tan notorio, a fin de que se digne libertar a la Iglesia, de quien es hijo, lo mismo que V. E., de la amargura que le ocupa por las prevenciones de esta Ley que sin acuerdo de la Silla Apostólica despojan al clero del fuero que ha tenido por largos siglos.

Aprovecho esta ocasión para protestar a V. E., por la primera vez, todas las seguridades de mi más distinguida consideración y particular aprecio.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Pedro, obispo del Potosí

EL OBISPO DE GUADALAJARA
NO CONCEDE DERECHO A LA AUTORIDAD CIVIL
PARA DESAFORARLOS

Guadalajara, diciembre 7 de 1855

(Excelentísimo señor ministro de
Justicia y Negocios Eclesiásticos)

Excmo. señor:

Son en mi poder los dos ejemplares de la Ley de 22 próximo pasado, relativa a la administración de justicia, que con oficio de 24 del mismo se sirvió V. E. remitirme. En los artículos 42 y 44 generales, y 4º de los adicionales, se contienen algunas disposiciones relativas al fuero eclesiástico, por las que me es imposible [pasarlas por alto] sin faltar a mis deberes más sagrados. La conciencia me obliga a manifestarlo a V. E., y suplicarle se sirva hacerlo presente al supremo gobierno de la nación, a quien presto toda mi consideración y respeto.

Desde los primeros siglos en que la iglesia de Dios se vio libre de las persecuciones, y empezaron los príncipes a contarse entre el número de sus hijos, teniéndose presente lo que la divina sabiduría ha dicho en el capítulo 7º del Ecco.: “Honra a Dios de toda tu alma, y honra a los sacerdotes”, comenzaron éstos a gozar de inmunidades y privilegios. De ellos hablan los más antiguos concilios, y los soberanos más grandes y piadosos los protegían con sus decretos y querían se observasen religiosamente. Nada extraño era que abundasen en esos sentimientos que inspira la misma naturaleza, y que tuvieron aun los príncipes paganos respecto de los ministros del culto idolátrico. La veneración a los sacerdotes es una consecuencia del aprecio y respeto a la religión; esto lo

han conocido y confesado algunos de los mismos protestantes, quienes no han tenido embarazo en decir que “la honra que se tributa al sacerdocio ha sido en todo tiempo el principal apoyo de todas las religiones; que mientras se ha tributado honor a los sacerdotes, en esa misma proporción se ha apreciarlo el culto divino; que despreciados aquellos, se menosprecia éste, a lo que se sigue al ateísmo y la anarquía”.

La inmunidad que había gozado el clero católico en las naciones que profesaban la única verdadera religión, no solamente en los gobiernos monárquicos, sino también en las repúblicas, fue una de las cosas que Lutero se propuso combatir, con el objeto de aniquilar, si posible fuera, el catolicismo; por eso quería que los príncipes revocasen la libertad dada a las personas y cosas eclesiásticas. Propagándose las doctrinas y máximas de este heresiarca, natural era que en todos los pueblos que las adoptaron desapareciese la inmunidad del clero; y como por desgracia los falsos principios del protestantismo no han dejado de introducirse, a lo menos en parte, en algunos pueblos católicos, se ha debilitado en ellos el amor y respeto a la verdadera Iglesia de Jesucristo, y por consiguiente se ha ido restringiendo poco a poco la inmunidad hasta acabar con ella.

Esto es, excelentísimo señor, lo que desean en México los que quieren que imitemos cuanto se ha hecho y se hace contra la Iglesia en otras partes, y con tal objeto han tomado de dos o tres meses a la fecha, el mayor empeño en desacreditar a los eclesiásticos, en calumniarlos, en inspirar al pueblo sencillo un odio mortal contra esa clase venerable, a la que respetan y han respetado siempre todos los verdaderos católicos. Ahí están los impresos que se hacen circular por todas partes, en los que se leen multitud de especies, las unas enteramente falsas, y las otras muy exageradas, desfigurando los hechos más sencillos, atribuidos a todo el clero los defectos de algunos de sus individuos; ¿y cuál podrá ser la mira de los que escribiendo en ese sentido quieren al mismo tiempo ver privados a los eclesiásticos del fuero que han gozado en este país desde que se estableció aquí la religión católica? Envilecerlos a los ojos de la multitud.

Agravio haría a la religión del Excmo. señor Presidente, en suponerlo ni por un momento capaz de miras tan siniestras y tan ajenas de un corazón cristiano; creo, por el contrario, que no llevará a mal el que se le haga presente lo que el Santo Concilio Ecuménico de Trento dice en la página 25, capítulo 2, de *Reformatione*, recomendando inmunidad [...] ¹⁷ eclesiástica [...] ¹⁸ se conserva perpetuamente salva y segura de todo impedimento, además de lo que ha establecido respecto de las personas eclesiásticas, ha creído deber amonestar a los príncipes seculares de su obligación, confiado que éstos como católicos, y que Dios ha querido que sean los protectores de su santa fe e Iglesia, no sólo convendrían en que se restituyan sus derechos a ésta, sino que también reducirán todos sus vasallos al respeto que deben profesar al clero, párrocos y superior jerarquía de la Iglesia, no permitiendo que sus ministros y magistrados inferiores violen bajo ningún motivo de codicia, o por consideración, la inmunidad de la Iglesia, ni de las personas eclesiásticas, establecida por disposición divina y por los sagrados cánones; sino que así aquellos, como sus príncipes, presten la debida observancia a las sagradas constituciones de los sumos pontífices y concilios. Decreta en consecuencia, y manda, que todos deben observar exactamente los sagrados cánones y todos los concilios generales, así como las demás constituciones apostólicas hechas a favor de las personas y libertad eclesiástica y contra sus infractores; las mismas que también renueva en todo por el presente decreto. Por tanto, amonesta al emperador, a los reyes, repúblicas, príncipes y a todos y cada uno de cualquier estado y dignidad que sean, que a proporción que más ampliamente gocen de bienes temporales y de autoridad sobre otros, en tanta mayor religiosidad veneren cuanto, es de derecho eclesiástico, como que es peculiar del mismo Dios y está bajo su patrocinio, sin que permitan que le perjudiquen ningunos barones, potentados, gobernadores, ni otros señores temporales, magistrados, y principalmente sus mismos ministros; antes por el contrario, procedan severamente contra los que impidan su

¹⁷ Destruído en original.

¹⁸ También destruido el original.

libertad, inmunidad y jurisdicción, sirviéndoles ellos mismos de ejemplo para que tributen veneración, religión y amparo a las iglesias, imitando en esto a los mejores y más religiosos príncipes sus predecesores, quienes no sólo aumentaron con preferencia los bienes de la Iglesia con su autoridad y liberalidad, sino que los vindicaron de las injurias de otros. Por tanto, cuide cada uno en este punto con esmero, del cumplimiento de su obligación, para que con esto se pueda celebrar devotamente el culto divino, y permanecer los prelados y demás clérigos en sus residencias y ministerios, con quietud y sin obstáculo, con fruto y edificación del pueblo".

Se pretende sostener por algunos que los privilegios del clero no son compatibles con los principios republicanos; pero Génova, Venecia, Lúca, Ragusa y otras repúblicas cristianas, en las que mantuvo esta clase sus inmunidades, manifiestan no ser éstas incompatibles con un Estado democrático. En ellos, como dice un escritor nada sospechoso, M. D'Alembert, comentando a Montesquieu, no se ha de buscar una igualdad extremada, absoluta y por consiguiente quimérica, sino aquel feliz equilibrio que hace a todos los ciudadanos igualmente sometidos a las leyes e igualmente interesados en observarlas. Ni porque a los clérigos se les intimen y hagan ejecutar por medio del tribunal eclesiástico dejan éstas de cumplirse.

Y si por último, no obstante lo dicho, se quiere privar al clero del fuero que constantemente ha gozado desde la erección de esta diócesis, espero de la religiosidad del Excmo. señor Presidente, de su amor y respeto a nuestra común madre la Santa Iglesia católica, que se servirá mandar pasar este asunto a Nuestro Santísimo Padre, con quien deberá acordarse lo que convenga sobre el particular. Se trata de un privilegio fundado en la equidad natural, muy conforme al derecho divino, sostenido por los cánones, protegido por las leyes civiles, que reconocen ser gran derecho se les mantenga a los eclesiásticos en el goce de él, por exigirlo así la honra de la fe; se trata, en, fin, de un privilegio que aun en la opinión de los que dicen que trae su origen de la autoridad civil, se ha concedido no a ésta o a la otra persona, sino a la Iglesia y a los ministros,

en razón de tales; por eso el sacerdote extranjero goza de este privilegio, lo mismo que los clérigos del país.

No dudo que el supremo jefe de la nación se convencerá de lo que llevo expuesto, y acordará previamente este punto con la Santa Sede; pero sí, contra lo que es de esperarse de su religiosidad, se nos exige el cumplimiento de la ley de 22 de noviembre en los artículos 42, 44 y en el 4º de los transitorios, el obispo de Guadalajara, en unión de su cabildo, y de todo el clero de la diócesis, ratifica de la manera más solemne que hacerse deba, la protesta que el 27 del próximo pasado hizo el Illmo. señor metropolitano por sí y a nombre de todos sus sufragáneos, contra los citados artículos. La hago contra el 42 en la parte que dispone la cesación del fuero en lo civil, y contra cualquiera disposición que le quite en lo que anuncia con respecto a lo criminal.

De la misma manera, como prelado de esta diócesis, declaro que el artículo 44 es contrario a lo dispuesto por la Iglesia; que la renuncia que cualquier individuo del clero haga del fuero, ya sea en lo civil, ya en lo criminal, es nula y de ningún momento aun cuando lo jure; y que ya sea la renuncia de grado o por fuerza, sobre ser de ningún valor, quedará por lo mismo sujeto el que la haga a las penas que la Iglesia impone a los contraventores, protestando como protesto contra el dicho artículo; protesto asimismo, como obispo de esta diócesis, contra el artículo 4º de los transitorios en la parte que toca a los tribunales eclesiásticos, prohibiendo, como prohíbo, la remisión de autos que el artículo dice por lo respectivo a los de esta diócesis.

Al hacer esta solemne protesta, que suplico a V. E. se sirva elevar al Excmo. señor Presidente de la República, cumplo con un imprescindible deber de conciencia; mi silencio sería un crimen a los ojos de Dios que [...] ¹⁹ juzgan, no busco ni debo hallar, cuando se trata de los derechos de la Iglesia, de unos privilegios que, cualquiera que sea su origen, han sido acordados a una sociedad soberana e independiente, y

¹⁹ Destruído en original.

por lo mismo son de una esfera eminente y no están sujetos a las comunes reglas de los privilegios.

Dios Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años.

Pedro, obispo de Guadalajara

EL OBISPO DE MICHOACÁN
SOLICITA SE SUSPENDAN TEMPORALMENTE
LOS EFECTOS DE LA LEY

México, diciembre 8 de 1855

Excelentísimo señor ministro de
Justicia y Negocios Eclesiásticos

Excelentísimo señor:

Hoy, a las diez de la mañana, recibí el oficio en que V. E. manifestándome haber elevado al conocimiento del Excmo. señor Presidente Interino de la República el mío fecha 30 del pasado, en que protesté contra los artículos 42, 44 y 4º de los transitorios de la Ley de 23 del mismo, se sirve decirme que no puede acceder S. E. a mi solicitud de que, sometiendo este negocio a la resolución del venerable jefe de la Iglesia, suspenda entre tanto la ejecución de los artículos protestados; que aunque sería fácil desvanecer con las mismas doctrinas que yo cito, los fundamentos en que apoyo mis protestas, no lo hace por no ser conveniente al decoro del gobierno entrar en discusión con algunos de sus súbditos; y por último, que salvada mi responsabilidad con mis protestas, no habrá por mi parte motivo alguno que indique un acto de desobediencia a la Ley.

Como esta comunicación no está reducida a un simple acuse de recibo, me permitirá V. E. que distraiga todavía su atención con un nuevo oficio contestando al que acabo de recibir.

Aunque en mi oficio del día 30 dije: “me atrevo a esperar que tomando en su alta consideración la gravedad suma y las trascendencias incalculables de este negocio, hará presente a nuestro Santísimo Padre

cuando estime conveniente para su final resolución y mandará suspender entre tanto los efectos de los artículos que han motivado esta comunicación y la del Illmo. señor Arzobispo”. Esto lo dije después de terminado el asunto de comunicación, y como una prueba de mi persuasión acerca de la religiosidad que distingue al Excmo. señor Presidente Interino de la República, mas no para expresar el objeto de mi comunicación. El lugar que este concepto ocupa y la forma en que lo expreso, tienden a indicar que mi oficio referido si bien entraña el deseo de que el Excmo. señor Presidente diese el paso indicado, no es una solicitud, sino una protesta con todas las manifestaciones de respeto que corresponden.

Dígnese V. E., admitir esta explicación del sentido de las referidas palabras.

En cuanto a los motivos que obligan a V. E. a omitir la refutación de los argumentos de la protesta que dirigí al Excmo. señor Presidente por ministerio de V. E., como obispo de Michoacán, y en virtud de la dependencia que bajo este carácter tenga de la suprema autoridad de la Iglesia, no menos estrecha que la que como ciudadano tengo del Supremo Gobierno de la Nación, yo debo respetarlos y los respeto. Sólo diré a V. E. que mis convicciones en este punto son muy firmes; que no veo lo que pudiera decirse contra el hecho de la existencia de una ley general de la Iglesia, contra el principio de la obligación que tenemos de observarla y hacerla observar los obispos, ni contra la subsistencia de ella mientras el Sumo Pontífice, o un concilio general, no la derogue en todo o en parte.

Concluye V. E., manifestando que salvada mi responsabilidad con mis protestas, no habrá por mi parte motivo alguno que indique un acto de desobediencia a la Ley. Confieso a V. E. que no comprendo con la debida exactitud el sentido de esta frase; pero como V. E. habla en general de la Ley, y yo no he protestado sino solamente contra tres de sus artículos, me honro con manifestar mi sumisión a la Ley en general, y en cuanto a los artículos 42, 44 y 49 de los transitorios, reproduzco aquí cuanto dije a V. E., en mi comunicación del día 30, y en consecuencia,

reitero las protestas que hice allí, obligado por el testimonio de mi conciencia.

Todo lo cual digo a V. E. en contestación, suplicándole se digne elevarla al superior conocimiento del Excmo. señor Presidente Interino de la República.

Dios guarde a V. E., muchos años.

Clemente de Jesús (Munguía),
obispo de Michoacán

AMPLIO EXÁMEN DE LA LEY SOBRE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EXPEDIDA POR JUÁREZ

Mucho se ha hablado de esta Ley, sin que cuando un juicio imparcial la examina se encuentren en ella grandes defectos; pero tiene dos puntos prominentes que son los que han llamado la atención del público, que viéndolos según sus pasiones, su ignorancia o su ilustración, ha formado de toda ella varios conceptos, dirigidos por el que ha formado de los dos puntos indicados. Nosotros trataremos de éstos y de los demás a que la Ley dé lugar.

Los dos puntos se contienen en los artículos 2º, 3º, 9º, 23 y 28. El 2º establece que la Suprema Corte se compondrá de nueve ministros y dos fiscales. El 3º que formará tres salas: la primera unitaria, la segunda de tres y la tercera de cinco, El 9º que [la Suprema Corte] cese en el conocimiento de los negocios civiles y criminales pertenecientes al Distrito y Territorios. El 23 establece un Tribunal Superior que conozca de los referidos negocios; y el 28 que señale las leyes a que se debe arreglarse para su conocimiento.

Estos son los artículos que forman parte de la Ley, en la que al ponerla en práctica ocurrió un acontecimiento desgraciado. Estaba acordado que los ministros que habían sido nombrados popularmente compusieran la nueva Corte, y por una propuesta que hicieron el gobierno varió el personal.

Este es un incidente que nada tiene que ver con la Ley, Él es una acción del ministro del ramo, del Presidente de la República o de todo el ministerio junto con el Presidente. Harían bien o mal, la representación merecería o no semejante castigo; pero nosotros nada calificamos y solamente tratamos de la Ley como ley, sin complicarla con esos accidentes; y así, en primer lugar preguntamos: ¿el gobierno tuvo facultad de disminuir los ministros y de aumentar los fiscales? Aquéllos

antes eran once, y ahora son nueve; los fiscales son ahora dos y antes era uno, ¿Pudo hacerse esta variación?

Respondemos que sí porque el gobierno ninguna obligación tenía de acatar al sistema federal. Una cosa es que atendiendo al noble origen de la popularidad, sean respetados los empleados nombrados con aquella calidad, y otra que tendrán un derecho para subsistir en cualquiera clase de gobierno, A más de que variado el sistema variaron las obligaciones, el gobierno de hecho las varió sin que nadie se opusiera. El señor Lombardini cuando funcionó de Presidente, nombró por sí al licenciado don Ramón Pacheco, ministro de la Suprema Corte. Después el Sr. Santa Anna nombró a los señores Salonio, Adame, Romero, Tornel, Sepúlveda y Lebrija, sin intervención alguna de ninguna otra autoridad, con lo que prácticamente acabó la circunstancia de que los ministros fueran nombrados popularmente, ya de un modo directo, ya indirecto. El mismo Santa Anna nombró presidente al Sr. Pavón y hasta el nombre mudó a la corporación, dándole el de Tribunal Superior de Justicia. Todo esto lo hizo en virtud de las facultades omnímodas con que él mismo se revistió; pues estas propias facultades tiene y tenía el gobierno actual por el artículo 39 del Plan de Ayutla, y más terminantemente por el 33 de las reformas hechas en Acapulco, en el que se dijo: "El Presidente Interino, sin otra restricción que la de respetar inviolablemente las garantías individuales, quedará desde luego investido de amplias facultades para reformar todos los ramos de la administración pública, etc.". Con que no hay duda en que el gobierno estaba facultado para hacer lo que quisiera.

Pero aún [no] atendiendo a la ley de su creación podía hacerlo, porque el artículo 124 de la Constitución dice: "La Corte Suprema de Justicia se compondrá de once ministros, distribuidos en tres salas, y de un fiscal, pudiendo el Congreso General aumentar o disminuir su número si lo juzgare conveniente". Es pues evidente que aún según la Constitución Federal, podía su gobierno disminuir el número, pues cuando la Constitución dijo que el Congreso podía disminuirlo, era lo mismo que si hubiera dicho: el legislador podrá disminuirlo; ahora el legislador es el Presidente, luego ejerce las atribuciones que debía ejercer el Congreso.

El artículo 138 de la propia [Constitución] dijo: "Una Ley determinará el modo y grados en que deba conocer la Corte Suprema de Justicia en los casos, etc." Esta Ley no era la irrevocable, estaba naturalmente sujeta a la variación de casos, y habiendo llegado el actual en que son muy pocos de los que conoce, y habiendo manifestado la experiencia que son también muy pocos los expedientes que se forman sobre ellos, están bien divididas las salas. Hasta aquí hemos manifestado la legalidad con que ha obrado el gobierno; pasemos a las anomalías.

Lo es en primer lugar el haber nombrado dos fiscales; la Corte ha estado bien servida con un fiscal y dos agentes, y cuando se le quitaron en otra ocasión las facultades de audiencia, como ahora se la han quitado, lo estuvo con un fiscal y un agente. ¿A qué duplicar hoy el número de fiscales cuando la Corte tiene mucho menos que hacer? Esto no nos parece una ilegalidad, sino una inutilidad y una inconsecuencia.

Sobre algunas de las prevenciones de la Ley, como la creación de un Tribunal Superior para el Distrito, podrá haber distintas opiniones que puedan referirse a la conveniencia, a la utilidad de las reformas, al acierto del gobierno; pero admitidos ciertos defectos no habrá motivo para el cargo de ilegalidad, que es de la que tratamos de vindicar a la Ley de Administración de Justicia.

Este es el primero de los puntos prominentes que hay en la Ley, repetimos que nada decimos de la destitución de los magistrados antiguos, porque como se ve claramente, si están mal quitados será un cargo del ministro, pero no de la Ley. Los demás artículos de ella, que pueden llamarse reglamentarios, nada especial contienen que llame la atención, de suerte que las disputas que puede haber sobre ellos serán disputas de pura opinión; como por ejemplo, si será mejor que todas las salas fueran colegiadas o unitarias; pero esta y otras disputas no importan una ilegalidad porque no atacan ninguna garantía social, y así nada hay que decir acerca de ellas; pasemos a las disposiciones generales en las que se encuentra el otro punto prominente de que hemos hablado.

Fuero eclesiástico en lo criminal

Como se ha visto, un gran alboroto se ha suscitado sobre la quitada del fuero civil a los eclesiásticos, lo que ha dado a conocer lo poco versados que están los eclesiásticos de la República en sus leyes. Nosotros no quisimos hablar cuando la efervescencia de las pasiones podía haber dado un mal resultado a lo menos de hecho. Ahora que ya las pasiones se han calmado, que hay un gobierno moderado,²⁰ que sus ministros no tienen aspiraciones, tocamos el punto, para que si se quiere se discuta con espacio, con moderación, con prudencia, y ya queden algunas verdades establecidas para lo venidero, y principalmente para que se acallen las conciencias escrupulosas. Comencemos, pues.

Los artículos que han dado lugar a las cuestiones anteriores son el 42, que dice: "Los tribunales eclesiásticos cesarán de conocer de los negocios civiles y continuarán conociendo de los delitos comunes de los individuos de su fuero, mientras se expide una Ley que arregle este punto". Después nos ocuparemos de los tribunales militares y del fuero de guerra, de que sigue tratando el artículo referido. El otro artículo que fue el principal que dio motivo a la cuestión fue el 44, que dice: "El fuero eclesiástico en los delitos comunes es renunciable". He aquí los dos artículos que han sido sin duda los que han llamado la atención del venerable cabildo eclesiástico de la capital y de otros de fuera de ella, como si se tratara de negar el misterio de la Santísima Trinidad, y en resumidas cuentas, los tales artículos son favorables y muy favorables a los eclesiásticos, como vamos a demostrarlo, tratando primero del fuero criminal, como que es el principal y después del civil.

El señor ministro Juárez, cuando en el artículo 42 dijo que los tribunales eclesiásticos continuaran conociendo de los delitos comunes de individuos de su fuero, concedió a los eclesiásticos un derecho que no tenían, o porque ignoraba las leyes existentes, o porque si las sabía quiso hacerles ese favor. Lo mismo puede decirse del artículo 44, aunque en él

²⁰ Ya estaba en funciones como Presidente de la República el general Ignacio Comonfort. HCHS.

se dice que los eclesiásticos en los delitos comunes pueden renunciar el fuero. Esta renuncia debe traducirse por elección, de suerte, que es lo mismo que si hubiera dicho: “los eclesiásticos pueden elegir el juez que quieran en los delitos comunes”, porque en realidad, según nuestras leyes, los eclesiásticos ningún fuero gozaban ni gozan en los delitos comunes. Esto es lo que vamos a probar, y suplicamos que se nos tenga un poco de paciencia si somos largos; pero la materia lo merece.

En 25 de octubre de 1775, se expidió por el rey [español] la real orden siguiente:

Virrey, gobernador y capitán general de las provincias de Nueva España y presidente de mi Real Audiencia.

En carta de 30 de abril de este año disteis cuenta en testimonio del ocurso que os hizo desde Valladolid de Michoacán, Fr. Félix Díamo, religioso de la regular observancia, que pasó a la provincia de Santiago de Jalisco en la misión del año de 1789, manifestándonos haber incurrido en fragilidad humana en incontinencia con una niña distinguida de la ciudad de Guadalajara, a quien violó sin sugestión ni engaño, pidiendo para precaver las resultas de este hecho se le depositara en uno de los conventos de su orden de distinta provincia, ínterin se le desafiliaba; que habiendo pedido informe al reverendo obispo de Valladolid y a la Audiencia de Guadalajara, aparecía del que verificó aquel prelado, que después de haberlo depositado en un convento interpuso su respeto con el provincial, que no tuvo efecto; y del de la expresada Audiencia, no ser tan sencillos los procedimientos del reo, ni ajenos de circunstancias agravantes, explicando las más notables, en cuyo tiempo hizo fuga de Valladolid, y presentándose en el convento de San Agustín, os dirigió nueva instancia, pretendiendo servir por diez años bajo de mis banderas, por lo que opinó el fiscal de lo civil, a quien se dio vista del expediente, debían despreciarse las irregulares representaciones de este religioso y entregarlo a su provincial,

para que lo corrigiese conforme a las constituciones de la orden, y dispuesto así, concluyó éste la causa, sentenciándolo a diez años de prisión, con otras penitencias, y que cumplidos dos de arresto, se le remitiera en partida de registro a disposición del padre general, interrumpiéndose su ejecución por el declarante; con el nuevo delito de escribir a su cómplice, por lo que pidió a la Audiencia se le dirigiera a España para cortar de raíz todo escándalo, disponiendo en consecuencia su remisión con la causa en primera ocasión, a lo que accedisteis, conforme con lo que os propuso el enunciado fiscal de lo civil, a fin de que me sirviera resolver lo que fuera más de mi real agrado. Visto lo referido en mi Consejo de las Indias, con lo expuesto por mi fiscal, ha parecido entre otras cosas prevenir a la nominada Audiencia, y encargar al provincial y definidores de Santiago de Jalisco, remitan inmediatamente por mano de mi infrascrito secretario los autos originales que hubiere sobre los expresados delitos, quedándose con los testimonios correspondientes, y en su consecuencia, ordenamos y mandamos que en casos semejantes procedáis con arreglo a la Ley 71, título 15 del nuevo código, de que se os acompaña copia, estando muy a la mira de que los fiscales sigan estas causas por todos los trámites, y no propongan ni se convengan en que se corten con el aparente pretexto de guardar el honor y decoro a las religiones, en casos como el presente atroces y escandalosos, en que después de haber llenado de horror al público se le deja con el desconsuelo de la impunidad.

Fecha en San Lorenzo a 15 de octubre de 1775. Yo el rey.

Por mandado del rey nuestro señor, Francisco Cerda.-
Señalado con tres rúbricas.

Es copia. México, 8 de junio de 1796—Bonilla.

Es copia. Ángeles, a 13 de junio de 1796—Flores.

Ley 71, título 15 del nuevo código. En los delitos que cometan los religiosos, se proceda como en esta ley se expresa:

Declaramos que delinquiendo gravemente algún religioso dentro del ámbito de su convento, y con mayor razón fuera, contra personas seglares por injurias reales o verbales, conozca de la causa que se le fulminare el diocesano respectivo, con arreglo a lo dispuesto por los sagrados Cánones, y sí el delito fuere de los enormes o atroces, aunque el ofendido sea otro religioso, es nuestra voluntad se forme el proceso del hecho criminal, por nuestra justicia real en unión con la ordinaria eclesiástica, hasta poner la causa en estado de sentencia, y si de autos resultare mérito para relajación del reo al brazo secular, pronunciará el eclesiástico su sentencia, y devolverá los autos a nuestra justicia real para que proceda ulteriormente a sentenciar, obrar, o ejecutar todo lo demás que hubiere lugar en derecho. Y encargamos a nuestros jueces reales y a los eclesiásticos tengan la mayor conformidad y buena armonía, proponiéndose por objeto principal el espíritu de justicia que exige la vindicta pública, teniendo presente la Ley 12, y en los delitos de lesa majestad, la ley 13, título 12 de este libro.- Concuerda con su original de que certifico.- Antonio Porcel.

Es copia del original que queda en esta secretaría de Nueva España, de que certifico yo, don Ignacio Sebastián de la Parra del Consejo de S. M., su secretario y oficial mayor de ella,

Madrid, 25 de noviembre de 1795.- Ignacio Sebastián de la Parra.

Es copia. México, 8 de junio de 1796.- Bonilla.

Es copia. Ángeles, a 13 de junio de 1796.- Flores.

Ley 12, título 9, lib. 1º del nuevo código, título de inmunidad:

La seguridad que debemos procurar a nuestros amados y fieles vasallos, nos obliga a castigar los delitos que la perturban, con penas correspondientes a satisfacer la vindicta pública, y capaces de refrenar la perversa inclinación de algunos hombres, y no debiendo extenderse la inmunidad a los perpetradores de tan perjudiciales delitos a sólo la potestad eclesiástica, por ser insuficientes para ello, y repugnantes al espíritu de lenidad y mansedumbre esencial y canónica: declaramos que los eclesiásticos no deben gozar inmunidad en los delitos enormes o atroces, alborotos y perturbaciones de la paz pública.

Ley 13 del código nuevo, título 12, de los clérigos:

Declaramos que el conocimiento de las causas de crimen de lesa-majestad que cometieren los clérigos en motines, levantamientos sediciosos, y otros casos semejantes, corresponde a nuestras justicias reales, y mandamos a nuestros virreyes, presidentes y audiencias, no consientan en ninguno de dichos casos los prelados que fueren eclesiásticos tornen conocimiento de las expresadas causas ni inhiban a los fueros reales, antes bien les remitan a ellos inmediatamente que por su sumaria, o en otra cualquiera forma aparezca que es el crimen de la clase referida, observando en los respectivos casos la Ley 12, título 9, y la 75, título 16 de este libro.

Estas son las leyes que estaban vigentes al tiempo en que logramos nuestra independencia. Conforme a ellas se siguieron las causas de los eclesiásticos Alpuche y Gondra, aunque con algunas anomalías toleradas por los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, como fue: la de admitir al señor licenciado Lope Vergara en clase de comisionado por la potestad eclesiástica, estando prohibido todo juicio por comisión; haber admitido en segunda instancia a un comisionado de la mitra de

Puebla, a la que sin fundamento alguno se dio parte en esta segunda instancia; pero todo se pasaba porque como en lo sustancial estaban de acuerdo las dos potestades, nada les importaban esos incidentes, y con ellos demostraban su perfecta unión. Mas nada de eso debió haberse hecho, sino que aún permitiendo que el señor Lope Vergara conociera en clase de comisionado, debió conocer hasta el estado de sentencia y entonces haberse retirado y continuado sola la jurisdicción ordinaria. Tampoco debió haber intervenido en segunda instancia el obispo de Puebla, porque consignados los reos en primera al juez civil, nada tenía que hacer el eclesiástico; pero por la razón dicha se toleraron esas anomalías. Además, el defensor del Sr. Alpuche fue el Illmo. Sr. Dr. don Manuel Posada antes de ser obispo, y el del Sr. Gondra, el Sr. Lic. don Antonio Lombardo, ambos de notoria instrucción; y si en la jurisdicción o en la secuela del juicio hubieran notado alguna ilegalidad la habrían reclamado, y nada de esto hicieron, sin duda porque estaban bien persuadidos de la legalidad con que se procedía.

Pasemos ahora a leyes dudosas: lo es el decreto de las Cortes de España de 26 de septiembre de 1820, es decir, un año y un día antes de haber logrado nuestra independencia. Se ha visto por las leyes anteriores que los eclesiásticos no gozaban de hecho de fuero alguno en lo criminal; pero como siempre se están agarrando las palabritas para sostener una cosa que no existe; de ellas se valieron para hacer que el virrey no lo publicara en México; pero se publicó en dos o tres provincias de la República, y aún en Yucatán se siguió un proceso con arreglo a él. Debió ciertamente haberse publicado en México; pero como se sabe muy bien, aquí se daba, como suele decirse, carpetazo a varios decretos de las Cortes de España, y contra esto clamaban los impresos de aquel tiempo, cuyos títulos han quedado por refranes hasta nuestro tiempo, como: “La chanfaina se quita”, “Don Antonio siempre el mismo”, y otros. Pues así sucedió respecto del decreto indicado, al que se llamaba “El decreto de la monterita”, porque en su artículo 5º dice: “Que si el juez eclesiástico quería degradar al reo se le ejecutara cubriéndole la cabeza con gorro negro”. El artículo 1º dice que todos los eclesiásticos seculares y regulares quedan desaforados y sujetos a la jurisdicción ordinaria, lo

mismo que los legos en todo delito que merezca pena capital o *corporis* afflictiva. El segundo dice que las penas *corporis* afflictivas son las de extrañamiento del reino, presidio, galeras, bombas, arsenales, minas, azotes y vergüenza pública. Este decreto lo que hizo fue explicarse con toda claridad; pero lo mismo que dice era lo que estaba mandado por las leyes antiguas, pues la 71 ya transcrita únicamente da conocimiento a los diocesanos en delitos leves, como injurias reales o verbales; pero en los delitos atroces, que son los que merecen penas *corporis* afflictivas, los sujeta a la jurisdicción ordinaria, de suerte que a los diocesanos sólo dejó la ley citada los delitos de que hoy conocen los jueces menores.

Si la cédula de 25 de octubre de 1775 sólo habló de religiosos, y se refiere y aprueba la 71 que habló también de religiosos; también se refiere a la ley 12 y a la 13 del mismo código, y la 12 expresamente dice: "Declaramos que los eclesiásticos no deben gozar inmunidad en los delitos enormes o atroces, y en los mayores de alborotos, etc." Así pues, esta Ley dice lo mismo que el decreto de Cortes, aunque con otras palabras; de suerte que el decreto no tiene más diferencia, sino que habló al estilo moderno en que se redactan las leyes, resolviendo claramente y en pocas palabras lo que las antiguas dicen con muchos rodeos; mas en la sustancia son unas mismas. Pero se nos dirá, si según las leyes antiguas estaba mandado lo mismo que en el decreto, ¿a qué viene hacerse cargo de éste, cuya validez se niega? Respondemos que lo hemos hecho porque conocemos la chicana forense, y mañana nos dirían: aquí no se llegó a publicar el decreto de 26 de septiembre de 1820, que desaforaba a los clérigos, y de aquí querría inferirse que los clérigos gozan del fuero porque si no vale el decreto que se los quitaba, quedó ciertamente vigente. Para contestar a este sofisma, hemos probado que lo que ese decreto dispone, excepto que se ejecute a los eclesiásticos con un gorro negro, si la potestad eclesiástica no quisiere degradarlos, estaba vigente por nuestras leyes antiguas, y se ha practicado en nuestra República Mexicana.

Después de todo lo que hemos expuesto, que no tiene réplica, ¿no es cierto, ciertísimo, que el señor Juárez hizo un favor a los clérigos, los que en vez de estar en contra de la Ley debían haberla abrazado como un

escudo? La Ley dice en su artículo 42 que los tribunales eclesiásticos sigan conociendo de los delitos comunes de las personas de su fuero, los delitos comunes no son solamente los delitos leves, sino todos, aún cuando sean atroces; pero que no tengan alguna circunstancia que los someta a un tribunal especial, en lo que derogó las leyes 71 y 12 que sujetaban en semejantes delitos a los eclesiásticos al fuero ordinario, y así en esto ganaron los eclesiásticos. El artículo 44 permite la renuncia del fuero en lo criminal. Pero hablando con toda imparcialidad, ¿esa ley no es una concesión favorable, según lo dispuesto por nuestras leyes? Si según éstas, como hemos probado, los eclesiásticos no gozan fuero en los delitos que merecen penas *corporis* afflictivas, como lo dice terminantemente la ley 12 ¿no es un favor ponerles en su mano el juez que ha de juzgarlos? ¿A qué viene hacer alto en la palabra renuncia, cuando lo que ésta da a entender, es lo contrario de lo que expresa, porque lo que viene a decir es, que deja a la elección de los eclesiásticos, ser juzgados por sus jueces o por los seculares? ¿No es esto un favor?

Si el señor Juárez, en lugar de haber puesto los artículos 42 y 44, hubiera dicho (como nos parece que debía haberlo hecho para quitarse de disputas): se revalidan las leyes 71, 12 y 13 del nuevo código, que están mandadas observar por la cédula de 25 de octubre de 1775, o hubiera dicho simplemente quedan vigentes las leyes que arreglan el fuero eclesiástico, ¿qué habrían dicho entonces los eclesiásticos? Todo el mal consistió en que dijo que el fuero eclesiástico podía renunciarse; sin duda porque no tuvo presentes las leyes que hemos copiado, y que como hemos asegurado, la palabra renuncia está muy mal usada, porque no estando concedido fuero alguno en lo criminal a los eclesiásticos, nada había que renunciar, por lo que esa palabra debe traducirse por esta otra: **elegir**, porque ya habiendo dicho en el artículo 42, que los tribunales eclesiásticos seguirían conociendo en los delitos comunes de los eclesiásticos, les concedió un fuero que no tenían, y el artículo 44, lo que establece en sustancias, que los eclesiásticos elijan el juez que quieran, o el suyo, o el ordinario. En tal concepto, no sabemos a qué venga la consulta a su Santidad, ni lo demás que se ha objetado a la Ley referida.

Lo mismo decimos de algunos pronunciamientos que se han iniciado sobre “Religión y Fueros”. Estos son disparates, que lo que intentan es buscar un pretexto para alterar la tranquilidad pública. Pero de esto nos haremos [al hablar] del fuero civil de los clérigos y del de los militares, porque por ahora nos hemos alargado bastante; pero nuestros lectores conocerán que la materia lo merece; y para quitar toda duda, manifestaremos que el código nuevo a que se refiere la cédula de 25 de octubre, nunca se llegó a dar como código, El se estaba trabajando para darlo a luz; pero circunstancias imprevistas impidieron su conclusión y publicación. Mas algunas de sus leyes valen como leyes sueltas, porque está mandado por otras que valgan, como sucede con las citadas, que reciben su fuerza de la cédula de 25 de octubre, lo que advertimos para que no vaya a quererse oponer que el código nunca se dio, y que de consiguiente, sus leyes, aunque se hayan escrito, no valen. La objeción es muy fútil; pero como en cuestiones de capricho nada se perdona, por eso anticipamos la respuesta.

Por último, advertimos que el fuero eclesiástico estaba ordenado muy distintamente en América de lo que estaba en España. Allí la jurisdicción unida formaba el proceso, y en estado de sentencia lo permitía por la vía reservada al rey, que daba la sentencia, sin que ella hubiera apelación; pero en muy raros casos era fuerte la pena, porque la lenidad del rey la modificaba cuanto podía; pero en la América, como se ha visto, estaban sujetos los eclesiásticos a los tribunales ordinarios seculares, que los juzgaban con arreglo a las leyes.

Juan Bautista Morales

II

FUERO ECLESIAÍSTICO

Mucho tiempo ha, es decir, desde que pasó la época de la Edad Media, que ya no es una opinión, sino una verdad demostrada, que el fuero eclesiástico, tanto en lo criminal como en lo civil, es una liberalidad de las potestades temporales. Así lo han asegurado los reyes, así lo han dicho los mismos autores más ultramontanos. En España, en donde no puede negarse que se ha tributado siempre más respeto que en otra parte a la religión y a sus ministros, ha confesado un rey lo que acabarnos de insinuar. En la real cédula de 19 de noviembre de 1799, de que se pone un extracto en el número 10, libro 2º de la *Novísima Recopilación*, y que como hemos dicho en nuestro artículo anterior es una de las que arreglan el fuero eclesiástico en España, muy diverso de las leyes que para gobierno de esta América dictó el rey, y que hemos copiado en el citado artículo, dice el mismo soberano: “Aunque es indudable que el origen de la jurisdicción contenciosa eclesiástica no tiene otro principio que la liberalidad de los reyes, el honor a Dios y a sus ministros, que ha sido la causa impulsiva de ellos, exigen de necesidad que los tribunales procedan siempre en cuanto sea respectivo a minorar estos derechos, por los caminos y medios que el mismo soberano señale”. Nadie ha reclamado esta aserción del rey de España, la que si hubiera contenido una herejía, ciertamente que no se hubiera dejado pasar inadvertida, y es de suponer que esa cédula fue publicada hasta en la *Gaceta de Madrid*, y después de muchos años de haberse dictado la célebre decretal del Sr. Inocencio III, que ha sido la que ha dado ocasión a las disputas que ha habido sobre esta materia.

La decretal referida es la que forma el capítulo 12 del foro competente, y ha sido atacada y defendida por los mayores canonistas, lo que prueba que no es un dogma, porque si lo fuera, nadie la atacaría sin incurrir en la nota de hereje. Tan distinta está de contener un dogma, que los autores ultramontanos que la defienden, convienen siempre en que el fuero eclesiástico proviene de la liberalidad de la potestad civil. El Dr.

González, que es uno de los que con mayor ahínco sostienen el contenido de la decretal, asegurando que es de derecho público la concesión del fuero al estado eclesiástico, se expresa así: *“Hoc jus publicè indultum, inductumque est; ¿à quo? ¿An à Christo inmmediatè? An à sacris canonibus, epistolisque Pontificum? An à permissu. Potestatum soecularium, agnoscentium portionemillam ex sorte Domini esse, nec ad ditionem, dictionemque suma pertinere? Utut sit, quod alibi ex tractandum "conutit specialitatem fori ecclesiastici inductam esse, preunte divina ratione; primo Chrisianorum Principum permissionibus, sive edictis" dein Pontificum decretis, el conciliorum sanctionibus”*. Se ve por la autoridad alegada, que los mismos defensores del fuero eclesiástico no pueden dejar de convenir en que originariamente, aunque sea por respeto a Dios y a sus ministros, la concesión del fuero es concedida por la autoridad civil; ni ¿cómo podría ser de otro modo? ¿Qué nación, qué gobierno admitiría en su seno a los sacerdotes, si en el hecho mismo de serlo perdía toda autoridad sobre ellos, y los dejaba entregados al poder de otro soberano muy distinto?

El error en este punto ha venido de dos causas; la primera, de ese infundado respeto y valor que se ha dado al derecho romano, de suerte que siempre que se dice: “tal cosa está permitida, o prohibida, o mandada por el derecho civil”, se entiende por el derecho romano; es necesario que se diga “por el derecho patrio”, para entender que es mandada por el derecho francés, inglés, español, etc. Esta locución era más usada antiguamente que ahora, y como hemos dicho otras ocasiones, y es cosa demostrada y patente a todo el que estudia, los autores todos tenían la manía de interpretar, aclarar, restringir, ampliar y comentar las leyes patrias por los romanos, como si el derecho romano tuviera autoridad sobre todas las naciones y gobiernos, costumbre que no ha servido más que para embrollar las leyes patrias, y suscitar interpretaciones arbitrarias de las leyes propias.

La segunda causa ha consistido simplemente en la palabra jurisdicción, la que se ha entendido del modo que no debe entenderse, y de ahí ha venido el decir que la jurisdicción eclesiástica es de derecho divino, sin hacer la distinción que debe hacerse. Expliquemos este punto.

La Iglesia es cierto que tiene por derecho divino jurisdicción para dirigir la religión católica, y procurar que todos los que voluntariamente la profesan consigan la salud eterna; sobre esto no hay disputa, es doctrina consignada en el Evangelio, y repetida varias veces en las epístolas canónicas; pero jurisdicción temporal ninguna tiene, lo que consta también de las palabras de Jesucristo. Esto es tan cierto que al mismo tiempo que podemos manifestar los textos que convienen en estas palabras de Jesucristo, “Mi reino no es de este mundo”, desafiamos a los sostenedores del fuero, a que nos citen un solo texto en que se conceda a la Iglesia la facultad civil, o siquiera la que tenga para juzgar civilmente a los clérigos. El error ha venido de que generalmente se dice: “la jurisdicción eclesiástica es de derecho divino”. Es cierto, pero la jurisdicción espiritual, no la temporal, y aun aquella se ha de usar de manera que no perturbe ni cause la ruina de las almas oponiéndose inconsideradamente a las leyes civiles, no a las romanas, sino a las de cada país. Véase a Lackics en el segundo tomo de su obra titulada *Jurispublici ecclesiastici pars generalis*, principalmente en el capítulo VI, números LXVIII, LXIX y LXX. En otro lugar del mismo autor, se leerán las expresiones que dijo Osio al Emperador Constantino, que fueron nada menos que las siguientes: “*Date, scriptum est, quoe sunt Coesaris, Coesaris, et quoe sunt Dei, Deo. Neque enim fas est nobis in terris imperium tenere, neque tu thymiamatum et sacrorum potestatem habes Imperator*”. En la página 108 se verán estas palabras: *Itaque habet Ecclesia potestatem à Christo sibi traditam coexcendi fascinerosos mediis spiritualibus, habet jus paternoe castigationis, “habet decernendoe penoe etiam corporalis facultatem summorum. Principum beneficio tributam”*. Ni podía ser de otro modo. Los eclesiásticos porque lo son, no dejan de estar sujetos a las leyes del país en que viven, y en este principio se fundan los recursos de fuerza y los de protección, como puede verse en las *Máximas sobre recursos de fuerza* de Covarrubias, en los *De Regia protectione* de Salgado, en el Frasso, en el Rivadeneyra y otros. Solamente en esa base pueden apoyarse la facultad que tiene la potestad civil para proteger a los eclesiásticos; pues si no fuera así, ¿en qué podría fundarse? No sabemos cómo haya eclesiástico lleno de

orgullo infundado que diga, yo no soy más que súbdito romano. Pues si sólo eres súbdito romano, vete a Roma, ¿qué haces aquí disfrutando de los beneficios que sólo pueden disfrutar los mexicanos?

Las canonjías, los curatos y las capellanías, y todo beneficio eclesiástico es para mexicanos: luego a ti no te tocan, vete a Roma si quieres alguno, porque allí de donde eres súbdito es donde debes ser considerado para colocarte en algún beneficio. Se ve que aun las capellanías, casi todas por razón de su fundación, son establecidas para personas no sólo que en general sean mexicanas, sino que en particular pertenezcan a algún lugar determinado de la República, como por ejemplo, para jóvenes poblanos, oaxaqueños, michoacanos, etc. Sería necesario suponer que inmediatamente que recibían la capellanía se convirtieran en súbditos romanos y dejaran de ser mexicanos; pero si esto sucediera en México, lo mismo sucedería en otras partes, y entonces se verificaría lo que dijimos al principio, ¿qué nación, qué gobierno permitiría que hubiera eclesiásticos en su país, cuando sabía que inmediatamente dejaban de ser súbditos suyos y se sometían a la jurisdicción de otro soberano? ¿Cómo podrían interponer un recurso de fuerza, cómo pedir protección, cuando se hallaban oprimidos por sus superiores? No puede ciertamente negarse que los eclesiásticos son súbditos del país en que viven, o mejor dicho, de aquel en que tienen su domicilio.

Cuando no se había confundido la palabra **potestad** con la palabra **jurisdicción**, no había lugar a las graves equivocaciones que hay ahora; la palabra potestad manifestaba toda la facultad que tiene la iglesia para gobernar en lo espiritual, pero nada en lo temporal, porque en lo temporal ninguna tiene; Jesucristo no vino a fundar un reino temporal, sino uno espiritual. Así que Natal Alejandro dice: *“Opino enim illa, quoe Ecclesioe, vel Romano Pontifici potestatem tribuit etiam indirectam, in temporalia, Regum ac Principum supremorum, falsa est, erronea, verbo Dei et doctrinæ Patrium adversa”*. *Hist. Ecclesias.* secc. XIII, diss. 3, art. 3. La jurisdicción contenciosa eclesiástica no tiene otro origen que la liberalidad de los soberanos. Es cierto que Jesucristo y sus apóstoles recomendaron que se abstuvieran de pleitos no solamente los

eclesiásticos, sino todos los católicos. Jesucristo dijo que “al que pidiera la capa se le diera la túnica”, y los apóstoles encargaron mucho a los católicos que no litigaran ante los tribunales gentiles; pero esto por otras consideraciones, no porque no estuvieran sujetos a ellos. Así era que cuando el actor se presentaba a un juez contra un cristiano, éste no podía excusarse de comparecer ante el juez. Lo que querían los apóstoles era que las disputas entre los cristianos las decidieran los obispos según las reglas de la recta razón, que es lo que llamamos comúnmente *ex oequo, et bono*, porque también querían los apóstoles evitar dos cosas: la primera, que los cristianos no se afectaran demasiado de sus asuntos, como sucede casi siempre con los trámites judiciales, sino que descansaran en la sabiduría y prudencia de un hombre justo que les compartiera sus derechos con toda justicia. Querían también los apóstoles que los litigios de los cristianos no sirvieran de escándalo a los gentiles, que sabiendo que la religión de Jesucristo les mandaba el desprecio de las cosas terrenas, los vieran litigar con ahínco para defenderlas o adquirirlas. Estos eran los fines que tenían los apóstoles; pero nunca el de prohibir el acceso a los tribunales civiles.

Los obispos se portaron tan bien, que llamaron la atención de los gentiles. Al principio las sentencias que daban los obispos no tenían más fuerza que la que les daba el consentimiento de las partes. Cuando la Iglesia dejó de ser una corporación prohibida por los gentiles y la hizo pública el primer emperador gentil que se convirtió al cristianismo, que fue Constantino, dio a las sentencias de los obispos tanta fuerza como a las de los jueces; después era tan recomendable la sabiduría y tino con que despachaban los negocios los obispos, que los mismos gentiles se sujetaban a ellos para que decidieran sus pleitos; y aún hay autores que defienden que es genuina una ley que mandaba que cuando un litigante quería sujetarse al juicio del obispo se pudiera obligar al otro, aunque no quisiera; pero otros autores la tienen por apócrifa, pues no teniendo los obispos otro carácter que el de jueces árbitros, era preciso que las dos partes consintieran, si no sería un contra-principio el que en juicio de árbitros se obligara a una de las partes a litigar contra su voluntad ante el juez que nombraba la otra. Este fue el origen que tuvo la jurisdicción

eclesiástica; pero nunca se oyó decir que los clérigos estuvieran por derecho divino exentos de ser reconvenidos ante los jueces seculares. Los emperadores romanos Constantino, Arcadio, Honorio, Teodosio y Justiniano, les concedieron varios privilegios, que siempre fueron privilegios, o lo que es lo mismo, concesiones gratuitas y nada más. Hemos tratado de la jurisdicción eclesiástica en general, descendamos a la particular para juzgar a los clérigos, S. Ambrosio dice: *Decet esse (clericum) benignum non alieni cupidum, immo de sub jure cedentem potius aliqua, si fuerit lacessitus, quam aliena jura pulsantem, fugitantem litium abhorrentem à jurgiis, redimentem concordiam et tranquillitatis gratiam*. Sin embargo, de este consejo, no sólo bueno para los eclesiásticos, sino para los legos, nunca se ha dudado que los eclesiásticos no tengan derecho al defender y reclamar lo suyo. Estará muy bien hecho cuando la pérdida recaiga sobre sus personas; pero harán mal cuando recaiga sobre un tercero, y así deben entenderse los textos todos que dicen que deje uno perder sus bienes antes que litigar. Los emperadores romanos, queriendo que los eclesiásticos se distrajeran de su ministerio lo menos que se pudiera, concedieron a los clérigos que en un litigio fueran juzgados por sus superiores, como se ve por las leyes de Marciano y Valentiniano III. Después Justiniano amplió esta determinación en la ley 29, § 4, *Cod. de Épiscopale audientia*, cuyas palabras son dignas de atención. Dice así: *Has autem actiones, siquidem ad negotia ecclesiastica pertinent, necesse fore jubemus, ut à solis religiosissimis episcopis aut metropolitanis, au à sacris synodis, aut à sanctissimis patriarchis, cognoscantur: si vero civilium rerum controversia sit volentes quoactionem apud antistites instituere, patiemur, invitos tamen non cogemus; cum judicia civilia sint, si ca adhiere malint, apud; quem licet eitam de criminibus cognoscere*.

Justiniano era católico, y estaba bien instruido en su religión; si hubiera sabido que los eclesiásticos gozaban por derecho divino de su fuero, ¿habría usado de las expresiones de que usó? Él dice que si el actor quiere ocurrir contra el clérigo ante el juez eclesiástico, *patiemur*, es decir, lo sufriremos, lo toleraremos; pero si no quisiere, dice, *invitos tamen non cogemus*. ¿Habría usado de esas expresiones si hubiera estado

persuadido de lo contrario? De ninguna suerte, porque era lo mismo que decir, aunque por derecho divino es mandado que los jueces legos no juzguen a los clérigos, si alguno quiere que lo juzguen, no nos oponemos, ¿No era ésta una infracción del derecho divino? Y ¿puede siquiera pensarse que un príncipe religioso hubiera permitido semejante cosa? Ciertamente que no. Después dio otras leyes en que sujetó a los monjes y a las monjas a la jurisdicción de los obispos, de donde nos nace esta otra reflexión. Nadie ha dicho que monjes por monjes, ni las monjas por monjas, tengan fuero por derecho divino; Justiniano se los concedió por las causas que expresa, luego no puede negarse que es un privilegio, una concesión voluntaria. Pues ya se sabe que si los frailes gozan de algún fuero es por las órdenes que tienen, no porque sean frailes, Al principio de la Iglesia, los monjes no eran más que personas particulares que se retiraban a vivir bajo el régimen de alguna persona virtuosa; pero nada tenían de eclesiásticos, y sería el mayor disparate decir, que porque se retiraban gozaban de fuero, y lo mismo puede decirse de las monjas. Si Justiniano se los concedió fue un favor que quiso hacerles la potestad civil; pues eso propio es aplicable a los clérigos.

Es pues un hecho, dígase lo que se quiera, que el fuero eclesiástico no tiene otro origen que la liberalidad de los reyes. Ahora todo el fundamento que tienen los eclesiásticos para sostener errores políticos es el capítulo 12 de *foro competent*i, en que el Sr. Inocencio III dijo que no podía renunciarse, porque lo que está concedido a una corporación no puede renunciarlo un individuo. Pero aquí entran las causas que dijimos antes: ¿Quién fue la autoridad que concedió a todo el estado eclesiástico el fuero? Los emperadores romanos, ¿y cuando? Cuando todo el mundo conocido estaba bajo su dirección, y así se encendió a todo el estado eclesiástico, porque todo estaba sujeto a un soberano, no porque hubiera un soberano superior a los que hoy existen, que ninguna obligación tienen de sujetarse a las concesiones hechas por aquellos emperadores. El señor Inocencio III vivió en un tiempo de ignorancia general en que había reyes que no sabían escribir ni leer. El era muy instruido y principalmente en el derecho romano, que era el que concedía el fuero, y como si este derecho fuera obligatorio a todo el mundo, estableció que el

fuero estaba concedido a la corporación, lo cual hoy no se puede decir, pues si está concedido a toda la corporación es porque en detalle lo han concedido cada uno de los soberanos católicos, no porque esté mandado en el derecho romano. A la manera que el fuero militar, que aunque en todas partes, poco más o menos, está concedido a los militares, no puede decirse que un soberano particular no lo pueda restringir o quitar.

El Pontífice tampoco por sí lo puede conceder, ¿porque quién ha hecho al Pontífice superior en asuntos civiles a los príncipes y reyes ? En lo espiritual su superioridad es un dogma; pero en lo civil un error. ¿No se considera la grande anomalía que resulta de subordinar al Pontífice las leyes y las autoridades civiles? Los eclesiásticos, como hemos dicho, no dejan de ser súbditos del país en que viven porque se hicieron eclesiásticos. Esta es una verdad notoria que no necesita probarse, porque todo el mundo la sabe; pero si hubiere algún necio que la niegue, la probaremos hasta la evidencia. ¿No es una anomalía monstruosa que un soberano para disponer alguna cosa sobre sus súbditos tenga que consultar y pedir licencia a una autoridad extranjera, que ninguna jurisdicción temporal tiene y menos sobre los soberanos? Con que los eclesiásticos para todo lo favorable son súbditos del país en que viven; pero para lo adverso no, sino que son ciudadanos romanos sujetos sólo al Papa. ¿Puede tolerarse esto? ¿Está autorizado por el derecho natural, por el común de gentes, o por cualquier otro?

De aquí es que el fuero eclesiástico ha sido disminuido en muchas partes, como en Francia y en Bélgica, donde cuando se trata con acción real, conocen los jueces civiles, y sólo cuando se trata con personal conoce el eclesiástico; si el fuero estuviera concedido por derecho divino, ¿podría hacerse esto? ¿podría disminuirse en parte, y en parte quedar vigente? Ciertamente que no. También conocen los jueces civiles en otros muchos casos, como cuando se trata del cumplimiento de los contratos celebrados ante el escribano real, cuando se trata con acción mixta, como la hipotecaria. Entre nosotros son muchas las excepciones que se han hecho, tanto en lo civil como en lo criminal al fuero eclesiástico, pues a mediados del siglo pasado, no había cosa de que no conocieran los jueces eclesiásticos, de suerte que casi eran inútiles los

jueces civiles, hasta que los reyes conocieron el abuso, y comenzaron a restringir la jurisdicción de aquéllos, que en todo encontraban motivo para conocer, pues en unas cosas conocían por razón del pecado que había en ellas, en otras, aunque no hubiera habido pecado, por razón del juramento que se había prestado, otras por la cualidad de las personas, cuando estas eran miserables, otras para suplir la negligencia de los jueces, cuando no obraban con prontitud, otras cuando la causa civil tenía alguna conexión con la espiritual, que como más digna atraía a aquélla. Todo esto está quitado hoy, y ya cada autoridad conoce en su línea, sin mezclarse la una con la otra, como sucede con los bígamos, de cuyo delito conocía antes el eclesiástico, y por una real cédula, que se halla en el *Teatro de la legislación*, en el artículo “Casados dos veces”, hoy los juzga la jurisdicción civil, y, para que se declare cuál matrimonio vale, se da cuenta al eclesiástico. Hoy no tienen ya lugar los negocios que llaman *mixti fori*, porque, como hemos dicho, cada autoridad conoce en lo que debe conocer, y no en otra cosa.

Bajo el concepto de todo lo que hemos expuesto, creemos que el supremo gobierno ningún inconveniente tendría para revocar los artículos 42 y 44 de la ley de que tratamos, de suerte que bien podría decir *invito beneficium non datur*. La ley, como hemos probado, es muy favorable a los eclesiásticos; si éstos ateniéndose a las palabras, y no a la sustancia de las cosas, no quieren gozar del favor *sibi imputent*, y el gobierno puede decir: "se revocan los artículos 42 y 44 en la parte que hablan de los eclesiásticos, y se deja a éstos sujetos a las leyes comunes a que actualmente lo están", el gobierno sale ganando, pues todo lo que pierde es que los eclesiásticos no queden sujetos en algunos asuntos civiles a la jurisdicción civil; pero son ya tantas las excepciones que tienen, que poca falta hacen, v. gr., la legitimación de los hijos. Si el eclesiástico dispensa a un adulterino o espurio el defecto de natales para que se ordene, podrá ordenarse; pero nunca se legitimará civilmente si no lo legitima la potestad civil; y así pueden ponerse otros ejemplos. Esto poco será lo que perderá el gobierno; pero ganará mucho en la parte criminal, porque en ésta, como lo hemos probado en nuestro primer artículo, y consta con toda evidencia, ningún fuero gozan los eclesiásticos espantadizos, que

porque se usó de la palabra renuncia, se han alarmado, sin echar de ver, porque no se imponen en las leyes de su país, que se les hacía un favor; pues bien, si no lo quieren, que se les quite.

De este modo se quitará también el pretexto para tantos pronunciamientos descabellados que está habiendo, en los que con mucho entusiasmo se grita: “Religión y fueros”, como haciendo a éstos parte de la religión para alarmar a los pueblos. Es sin duda el grito más disparatado el que hemos dicho, es lo mismo que decir: “Me pronuncio porque no me han hecho presidente, quiero serlo, quiero hacer dinero”, es el pronunciamiento en sustancia. ¿Para qué es alarmar a los pueblos con la religión y hacerles formar ideas inexactas de las materias espirituales, de suerte que algunas personas se pronuncien, porque juzguen un deber de conciencia hacerlo para defender la religión? Y los eclesiásticos que fomentan estos extravíos cuando debían calmarlos ¡qué responsabilidad no contraen ante Dios y los hombres! Y ¿qué disculpa podrán dar? Muchos desengaños han tenido que debían hacerlos cautos y prudentes. Todas las leyes que se han dado y que hemos trascrito, no han tenido reclamación alguna de parte de los clérigos, se han seguido causas contra algunos según ellas, y tampoco ha habido reclamación. En el tiempo del gobierno español publicó el virrey Venegas un bando contra los eclesiásticos insurgentes, y el doctor y maestro Julio Torres, se tomó el trabajo de impugnarlo, y armó una grande alharaca, y ¿qué sucedió? que el señor oidor Puente publicó un cuaderno, y todos callaron, y los eclesiásticos insurgentes continuaron juzgándose conforme al bando del virrey Venegas y ¡todavía, salir con oponerse a cosas que en la realidad les aprovechan, y que están mandadas por las leyes antiguas, y sobre ellas consultar al Pontífice! ¡Qué desacierto!

Concluimos aquí este artículo, demasiado largo y serio para un periódico, la materia necesitaba una disertación, que si fuere necesario la escribiremos, pero nos parece bastante lo que hemos dicho. Sobre el fuero militar poco tenemos que decir, a menos que no se quiera sostener que es también de derecho divino, y que es necesario consultar al Pontífice. El gobierno que actualmente tenemos es bueno, a nadie puede

causar alarma, en él se guardan inviolablemente las garantías individuales. Si no se ha desarrollado todo su programa no es por falta de gana, ni por desidia, sino porque el tiempo no alcanza para todo lo que se necesita, pero se irá practicando, a más de que los pronunciamientos infundados y de puro capricho, o ambición, quitan un tiempo que debía emplearse únicamente en el restablecimiento del orden y de la libertad en nuestra patria.

Juan Bautista Morales

LOS MINISTROS
DE LA ANTIGUA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
IMPUGNAN EL ARTÍCULO 1º DEL PLAN DE AYUTLA

México, diciembre 13 de 1855

Excelentísimo señor ministro de Justicia,
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública

Excelentísimo señor:

Los que suscribimos, magistrados de la antigua Suprema Corte de Justicia, heridos vivamente en la fibra más delicada del hombre de bien, que es el honor, por el decreto que el Excmo. señor ministro antecesor de V. E., de acuerdo, según se dice, con el Excmo. Sr. Presidente interino, puso a la Exposición que el tribunal que formábamos dirigió a S. E. con fecha 24 del próximo pasado noviembre, pidiéndole la suspensión de la Ley de Administración de Justicia publicada el día 23, hemos devorado en silencio la amargura que nos causó la declaración que en ella se hizo, de estar comprendidos en el artículo 1º del Plan de Ayutla, no por la privación de las magistraturas que obteníamos por nombramiento de la nación, o del que fungía de jefe supremo de ella, sino por la nota con que se nos marcaba, por el deshonor que se nos infería, y por la injusticia con que se nos trataba.

Nos habríamos dirigido por medio de un manifiesto a la nación para rechazar aquélla, impugnando el decreto que nos la hacía, con la sencilla exposición de lo que habíamos hecho y de los inocentes y sanos principios porque lo hicimos; pero nos abstuvimos de hacerlo, para que no se creyese que resentidos y despechados queríamos subvertir el orden

y excitar a la sedición; y aunque pensamos dirigirnos al mismo señor ministro nos abstuvimos también porque no era cordura hacerlo.

Desempeñando hoy V. E. el ministerio que ocupaba el señor don Benito Juárez, la confianza con que nos honró la nación, el honor de la magistratura que depositó en nosotros, y la conservación de nuestro buen nombre, nos obligan a suplicar a V. E., tenga a bien dar cuenta al Excmo. Señor Presidente interino con esta Exposición, para que tomando en su alta consideración las razones en que se apoya, se sirva declarar que no hemos merecido ser comprendidos en el citado artículo 1º del Plan de Ayutla, ni reportar la excomunión política a que se nos ha querido condenar.

El tribunal que formábamos, y que contra lo que esperaba a virtud de la contestación que el Excmo. señor Presidente interino dio a la comisión que dos días antes le habíamos mandado, para que le hablase sobre la ley que se anunciaba, la vio impresa ya y notó que ella no se contraía únicamente a establecer las reglas a que hubiera de ajustarse la administración de Justicia en el nuevo orden de cosas, sino que principalmente tendía a cambiar en un todo el Poder Judicial que existía, e inducía reformas de suma gravedad y trascendencia, que podrían engendrar el descontento, causar desprestigio de la nueva administración y producir algún trastorno, creyó que siendo el primer tribunal de la nación, por el bien de la causa pública y por la consolidación del gobierno, debía representarle, suplicándole suspendiera los efectos de la ley, para que revisada con más examen y consulta produjera los bienes que se deseaban y se evitaran los males que desde luego hacía temer; y si el tribunal hubiera obtenido lo que pedía, no habría ocurrido el conflicto en que hoy se ven las autoridades civil y eclesiástica, ni se resentirán las consecuencias que ya se asienten, y las que son aún de temer; y al dirigir al Excmo. señor Presidente interino su Exposición de 24 del mes próximo pasado, habrá podido incurrir en un error, muy disculpable si lo hay, por la sana intención que la impulsaba y por el laudable objeto que se propuso, pero de ninguna manera puede verse en ella la mira de contrariar el Plan de Ayutla, ni el desconocimiento de las facultades del Supremo Gobierno, ni el desobedecimiento de sus disposiciones, ni el

sedicioso escándalo de disolverse sin esperar contestación, para ser comprendidos por estos motivos los magistrados que votaron la Exposición, en el artículo 1º del Plan de Ayutla, como expresa el decreto.

Este artículo literalmente dice: "Cesan en el ejercicio del poder público don Antonio López de Santa Anna y los demás funcionarios como él hayan desmerecido la confianza de los pueblos, o se opusieron al presente Plan". Y por su tenor se ve, que para poder ser comprendidos en él era necesario, o haber desmerecido la confianza de los pueblos antes de la proclamación del Plan, o haber contrariado después de ella su realización y efecto, que era la destrucción del gobierno dictatorial y establecimiento del liberal que debía sustituirle. ¿Y cuáles son los testimonios que acreditan haber desmerecido el tribunal, o los ministros que lo formábamos, la confianza de los pueblos, con anterioridad a la proclamación del Plan? ¿Cuáles los actos con que auxiliaron al dictador, para que se sostuviera en la lucha y con que se opusieron a la realización del Plan? Lejos de eso, el tribunal y los ministros que lo formaban, se creen no haber desmerecido la confianza de la nación, porque aun vilipendiados y ajados por la administración del dictador, tuvieron la firmeza de fallar contra los intereses del mismo, contra los de sus allegados y parientes, y contra los de sus recomendados y opiniones de sus ministros, en cuantos negocios se ofrecieron con alguna de esas circunstancias, porque, afortunadamente, en ninguno de ellos encontró la justicia de parte del dictador, pues si la hubiera encontrado se la habría declarado, aunque la maledicencia lo hubiera atribuido a un principio bastardo, y esta es sin duda la razón, porque en el extremado desencadenamiento en que entró la prensa pública desde 13 del último agosto, ningún periódico hasta la fecha de la Ley, había hecho la más ligera indicación en contra del tribunal o de los ministros que lo formaban, y algunos habían hecho la de la necesidad legal de conservar en las magistraturas a los que las habían obtenido por el nombramiento de la nación hecho constitucionalmente, y después de la Exposición de 24 de noviembre, los más se han limitado a referir lo sucedido; algunos han impugnado la conducta que se ha tenido con nosotros, y sólo dos que sepamos, han querido acriminarnos; pero de ellos, el uno ya cesó,

impugnó hasta la Divinidad, y el otro que con notable inconsecuencia, bien que en ésta incurre con frecuencia, después de haber reprobado la remoción que se hizo de algunos de nosotros, se ha encargado de formarnos el proceso; y en cuanto a los hechos en oposición del Plan de Ayutla, o en apoyo al dictador, estamos seguros de que no puede inculpárenos de ninguno, porque siguiendo las huellas de los que nos han precedido en la magistratura, y teniendo bien presentes las sabias máximas que el republicano del norte, Alejandro Hamilton, estampó en su periódico *El Federalista*, asentando: "que el Poder Judicial no debe mezclarse en los negocios públicos, que su marcha no debe tener alteración por las ocurrencias políticas, y que la firmeza de sus resoluciones debe ser del todo independiente de la permanencia o variación que figuran en los cuerpos representativos y el Poder Ejecutivo", la Corte de Justicia siguió impassible la marcha en el despacho de los negocios de su resorte, esperando que la nación por su aquiescencia manifestara cuál era su voluntad, para acatarla como siempre lo ha hecho, sin mezclarse jamás en los negocios públicos, sino cuando se ha pretendido que coopere y sancione con su consentimiento actos que no eran de la nación y que lastimaban sus derechos, cuales fueron el del general don Valentín Canalizo, que disolvía la representación nacional y cuya observancia se le exigió que jurara, a lo que resistió, y el del general don Mariano Arista, que suprimía la libertad de imprenta y cuya guarda se le encomendaba, a la que resistió prestarse.

Si, pues, antes de la Exposición de 24 de noviembre no hay indicios de que el tribunal o los ministros que lo formaban hubieran desmerecido la confianza de los pueblos, ni hecho alguno la oposición del Plan de Ayutla, preciso es buscarlos en la oposición misma [a la Ley de Administración de Justicia], y en ella es donde cree encontrarlos el señor ministro diciendo: que el hecho de votar aquella [Exposición] envuelve el desconocimiento de las facultades del Supremo Gobierno, mas en esto S. E. padece una gravísima equivocación, quizá involuntaria y efecto del acaloramiento que aquella Exposición le causó, o quizás necesaria por los fuertes compromisos en que se hallaba. Si en la Exposición se pide al Excmo. señor Presidente interino, que suspenda los

efectos de la Ley para que vuelva a expedirse con mayor examen y meditación, ¿no envuelve el más explícito reconocimiento de la facultad de expedirla? Si en ella se le indicó la inconveniencia de la adopción de un principio que debe ser de fatales consecuencias, esto no es, ni puede en manera alguna refutarse desconocimiento de las facultades, sino la manifestación del peligro que había en la adopción del principio. Si por ejemplo, el Excmo. señor Presidente interino en ejercicio de las amplias facultades que le concede el artículo 3º del Plan, para reformar todos los ramos de la administración pública, diera un decreto llamando un príncipe extranjero, para que en calidad de Presidente rigiera la República, o sujetando a ésta a la protección o amparo de la vecina del Norte, o cometiera el nombramiento de su sucesor al señor ministro de España o al de los Estados Unidos, porque creyera que conducía a la prosperidad, engrandecimiento y progreso de la nación, y el Consejo de Estado, cuya misión son los negocios políticos, le representara su disposición para con mayor detenimiento examinar la conveniencia del principio que adoptaba, ¿podría decirse que el Consejo desconocía las facultades del Supremo Gobierno? ¿Pues por qué se ha de decir que el primer tribunal de la nación, cuya misión son los negocios judiciales, basados sobre la independencia del poder que debe decidirlos, desconoce esas facultades porque le pidió que suspendiera hasta mejor examen los efectos de una Ley en que parece adoptarse un principio que destruiría esa independencia? ¿Y el hecho sólo de haber representado esto, en una comunicación atenta, comedida y respetuosa, puede destruir de un golpe los multiplicados actos de reconocimiento por parte del tribunal de las facultades del Excmo. señor Presidente interino, a quien tan luego como supo su elección, le envió a Cuernavaca una comisión que lo felicitara y le expusiera las dificultades y embarazos en que se encontraba la administración de justicia; que le dirigió diversas consultas sobre varios puntos, y que tan luego como llegó a esta ciudad, el señor don Juan Bautista Ceballos le dirigió una comunicación pidiéndole que declarase nula la arbitraria destitución que se le había hecho por el gobierno dictatorial de la magistratura que obtenía y lo restituyese a ella?

¿Actos tan positivos de reconocimiento pueden ser anulados por otro que no sólo no le es contrario, sino que él mismo envuelve el reconocimiento? Es falso, pues, y gratuitamente inventado, el primer fundamento en que el señor ministro ha querido apoyar la declaración que ha hecho contra nosotros, reducido a que la Exposición de 24 de noviembre envuelve el hecho de desconocer las facultades del Supremo Gobierno, y no lo es menos el segundo, de que el tribunal se declaró disuelto sin aguardar la resolución de que vamos a encargarnos.

Para patentizar la inexactitud o falsedad de este otro fundamento, bastaría recordar que habiendo dirigido el tribunal su Exposición en la tarde del sábado 24 del próximo pasado, recibió después una comunicación del mismo señor ministro, en que pedía copia de los acuerdos del mismo tribunal, con motivo de la destitución del señor don Juan Bautista Ceballos, y para satisfacer esa petición se reunió el tribunal extraordinariamente en su mismo local la noche del domingo 25, día siguiente al en que había remitido su Exposición, lo que prueba con la mayor evidencia que el tribunal no se disolvió sin esperar la resolución, la que si se le hubiera dado, la habría recibido reunido, y en vista de la que fuera habría acordado lo que le hubiera parecido conveniente; pero no se le dio, como lo manifiesta el decreto, ni quería dársele, porque reunido habría contestado y de esto se huía.

No se disolvió, pues, de hecho el tribunal, ni tampoco dijo en su Exposición que se disolvía, pues lo que dijo fueron estas precisas palabras: “en el concepto de que el mismo tribunal que por la Ley debe entenderse, queda disuelto, no se volverá a reunir sino en el caso de una resolución afirmativa sobre este punto”, es decir, que no volvería a despachar mientras no se le dijera que se habían suspendido los efectos de la Ley, de los que el primero, y causado ya por sólo la publicación de ella, era enervar la acción del tribunal, dejarlo como si no existiera y hacer inútil su reunión. Porque ¿a qué se reuniría? ¿A despachar los negocios de que estaba conociendo, como audiencia del Distrito? No, porque estaba publicada una Ley que le quitaba ese conocimiento y lo cometía a otro tribunal que ella establece. ¿A despachar los negocios cuyo conocimiento le daba la nueva Ley? Tampoco, porque ese

conocimiento se lo da, pero organizado bajo distinta forma, a saber: dividido en tres salas, una de un sólo ministro, otra de tres y otra de cinco, que se habían de formar de los nueve ministros que la ley señala y por el orden de números que la misma fija, ¿quién designaba de los once ministros que en la actualidad tenía, cuáles eran los nueve que debían formar las tres salas? ¿Cómo se les daba los números bajo los cuales son designados para la primera, segunda y tercera sala? Este ligero análisis patentiza que la Ley disolvía el tribunal, y no él quien se disolvía, porque tal cual existía era enteramente diverso y aun contrario al que la Ley establece, y de ahí es que podría volverse a reunir en el caso de que se suspendiesen los efectos de aquella, y esto y sólo esto, fue lo que dijo en su Exposición, y sólo violentando su obvio y natural sentido puede decirse que el tribunal acordó disolverse sin esperar resolución. La esperaba y la esperó, aunque en vano, pero anticipó la idea de que si no era en el sentido de suspender los efectos de la Ley que lo había disuelto, no se volvería a reunir a hacer despacho que ya no podía hacer.

Si en la Ley se hubiera puesto algún artículo que dijese que entre tanto se organizaban los tribunales que ella establece, continuase el antiguo en el ejercicio de la jurisdicción y el despacho de los negocios que ante él se seguían, o que no se hiciera novedad hasta que se instalaran los nuevos, claro es que entonces el tribunal no debía suspender el despacho, y no lo habría suspendido. Pero no habiendo en la Ley prevención alguna sobre esto, es igualmente claro que el tribunal no podía continuar en el despacho porque no podía hacerlo bajo su antigua forma, porque ésta había desaparecido por la Ley y no debía exponer sus actos a nulidad por falta de jurisdicción y a aclamaciones de los litigantes que no habría dejado de hacer aquel a quien perjudicara el auto o la providencia que se dictara o tuviera interés en que el negocio no anduviera. Tampoco podía hacer el despacho bajo la nueva forma, porque al que existía no se le había dado, pues de los once ministros que lo formaban no se sabía cuáles eran los nueve que quedaran, menos se sabía cuál era el número que tuvieran para saber en qué sala debían funcionar, y mucho menos existía la circunstancia de haber prestado el juramento previo que previene la Ley. ¿Qué hacer, pues, en tal caso? Lo

que se hizo, decir al gobierno que debiendo entenderse que el tribunal quedaba disuelto por la Ley, no se volvería a reunir, si no se suspendían los efectos de ésta; pero esto no fue ni pudo ser disolverse sin esperar resolución.

Cuando don Antonio López de Santa Anua dio su ley de 16 de diciembre de 1853, no hizo lo que ahora el tribunal, porque el caso fue enteramente diverso. Para convencerse de ello, bastará recordar que esa administración dio dos leyes sobre esta materia. La primera fue la de 30 de mayo de aquel año, y la segunda, la del 16 de diciembre del mismo. Por la primera, no varió el personal ni alteró la dotación de las salas, sino sólo su organización, creando por el artículo 1º, sobre los once ministros de que se debía componer el tribunal, cuatro supernumerarios en lugar de los suplentes que entonces existían, y en consecuencia, sin poner en duda la existencia de los demás, procedió a nombrar dos ministros de número para llenar las dos vacantes que habían dejado las jubilaciones de los señores don Juan Bautista Morales, que la había solicitado espontáneamente y obtenido del gobierno del Sr. Gral. don Manuel Lombardini, y del Sr. don José María Migueroa, a quien se le ofreció por su avanzada edad y notorias y graves enfermedades de que a poco falleció, y los cuatro supernumerarios que entonces se crearon, y con sólo esto, los de número o propietarios que existían, vieron reconocida de una manera explícita la legalidad de su nombramiento y pudieron continuar sin tropiezo ni dificultad en el despacho, a diferencia de la Ley de 23 de noviembre, que sobre variar la organización y atribuciones del tribunal con sólo reducir el número de ministros de once a nueve, a ninguno dejó la seguridad de que lo era.

Se expidió después la de 16 de diciembre, que le varió el nombre a la Suprema Corte; pero como ni alteró el número de los ministros de que debía componerse, ni varió la dotación de las salas, ni su organización, los ministros que existían, ni dudaron de su continuación, ni encontraron dificultad para seguir en el ejercicio de sus funciones, y menos cuando juntos con tantos ejemplares de la ley cuantos eran los ministros, recibieron de mano de un oficial del ministerio de Justicia, en el acto de salir el segundo día a la visita de cárceles, la comunicación en que se

avisaba ser los ministros y por el mismo orden de antigüedad que tenían, los mismos que lo eran, menos uno que lo era el señor don Fernando Ramírez, cuyo nombre estaba simplemente omitido en el oficio y de palabra se dijo haber sido jubilado.

Así es que, aunque por el artículo 37 se declaraba el gobierno la facultad de nombrar a los magistrados y jueces, como había precedido el reiterado reconocimiento de los que existían sin exigirles acto ninguno previo, aquel artículo se entendió que hablaba para lo de adelante, y ninguno de los ministros pudo dudar de su continuación; y de aquí fue, que no haciéndose variaciones en el número de ministros, ni en la dotación y organización de las salas, ni en el personal del tribunal, no hubo motivo para que éste se creyera disuelto, como lo hubo ahora, ni para representarlo así al gobierno.

Si ahora no se hubiera visto desde luego, que en el personal de necesidad debía haber variación, porque siendo once los que había debían quedar nueve, y no se podía saber si quedaban los nueve de los once y quiénes eran. Si no se hubiera visto que estos nueve debían distribuirse en tres salas, de las que una sería de uno y que éste debe ser el sexto, así como las de las otras dos deben ser los de los otros números y no por su orden, y ninguno de los once tenía ni podía creerse con ninguno de estos números para ir a tal o cual sala. Si no se hubiera visto que ese tribunal, compuesto de nueve ministros distribuidos en tres salas, una de uno, otra de tres y otra de cinco, ya no debía conocer de los negocios de que estaba conociendo como tribunal de segunda instancia del Distrito, sino que esto correspondía al que en la Ley se establece, y que a aquel otro le corresponden el conocimiento de otros negocios, pero reducido a nueve ministros distribuidos de otro modo. O si hubiera visto alguna prevención que lo habilitara para continuar obrando del mismo modo y sobre los mismos negocios que lo estaba haciendo, no se habría creído disuelto desde luego por la Ley, como lo creyó y lo dijo al gobierno al asentar que por la ley debía entenderse que quedaba disuelta. Pero él no acordó disolverse, ni pensó ni quiso excitar con esto un trastorno, pues ninguno de los concurrentes ha figurado jamás en la lista de los revoltosos. Creyó que palpando por la práctica y experiencia que le ha dado el despacho de

los negocios, por el conocimiento de las circunstancias y la calidad de las cuestiones resueltas en la Ley los inconvenientes de ésta, era de su deber por la conservación misma del orden público, por el prestigio del gobierno y por la tranquilidad del país, indicarlo con la moderación y respeto debidos al Excmo. señor Presidente, para que si S. E. tenía a bien mandar suspender la Ley, exponérselos más detallada y fundadamente, porque el querer de algunos, no es el querer de todos, ni aun quizás el del mayor número, ni es la voluntad nacional, ni produce el bien que se quiere.

Pero se observa que el tribunal no habló en la administración de don Antonio López de Santa Anna y habla ahora. Las razones de diferencia son incontrastables. Aquella administración era tiránica, ésta no lo es: aquélla por serlo, había impuesto silencio a todo el mundo y sellado los labios de los oprimidos con el terror; ésta por no serlo quitó el silencio, quiso oír la opinión de todos y manifestó que gustaba de la discusión pública. En aquélla, la voluntad de un hombre y sus intereses eran la regla; en ésta lo son la voluntad de todos, o del mayor número, y los intereses de la comunidad; en aquélla había una ley, aunque injusta, que lo prohibía; en esta hay una proclamación de libertad que lo autoriza; aquélla era la dictadura opresora, y ésta es la dictadura libertadora; por eso aquélla no quería que se le expusiera la razón, y por eso ésta creyó el tribunal que se agradecería de oírla, siempre que se le expusiera en el tono de templanza, consideración y respeto que le son debidos, y de que no está destituida su Exposición del día 24 de noviembre último. Así es que el tribunal que vio que por primera vez después de tantos planes y pronunciamientos como ha sufrido el país, se quería extender la acción de la revolución hasta la remoción de todos los agentes del Poder Judicial, sin consideración a su origen, antigüedad y servicios, cosa que ni el dictador había hecho, y que previo las consecuencias de algunas de las disposiciones que en la Ley se adoptaban, creyó que debía representar los inconvenientes de ella al Excmo. señor Presidente interino, y muy distante de pensar que en eso cometía una falta, y falta tan grave que por ella se le podía declarar comprendido en el artículo 1º del Plan de Ayutla, no sólo a los ministros que lo acordaban, sino también a todos los

empleados de sus secretarías, que ninguna parte tenían en el acuerdo y que todos han sido removidos, entendía que prestaba en ello al Excmo. señor Presidente la cooperación que S. E. deseaba, y obsequiaba la invitación que para ello había hecho a todos los mexicanos en su Manifiesto hecho en Cuernavaca a 7 de octubre, en el que les dirigió estas palabras: “Advertid a la nueva administración las faltas en que incurra, y hacedle las indicaciones convenientes para el mejor servicio publico: esta es la cooperación que deseo”, y como no pudo creer que se tendía un lazo en esta invitación, que no se hizo en la administración dictatorial, ahora habló y entonces no.

Pero este cargo de que el tribunal no habló en la administración dictatorial, no tiene en la realidad la fuerza que aparenta. En el primer ataque fuerte que el Poder Judicial recibió de aquella administración, que fue la violenta destitución de los señores magistrados don Marcelino Castañeda y don Juan Bautista Ceballos, se ocupó desde luego y en el acto de recibir la comunicación en que se le participaba, de formalizar la reclamación correspondiente de la independencia del Poder Judicial, cuyo respeto era la única taxativa que ponían los convenios del 6 de febrero de 1853, a la amplísima facultad que le daban hasta para reformarlo, y el tribunal acordó unánimemente que se reclamara; pero algunos de los ministros creyeron que hacerlo en aquellos momentos en que se manifestaba en su mayor grado el enardecimiento de don Antonio López de Santa Anna, que se creía personalmente ofendido y desairado por los señores destituidos, era asegurar el mal éxito de la reclamación, aunque otros cuatro, de los que tres han opinado ahora como entonces, fueron de voto contrario para que inmediatamente se reclamara; y por esto se ve, que el tribunal no ha pensado ahora, como se pensó entonces, sino que entonces pensó lo mismo que ahora.

Pero él no llegó a hablar, es verdad; pero sobre esto debe tenerse presente lo que entonces ocurrió. Ese acuerdo se tuvo el día 2 de diciembre, y como por aquellos días se había presentado en el tribunal el ministro de Justicia, con un proyecto de Ley de Administración de Justicia, en el que se establecía la inamovilidad de los funcionarios del Poder Judicial, si no eran previamente juzgados y sentenciados, y por

entonces se creyó que la oportunidad para reclamar con buen éxito la reposición de los señores destituidos sería la publicación de la ley en que se reconocía ese principio, que se inculcó por alguno de los señores ministros que concurrieron a las conferencias tenidas en presencia del mismo Presidente de la República, y se quedó en espera de la publicación de la ley, que se verificó en los últimos días de diciembre. Con avidez la acogió el tribunal, porque creía llegado el caso que esperaba; pero con sorpresa encontró que en el artículo 69 se reconocía el principio; pero con esta fatal taxativa: “Sin perjuicio de las facultades del actual gobierno”. ¿Qué hacer entonces? lo que hizo el Excmo. señor Presidente Interino, y lo que no era dado hacer a los ministros del Tribunal Supremo: empuñar las armas para derrocar la tiranía.

Suplicamos a V. E., dar cuenta al Excmo. señor Presidente con esta comunicación, para que en su vista tenga a bien dictar las providencias que reclame la justicia.

Dios y Libertad.

José L. Pavón
Antonio Fernández Jardín
Mariano Domínguez
Marcelino Castañeda
José M. Jiménez

José Urbano Fonseca
Ignacio Sepúlveda
Ramón Adame
José M. Lebrija
José M. Casasola

COMONFORT PARECE TRANQUILO Y SERENO

Correspondencia particular
del ministro
de Guerra y Marina

México, noviembre 30 de 1855

Excmo. Sr. don Manuel Doblado
Guanajuato

Mi muy estimado amigo:

Con calor han corrido rumores, ayer y hoy, en esta capital, de una próxima revolución. La fuga del general (López) Uruga en la noche de ayer, al salir de Cuautitlán, y la facilidad con que se puede explotar por los enemigos de la paz pública la última Ley sobre Administración de Justicia, son, en mi concepto, cosas que pueden alentar a los descontentos. Sostener la citada Ley es un deber, como usted conocerá, de la administración actual, y perseguir a (López) Uruga y Barragán es una necesidad; yo apelo al patriotismo de usted y a la sincera amistad que nos une para ambas cosas. (López) Uruga va en camino a la Sierra Gorda, según informes; dicte usted mi amigo, las más eficaces medidas en unión del Sr. Echegaray, para asegurarlo, y para que, si lograre sorprender a esos pueblos inocentes, su movimiento sea sofocado en el acto, pues una prueba evidente de la energía con que el gobierno se propone obrar en estos casos, será el mejor retraente de los que tengan ganas de trastornar el orden público. Yo descanso en usted, en esta parte, bajo el concepto de que el señor general [Félix] Zuloaga auxiliará a usted con las tropas de su mando.

Hago a usted particular encargo que no fije mucho la atención sobre los debates de la prensa acerca de una crisis ministerial. Lo que hay en esto lo he mandado decir a usted con nuestro común amigo el Sr. don Lorenzo Ceballos, que ha presenciado mis conversaciones con los demás miembros del gabinete; pero, en circunstancias críticas como la actual, todo debe posponerse a la conservación y al triunfo de la revolución. Yo escribiré a usted largamente después y le instruiré de todos los pormenores que pasan.

Espero, con ansia, respuesta suya a esta carta y me repito su invariable amigo, seguro servidor, q. b. s. m.

Ignacio Comonfort

LOS CIUDADANOS
ANTONIO MONTES VELÁZQUEZ,
PREFECTO Y COMANDANTE MILITAR
DEL DISTRITO DE TOLIMÁN,
Y TOMÁS MEJÍA,
COMANDANTE Y PREFECTO
DEL DISTRITO DE JALPAN,
A SUS CONCIUDADANOS

Conciudadanos:

Hoy dejamos nuestro hogar y familia para venir al llamamiento de nuestra patria, que es primer deber de todo ciudadano. Hoy como siempre empuñamos las armas sin aspiraciones ni ambición, y con la ayuda de Dios concluiremos nuestra misión y regresaremos como siempre a nuestras casa y trabajo, para con él buscar la subsistencia de nuestras familias.

Nuestra vida pública es la garantía de nuestra fe.

Siendo ya insoportable el yugo impuesto a la nación por una facción que embustera proclama la libertad, y que con este sagrado nombre ataca nuestras creencias, nuestras garantías y nuestra independencia, no nos queda más recurso que las armas para sostener nuestros derechos, nuestras naturales prerrogativas y nuestra existencia política. No proclamamos un hombre, porque odiamos la tiranía; no proclamamos un sistema de gobierno, porque respetamos los derechos que para constituirse tiene la nación.

Queremos garantías en una ley mientras que el país se da la fundamental, y por ello fijamos la Constitución de 1824, en que creemos encontrar mayores simpatías. La proclamamos también para que los estados elijan libremente sus gobernantes y cesen los electos que los

Estados elijan libremente sus gobernantes y cesen los electos por una facción o por las armas de despotismo; para que por medios legales se oiga al pueblo por medio de sus comitentes; para que habiendo una base que conserve la confederación, no con la absoluta libertad de constituirse los estados perdamos la unión y la nacionalidad; la proclamamos interinamente, en fin, para que haya una ley que sujete al Ejecutivo General y cesen el despotismo, la arbitrariedad y la barbarie, que es lo que impera en los hombre de México.

Déspotas groseros han remplazado al despotismo militar de Santa Anna, y el país y los hombres honrados no somos más que el juguete de ambiciosos sin pudor y tiranos sin mérito ni talento. Basta ya de engaños para este desgraciado país y reunámonos los hombres que, como nosotros, ni hemos hecho fortuna con la ruina de nuestro país, ni buscamos el puesto ni la colocación para vivir. Propietarios y labradores tranquilos, queremos la paz y el orden, queremos patria y religión para nuestros hijos, queremos moralidad en nuestros gobernantes y que éstos sean elegidos libre y espontáneamente por el pueblo.

Queremos libertad bien entendida, queremos reformas materiales, queremos instrucción e ilustración en el pueblo, pero no la desmoralización y el pillaje. Queremos amistad y paz con las naciones extranjeras; queremos proteger su emigración y dar garantías al extranjero que venga entre nosotros, protegerle su industria y su talento, pero no queremos la influencia exclusiva ni la dominación en el gabinete de ninguna de ellas, ni que tome parte en nuestros asuntos interiores, con oprobio y vergüenza de nuestro orgullo nacional. En esta parte decimos con Washington mismo: “los celos de un pueblo libre deben estar constantemente alerta contra las insidiosas estratagemas de la influencia extranjera”.

Llamamos a todos los hombres honrados que, sin más aspiración que el bien del país, trabajen por constituirlo; llamamos con nosotros a las clases todas de la sociedad hoy ultrajadas y vejadas por una pandilla despreciable. Nuestros esfuerzos salvarán al clero, que hoy no tiene ni los derechos de ciudadano; a la iglesia, cuyos bienes, que pertenecen al pobre, están amenazados; al ejército, cuya clase está destruida y

aniquilada, más que todo, prostituida por la aceptación en su seno de hombres salidos de presidio y bandidos de nota; salvaremos al propietario, cuyos bienes en un gobierno sin freno, no da garantías; al artesano, ese hijo honrado del pueblo, que hoy se ve humillado con la presencia en la capital de la República de esa horda soez, presuntuosa e inmoral, que la debilidad de unos cuantos ha dejado vomitar sobre México de las montañas del Sur y que amenaza sus vidas y el honor de sus mujeres e hijas.

Baste ya de escándalo, conciudadanos; organicemos este desgraciado país o probemos, al menos, que aún hay mexicanos que prefieren su dignidad de hombres a la vida de infamia que se nos ofrece.

Hemos dado hospitalidad y se halla entre nosotros con sentimientos iguales a los nuestros, a nuestro antiguo y querido jefe, el Gral. (López) Uruga. Dios lo ha vuelto a su país, y lo ha librado de la persecución y prisión para guiarnos en nuestra empresa y la victoria será por nosotros.

Conciudadanos, hemos adoptado el plan que sigue, que es el mas nacional y el más adecuado en estas críticas circunstancias; lo sostendremos sin transacción y él constituirá, con la ayuda de Dios, a nuestra Patria.

Tolimán, diciembre 2 de 1855.

José Antonio Montes Vázquez

Tomás Mejía

Es copia de su original.

Juan José Jiménez

PLAN DE SIERRA GORDA

El territorio y fuerzas de Sierra Gorda:

Considerando que la nación ha sido engañada en sus esperanzas de orden y libertad, pues en lugar de la grosera tiranía del general Santa Anna se le ha impuesto la demagogia, y que la disolución social se haría efectiva no habiendo una base que una los estados para formar su confederación, puesto que en la administración actual no hay nada sagrado pues se ataca a la religión, a la propiedad y a la sociedad en todas sus partes.

Atendido que una nación libre no puede ser respetada en el exterior, ni aun interiormente, sin ejército, cuya clase privilegiada ha sido destrozada para seguir con las otras, como lo intentan ya con el clero, y que nuestra independencia se halla amagada por la debilidad en que ha quedado la nación, y debido solamente al patriotismo y muy buena disposición de los fronterizos se ha logrado salvarla, haciéndola respetar.

Y atendiendo, en fin, a la crítica situación en que se halla la capital [del país], en poder de un ejército compuesto de surianos que no respetan ni a sus mismos jefes, declaran:

Artículo 1º. Para que cese todo despotismo sobre los pueblos, y sea la ley y no el capricho de un gobernante (lo) que rijan sus destinos, se reconocerá (que) en la nación, interinamente, se constituye libre y espontáneamente la Constitución de 1824 con las reformas que posteriormente se le han hecho.

Artículo 2º. Los actuales gobernadores de los estados, o si se oponen, el jefe superior de las fuerzas pronunciadas en ellos, darán, en el acto de tomar posesión de la capital, la orden o decreto para la elección de sus gobernadores con arreglo a sus constituciones particulares. Las

mismas juntas, acto continuo de nombrar gobernador, elegirán cinco individuos para que le sirvan de Consejo en resoluciones.

Artículo 3°. El gobernador de cada estado o jefe político del Territorio, de acuerdo con su Consejo, elegirá un individuo, que a los cinco días, a más tardar, de la entrada del ejército a la capital de la República, se reúnan en ella, presididos por el general en jefe como depositario del Poder Ejecutivo, y procederán a expedir el decreto para la elección de Presidente interino que conserve el poder mientras la nación se constituye.

Artículo 4°. Esta misma junta continuará como consultiva del Ejecutivo, quien al mes dará la convocatoria para la elección del Congreso Constituyente, que se reunirá a los tres meses de expedida ésta.

Artículo 5°. Las dudas que ocurran para el desarrollo de este plan, cuyo principal objeto es que la República se constituya conforme a sus deseos de engrandecimiento y felicidad, y que se dé una ley fundamental que garantice todos sus intereses, la resolverá el depositario del Supremo Poder Ejecutivo, de acuerdo con su Consejo.

Artículo 6°. Se considerará como estado independiente, formando parte de la confederación mexicana, el de Iturbide, que se compondrá de los distritos que hoy lo han solicitado.

Artículo 7°. Serán juzgados como traidores a la nación y al establecimiento de todo orden público los que, directa o indirectamente, se opongan al desarrollo y cumplimiento de este plan.

Artículo 8°. Las fuerzas pronunciadas reconocerán por su general en jefe al Excmo. Sr. Gral. don José López Uruga, quien llevará adelante, sin transacción ni cambio, el cumplimiento de este plan.

Tolimán, diciembre 2 de 1885.

José Antonio Montes Velázquez,

Tomás Mejía

(Siguen las firmas)

Es copia de su original.

Juan José Jiménez

PROTESTA DEL ARZOBISPO DE MÉXICO

Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos
e Instrucción Pública

Ilustrísimo señor arzobispo de México

Illmo. señor:

Se ha impuesto el Excmo. señor Presidente Interino de la República, de la atenta comunicación de V. S. I., fecha 1º del corriente, en que manifiesta las razones que tuvo presentes para protestar contra los artículos 42 y 44, y 4º de los transitorios, de la ley de 23 de noviembre próximo pasado; y me ordena conteste a V. S. I., como tengo la honra de hacerlo, que S. E. queda enterado de la citada comunicación, en el concepto de que, hechas las protestas que V. S. I. ha creído convenientes para salvar su responsabilidad, no habrá de parte de V. S. I. acto alguno de desobediencia a la ley, que el Excmo. señor Presidente está en la firme resolución de llevar a debido efecto.

Dios y Libertad, México, diciembre 3 de 1855.

(Benito) Juárez

SUPRESIÓN DEL FUERO EN MATERIA CIVIL

Ministerio de Justicia

Illmo. señor obispo de Michoacán

Illmo. señor:

Elevé al conocimiento del Excmo. señor Presidente de la República, el oficio de V. S. I. de fecha 30 de noviembre próximo pasado, en que protestando contra los artículos, 42, 44 y 4º de los transitorios de la ley de 23 del mismo mes, solicita se someta este negocio a la resolución del venerable jefe de la Iglesia, y que se suspendan entretanto los efectos de la referida ley.

V. S. I. se propone demostrar que la supresión del fuero en materia civil no es del resorte del Supremo Gobierno de la Nación, al menos sin el previo acuerdo del Sumo Pontífice. Fácil sería desvanecer, aun con las mismas doctrinas que cita V. S. I. los fundamentos en que apoya sus protestas, si dada la ley que el gobierno considera justa y conforme a los intereses de la sociedad, fuera conveniente a su decoro y dignidad entrar en discusión con algunos de sus súbditos sobre el cumplimiento o desobedecimiento de ella; pero S. E. se halla colocado en el deber muy estrecho de cumplir y hacer cumplir la ley, y no puede permitir que se suspendan sus efectos.

En tal virtud, S. E. me ordena diga a V. S. I. en respuesta a su citada comunicación, que no puede acceder a la suspensión que V. S. I. solicita de los efectos de la ley de 23 de noviembre último, y que habiendo salvado V. S. I. su responsabilidad con las protestas que ha consignado en su repetida comunicación, no habrá por parte de V. S. I. motivo alguno que indique un acto de desobediencia a la ley.

Dios y Libertad, México, diciembre 5 de 1855.

Benito Juárez.

COMONFORT, PRECAVIDO,
NO DESEA SE LE TOME COMO BANDERA DE REBELIÓN

Remitido de México, diciembre 6 de 1855

Recibido en Guanajuato, diciembre 6 de 1865,
a las 5 y 35 minutos de la tarde

Excmo. señor gobernador y Lic. don Manuel Doblado
Reservado

Querido amigo:

Acaba de asegurárseme en este momento [que] se organiza un movimiento en este estado proclamándome Presidente. Yo no creo esto; pero me ha parecido necesario avisarlo a usted para que, si algo hubiere, lo evite a todo trance, pues esto y la crisis ministerial que este día se esta efectuando seria la [venida] de la revolución. Yo apelo a nuestra sincera amistad, a nuestra fraternidad, para que me saque violentamente de la intranquilidad en que quedo.

Ignacio Comonfort

JUÁREZ INSISTE EN SU RENUNCIA
AL MINISTERIO DE JUSTICIA

Excmo. señor Ministro de Relaciones

Excmo. señor:

Presentada mi renuncia en Cuernavaca el día 21 último, por los motivos que en ella se expresan, el Excmo. señor Presidente me mandó llamar a su Palacio la mañana del día 22 del mismo mes. Concurriendo inmediatamente a su llamado llegué a la vez que estaba en conferencia con los señores Comonfort y don Guillermo Prieto; y tanto S. E. como el Sr. Comonfort me invitaron a que desistiese de mi renuncia, en el concepto de que se iba a nombrar para el ministerio de Relaciones al Sr. don Joaquín Cardoso; para el de Fomento, al Sr. don Santos Degollado; y para el de Gobernación, al Sr. don Ponciano Arriaga, Explané entonces las razones que tenía para llevar adelante mi renuncia; pero S. E. me hizo presente la situación peligrosa en que quedaba el gobierno por la completa disolución del gabinete, pues el señor Prieto manifestó también estar resuelto a separarse si yo lo hacía. Esta consideración fue muy poderosa para mí, y ofrecí al Excmo. señor Presidente que continuaría ínterin se presentaban los nuevos nombrados, quedando pendiente para entonces la admisión de mi renuncia.

Tal es la condición con que he permanecido en este ministerio y no siéndome ya posible continuar en él por más tiempo, por los fundamentos que expresé en mi oficio de dimisión y por los demás que en la última junta de ministros se expusieron, suplico a V. E. se sirva manifestarlo así al Excmo. señor Presidente para que se digne admitir la renuncia que hice en 21 de octubre próximo pasado, y que ahora reproduzco, dando a

S. E. las gracias más expresivas por la ilimitada confianza con que me honró.

Acepte V. E. las seguridades de mí atenta consideración y particular aprecio.

Dios y Libertad, México, diciembre 6 de 1855.

Benito Juárez

UN LEAL QUERETANO
RECHAZA LA INVITACIÓN DE DOBLADO A SUBLEVARSE

Querétaro, diciembre 7 de 1855

Señor licenciado don Manuel Doblado
Guanajuato

Muy señor mío:

Con tanta indignación como sorpresa, recibí de manos de su comisionado don Sabino Flores, la carta de usted, fecha 4 del que rige, y sólo porque no entienda usted ni por un momento que yo estoy conforme con sus miras, me voy a ocupar de contestarla.

Antes de todo, debo manifestar a usted mi extrañeza por la libertad que se ha tomado de invitarme para la revolución, cuando ni tenemos relación alguna de amistad, ni siquiera nos conocemos, ni he dado mérito jamás para que se me crea fácil y propenso a tornar parte en las revoluciones. Me habría ofendido de la invitación de usted en las presentes circunstancias, aun cuando no hubiese sido que un particular, y aun en el evento de que hubiera venido de un amigo, pues nadie esta autorizado abusar de tan sagrado título; pero el agravio ha sido tanto más atroz, cuanto (que) en mi calidad de gobernador, y gobernador nombrado por el mismo señor Presidente a quien usted trata de hacer la guerra, me propone que cometa la más negra traición y, señor mío, es necesario tener un concepto muy bajo de los hombres para hacerles esas proposiciones. ¿Cuándo, ni por qué, he dado yo mérito para que usted me aprecie en tan poco? Por último, para que el ultraje llegase a su más alto grado, no se limitó usted a injuriarme de una manera privada, sino que se sirvió de un tercero que presenciase mi afrenta. Por no dar vuelo a mi

justo resentimiento, no doy a esa conducta de usted el nombre y calificación que se merece, pero ella me releva de toda consideración hacia usted, porque a fe que no la merece de ninguna clase quien así falta a todo lo que me debe.

Entrando ahora en la contestación de su carta, digo a usted que de ninguna manera estoy de acuerdo con su modo de pensar en cuanto a la anarquía que nos amaga, ni menos en que para evitarla sea conveniente precipitarse en ella por medio de una rebelión que no tiene fundamento alguno, que no puede obtener el asentimiento de la nación, cuya explícita voluntad por el Plan de Ayutla y sus consecuencias aún esta fresca y palpitante, y que no daría otro resultado que echar sus autores el más negro borrón por su ingratitud el ilustre jefe que empuñó el primero la espada contra la tiranía, sacrificó su fortuna y su reposo en dos grandes épocas de aflicción para el país, y expuso su existencia por darnos patria y libertad; entorpecer, sí no es imposibilitar, la consolidación de todo gobierno en la nación y poner nuevamente en las sangrientas manos de los enemigos del pueblo los grillos con que nos encadenen, el puñal con que nos asesinen y la tea con que incendien nuestras poblaciones.

Pero cuando nada de esto hubiese, y la revolución fuera necesaria y conveniente, yo me guardaría de apoyarla si no tenía el valor necesario para entregar antes al señor Presidente el sagrado depósito que ha confiado a mi honor y a mi lealtad, y presentarme después en la campaña a exponer mis intereses y mi vida y no las vidas e intereses de los hombres y de los pueblos que se han puesto bajo mi protección y descansan en la garantía que les prestan mis compromisos y mis juramentos. No, Sr. Doblado, jamás seré perjuro ni traidor, y yo rechazaré con la más viva indignación las invitaciones de usted.

Cuando usted, ligado con las mismas obligaciones que yo y con las que nos impone la comunión política a la que pertenecemos, no ha vacilado en concebir y fomentar esa revolución liberticida, aun apelando a los hipócritas pretextos de que se sirven nuestros enemigos y coligándose con ellos, inútil me parece hacerle reflexión alguna de las inmensas desgracias que puede ocasionar a nuestra patria, y concluyo

suplicándole no vuelva a ultrajar a quien, por otra parte, desearía servirlo
y s. m. b.

Francisco Díez Marina

COMONFORT DECIDIDO A TOMAR LA PRESIDENCIA
COMO SEA

México, diciembre 8 de 1855

Señor licenciado don Manuel Doblado

Siempre querido Manolo:

Después de lo que te escribe Antonio Acevedo, nada puedo agregar, porque su historia es exacta y verídica, Sin embargo, me ocurre, porque todo lo temo de la vacilación de don Juan y de los amañeos de todas especies que están poniendo en ejercicio los vencidos para que la presa no se les escape, que si aquél hace una nueva tarugada y se deja doblegar, a pesar de sus protestas y ofrecimientos, en el acto te pongas en situación amenazadora y hostil porque sólo así podremos concluir con la situación. Comonfort está enteramente decidido para ese caso y, según el cálculo que hemos hecho varias ocasiones, de las probabilidades que existen en pro y en contra de la revolución, creo que el triunfo será fácil y seguro, supuesto que no se retarde el movimiento.

Supuesto que Comonfort entra a la Presidencia, en cualquiera sentido me estoy temiendo ya los tropiezos que va a tener por formar un gabinete, como yo lo desearía, para iniciar su época administrativa; no quiero que los ministros sean simplemente liberales de orden, de prudencia, de conocimientos teóricos y prácticos; algo más deseo. Me parece que a aquéllas cualidades indispensables, es necesario que reúnan el prestigio y los antecedentes que producen, no seis individualidades, sino seis entidades sociales, digámoslo así, que van a servir de apoyo primero al gobierno; y, por desgracia., según tengo tanteados a esos jefes que yo desearía ver al lado de Comonfort, todos tienen sus ideas y son

sistemáticos por excelencia, trayendo eso el mal de que no podrán ponerse de entero acuerdo y formar un gabinete compacto; en cuyo caso no sirven el objeto y será preciso echar mano de medianías, lo que es para mí un mal. Ya veremos si me equivoco.

Aquí concluyo, tu amigo, que mañana antes de las nueve te avisará lo que haya sucedido por acá definitivamente.

Tuyo.

Manuel Silíceo

LOS MODERADOS PRESIONAN A DON JUAN ALVAREZ

México, diciembre de 1855

Señor licenciado don Manuel Doblado
Guanajuato

Siempre querido Manuel:

Ha estado hoy conmigo Antonio Acevedo y hemos hablado largamente, procurando yo darle una exacta idea de algunos hombres y de algunas cosas, seguiré intuyéndole porque noto que viene con algunos errores o con ilusiones que es preciso rectificar.

Ayer, sin que pueda yo aclarar todavía quién fue el “Espíritu Santo” de don Juan (Álvarez) por medio de cartas muy comedidas, nos llamó a qué sé yo cuántos, para indagar, sin previa discusión de todos aisladamente, si convenía al país que continuase o no al frente de la administración, y si en el segundo extremo continuaría con el actual gabinete o lo removería.

Yo, como debes suponer, dije con mucha claridad que a la nación y a don Juan mismo convenía que se retirara; otros fueron de este sentir y varios de que continuara removiendo todo el ministerio; estos últimos opinaban así porque temieron que el Consejo procediese a nombrar a [Melchor] Ocampo o a don Diego Álvarez; pero yo sostuve que al retirarse don Juan debía él mismo nombrar su sucesor, derogando previamente el decreto que concedía esa facultad al Consejo; y me pareció inclinado aquel pobre viejo a tomar este camino, que es el único que puede salvarnos de la revolución si Comonfort es el nombrado.

Hoy me ha sido imposible ver a éste, porque desde muy temprano fue llamado a la presidencia; pero esta tarde se me ha asegurado que

parece que por fin se ha resuelto la crisis, resolviéndose don Juan a retirarse temporalmente, dejando a Comonfort en su lugar; es decir, que parece que el partido moderado ha triunfado absolutamente. Sin embargo, no he querido dar completo asentimiento a esa especie hasta no hablar con Comonfort, a quien voy a buscar ahora mismo. Dejo, pues, suspensa esta carta.

Se hace muy tarde y nuestro hombre no sale de la presidencia todavía; si mañana por la mañana supiere algo importante, te lo comunicaré por telégrafo.

Tuyo como siempre.

Manuel Siliceo

COMONFORT OFRECE PERSUADIR AL GRAL. ÁLVAREZ
PARA QUE SE RETIRE

México, diciembre 8 de 1855

Excmo. Sr. Gobernador Lic. don Manuel Doblado

Muy señor mío, que aprecio y respeto:

Cuando yo me disponía a volver a esa ciudad, en cumplimiento de lo que usted me previno por su mensaje del día 6, Manuel Silíceo me llamó de parte del señor Comonfort, con quien ayer por la mañana tuvimos una larga conferencia sobre los puntos que contenía la consabida carta que por extraordinario le mandó usted el mes pasado. En vista de dicha carta, de lo que ya le tenía comunicado Silíceo, de lo que en la conferencia se trató y de lo que usted dijo a dicho señor ministro en el mensaje que usted mismo le dirigió el propio día 6, quedó resuelto que ayer mismo hablaría con el Presidente el repetido ministro, con objeto de persuadirlo sobre la necesidad de retirarse del puesto, consiguiéndose así el grande objeto sin ser preciso recurrir al medio a que usted estaba determinado y ofreciendo al Sr. Comonfort que, si desgraciadamente sus pasos no surtían efecto, entonces nosotros, a quienes desde luego lo participaría, impondríamos a usted de todo y le diríamos quedaba en absoluta libertad para llevar adelante sus resoluciones, que en tal caso aprobaba; mas que era indispensable poner a usted por nosotros y, desde luego, uno o dos mensajes a efecto de que suspendiese sus operaciones, cosa que desde luego pusimos en práctica el Chato y yo, quedando también convenido que yo permaneciera aquí hasta que resuelta la cuestión de uno o de otro modo marchara llevando dinero, que no quiso el Sr. Comonfort siguiera agenciando por ninguna otra parte. Arregladas así las cosas, nos separamos a ejecutar otras cosas relativas en que convenimos.

Anoche, Silíceo tuvo otra entrevista con el Sr. Comonfort, en que le manifestó haber encontrado varios obstáculos que quedaban vencidos; pero que con toda seguridad podía contarse con que hoy firmaría el Presidente un decreto sobre nombramiento de sucesor y que con tal paso quedaba todo arreglado; disponiendo aquel señor que esto le fuese comunicado a usted, como en efecto lo hice por el telégrafo, a las diez de esta mañana.

El resto del día hemos estado en espera del resultado definitivo que a esta hora, siete de la noche, aún no sabemos, no obstante que Manuel está yendo con frecuencia a buscar al ministro. Cuento usted con que si para última hora sabemos algo lo agregaré, y con que de todos modos cuidaremos de comunicar a usted por el telégrafo lo que ocurra.

La ansiedad es aquí muy notable y ya nadie pone en duda el cambio del personal de la Presidencia, lo que es efectivamente una necesidad apremiante, que no sé como se puede prolongar tres días. También es ya una creencia general que usted iniciará la reforma y no son pocos los que creen que dará cima a la empresa.

Por lo dicho, conocerá usted que me he visto en la necesidad de permanecer aquí y por lo que a nuestra vista le informé, creo quedará persuadido de que he procurado emplear el tiempo provechosamente.

Al fin el Sr. Munguía está resuelto a no hacer por ahora su visita episcopal, que asegura para más tarde.

Ayer pagué la libranza de usted, cuyo importe me prestó su amigo del número 5.

Quedo ansioso de un buen resultado y a las órdenes de usted como su afectísimo y atento servidor, etc.

Antonio Acevedo

COMONFORT LOGRA SU OBJETIVO

Remitido de México, diciembre 8 de 1855

Recibido en Guanajuato, diciembre 8 de 1855,
a las 12 de la mañana
Reservado

Excmo. señor gobernador:

El Excmo. señor Presidente, por el mal estado de su salud, se ha resuelto a retirarse del gobierno y a nombrarme Presidente sustituto; actualmente se ocupa S. E. en dar un decreto sobre este nombramiento.

En estas circunstancias, nada es más importante que la tranquilidad y el orden se conserven inalterables en todas partes.

Ignacio Comonfort

AL FIN SE LE ACEPTA LA RENUNCIA DE JUÁREZ

Excelentísimo señor don Benito Juárez

Excmo. señor:

He dado cuenta al Excmo. señor Presidente interino de la República del oficio de V. E., fecha 6 del actual, que se sirvió dirigir a este Departamento de Relaciones y en que hace dimisión de la cartera del de Justicia y Negocios Eclesiásticos que tan dignamente ha desempeñado.

En debida contestación, S. E. el Presidente, me ordena decir a V. E., como tengo la honra de hacerlo, que en atención a las razones expuestas en dicho oficio y, más que todo, por estar definitivamente resuelto a separarse del gobierno, admite, aunque con profundo sentimiento, la renuncia de V. E., cuyo patriotismo, talento, probidad y sabiduría, han sido tan útiles al país en el corto período de su administración, siéndole por otra parte muy satisfactorio dar a su vez a V. E. gracias por su deferencia y abnegación en el tiempo que transcurrió desde su primera renuncia, todo por hacer bien a su patria, la cual no duda el mismo señor Presidente que hará justicia siempre a las virtudes de V. E.

Y al dar con lo expuesto, cumplimiento a lo prevenido por S. E. el señor Presidente, aprovecho la oportunidad de ofrecer a V. E. mi particular aprecio y distinguida consideración.

Dios y Libertad, México, diciembre 9 de 1855.

Lucas de Palacio y Magorola.

EL GOBERNADOR DE QUERÉTARO
REPRENDE AL GOBERNADOR DE GUANAJUATO

Querétaro, diciembre 10 de 1855

Señor don Manuel Doblado
Guanajuato

Muy señor mío:

Hallándose el licenciado don Sabino Flores a disposición del Sr. Gral. don Félix Zuloaga, por orden del Supremo Gobierno, a quien di cuenta luego de verificado su arresto, no puedo determinar cosa alguna respecto de su persona.

Por lo mismo que usted me dice en su carta de 8 del corriente, de que el señor Flores venía públicamente en clase de comisionado, no sólo á invitarme a mí a la rebelión, sino a invitar a los jefes de la División Zuloaga, yo, que debía impedir este desorden en el estado de mi mando y oponer a la reacción todos los obstáculos que estuvieran a mi disposición, por lo mismo repito, arresté y debí arrestar no al comisionado del gobierno de Guanajuato, que entre sus atribuciones no tiene la de rebelarse contra el jefe supremo de la nación y despachar emisarios para buscar cómplices, sino a un revolucionario, enviado de otro, que venía con todo descaro a hollar las leyes cuya custodia se me ha confiado en esta comprensión. Tal era el carácter de la persona que mandé arrestar. Si con ese mismo carácter y con igual objeto hubiera venido un comisionado de Inglaterra, enviado por la Reina Victoria, habría yo tenido el derecho y la obligación de proceder contra él, porque, mejor lo sabe usted, los fueros concedidos a las naciones y a sus representantes no excusan a unas ni a otros del deber de respetar las leyes del país a que se

dirigen, y en el momento que un plenipotenciario u otro cualquier enviado pisa el territorio de una nación, contrae aquel deber indisputable. Y, si esto dispone el derecho de gentes cuando se trata de dos potencias independientes, ¿qué deberá decirse con respecto a dos departamentos y provincias o estados que están sometidos a un mismo centro, tienen unas mismas leyes y unos mismos deberes, y cuyos representantes no gozan de la inviolabilidad acordada a los agentes diplomáticos?

De lo dicho se infiere que en nuestro caso no ha estado el atentado de mi parte; que obré en la órbita de mis atribuciones y deberes, ni ofendí de modo alguno al estado de Guanajuato, puesto que el que hace uso de sus derechos a nadie agravia; el atentado y el insulto lo cometió el comisionado de usted, que públicamente y con un inaudito descaro vino a revolucionar al estado de mi mando, como usted mismo lo confiesa.

Nada diré a usted de la conveniencia o justicia con que ha procedido al empuñar las armas contra el Supremo Gobierno, contra la nación, mejor dicho, que acaba de adoptar el Plan de Ayutla y sus consecuencias; pero si mi oposición a ese movimiento le causa extrañeza, más motivo tengo yo de extrañar que usted, que antes había figurado en el partido puro o liberal exaltado, de un momento a otro se haya convertido en conservador. Misterio es éste que no puedo comprender ni me empeñaré en ello, porque usted es árbitro para obrar como mejor le parezca; lo único que exijo de usted es que me conceda la misma libertad, La nación, y no nosotros, resolverá de parte de quién están la razón y la justicia.

Entretanto, he de agradecer a usted que pongamos término a la polémica, no obstante la cual, puede usted, en lo particular, disponer de mí, como seguro servidor, que atento s. m. b.

Francisco Diez Marina

JUAN ALVAREZ DESIGNA AL PRESIDENTE INTERINO

Compañeros de armas:

Después que emprendí con entusiasmo y ardiente patriotismo una desigual campaña contra la más escandalosa y atroz de las tiranías, me propuse como último y supremo fin para mí la satisfacción íntima de haber dado libertad a nuestra amada patria. A esto estuvo reducida toda mi ambición, debiendo volver luego al seno de mi familia a aguardar el término de mis cansados días.

Pero los caros intereses de esa misma patria exigieron de mí mayores sacrificios. Nombrado por el Consejo de Gobierno Presidente de la República, me persuadí de que era preciso resignarme a aceptar tan espinoso puesto para establecer la unidad nacional y librar el país de la anarquía. Cualquiera que conozca mis antecedentes como hombre público, y mis hábitos y costumbres como ciudadano privado, comprenderá fácilmente que vi los deberes y los trabajos anexos a la primera magistratura, con más disgusto y temor que nunca lograron poner en mi ánimo mis campañas, ni más de cuarenta años de incesantes servicios; tengo, pues, derecho para que se tomen en su preciso valor las frases con que me expreso sobre mi exaltación al poder.

Hay, sin embargo, una cosa insuperable aun para la más firme voluntad, que es la posibilidad meramente física; y quebrantada notablemente mi salud por los efectos de la estación y por las fatigas del despacho de los negocios, debo precaver los males que se seguirán a éstos si el quebranto que comienzo a sentir tomase mayores proporciones, como es muy de temerse al adelantar el rigor del invierno, forzoso ha sido que me separe temporalmente del mando supremo.

Resuelto a hacerlo, quedábame por resolver el delicadísimo punto de la elección de Presidente sustituto; pero las circunstancias, la

expresión nacional poco menos que unánime, y los votos de mi corazón, tenían designada de antemano la persona merecedora de tan alta confianza. Por una multitud de patentes razones no podía ser otro ciudadano que aquel que comenzó conmigo la grandiosa obra de la regeneración de México el que se encargase de concluir por mí todo lo concebido, para el bien, y todo lo prometido a la nación desde el principio hasta el fin de la campaña. Mi hermano de armas debía continuar siendo mi hermano en el gabinete; los trabajos, los peligros y los sacrificios de uno y otro derrocaron la tiranía, y unidos y apoyados ambos daremos cima con los poderosos auxilios de la Providencia, a la obra grande del afianzamiento de la paz, la consolidación de la libertad y del desarrollo de los elementos de poder y riqueza de este hermoso y desventurado país.

Compañeros: El antiguo soldado de la Independencia, bajo la garantía de su palabra y sus antecedentes, os protesta que siempre ha tenido y tiene el pensamiento de proteger al ejército y a la guardia nacional, devolviendo a esas brillantes instituciones el esplendor, el crédito y valimiento que les arrebataron providencias absurdas que no parecían dictadas sino con el malévolo intento de aniquilarlas para siempre. Yo me excuso de pormenorizarlas porque son conocidas y deploradas por todos los militares y ciudadanos honrados, como también porque no es mi propósito escribir una diatriba, sino dirigiros mi tierna y amistosa despedida.

Pese en mala hora la responsabilidad de los males que hicieron al ejército y guardia nacional sobre los que tuvieron el desacierto o la desgracia de ser su causa; al gabinete liberal y patriota toca esforzarse para reparar en lo posible esos daños. Esta será la mira principal de mi gobierno secundado ampliamente por el Presidente sustituto.

Estoy muy satisfecho del comportamiento del ejército y de la guardia nacional, durante el corto período de mi administración, y debo con justicia esperar que seguirá siendo igual al separarme temporalmente del poder.

Amo la independencia, porque me cupo la ventura de trabajar para adquirirla, y la venero con religioso respeto como un legado de mis

ilustres compañeros, los inmortales caudillos del año de 1810. Soy idólatra de la libertad, porque en las asperezas de la cordillera donde fue mi cuna, y donde pido a Dios que mezcle mis cenizas con las de mis antepasados y descendientes, jamás ha penetrado el hálito pestilente del despotismo.

Ambos inapreciables bienes están amenazados por tenaces y astutos enemigos que trabajan en las tinieblas, y que no se confesarán vencidos mientras aliente uno solo de ellos; pero los libres tienen un medio sencillo y fácil para su triunfo, este medio es la unión.

Yo os conjuro a ella por cuanto hay de más sagrado sobre la tierra: religión, patria, familia y honra. Os conjuro en nombre de los mártires de la libertad; os conjuro en nombre de nuestros padres, que nos tomarán severa cuenta de la herencia que nos dejaron, y en nombre también de nuestros hijos, que nos echarán en cara la vergüenza de su servidumbre.

Los partidarios del retroceso se sonríen sardónicamente mirando nuestras reyertas que promueven, y la facilidad con que obedecemos a sus ocultos resortes, que es su arma favorita. Hagámosles pues, entender, que comprendemos su influencia satánica, rodeándonos del poder público para robustecer su acción.

Sin jactancia puedo tener la honra de deciros que Dios se ha servido valerse de mí humilde brazo en épocas bien notables de la historia de México. Ayudé para conquistar a mí Patria su independencia, y en esta vez la he devuelto su libertad. Al ejército, guardia nacional y pueblo de la nación, toca ahora conservar tan preciosos bienes.

Esto es lo que os pide y espera de vosotros vuestro anciano compañero, cuyo corazón late con la propia fuerza que en los primeros años, a las voces de Patria, Independencia y Libertad.

(México, diciembre de 1855.)

Juan Álvarez

AL FIN COMONFORT ES PRESIDENTE

Remitido de México, diciembre 10 de 1855

Recibido en Guanajuato, diciembre 10 de 1855
a las 7 y 40 minutos de la...

Excelentísimo señor gobernador del estado de Guanajuato

BANDO

Juan José Baz, Gobernador del Distrito Federal, a sus habitantes, sabed:

Que por el ministerio de Relaciones se me ha trasladado el decreto siguiente:

El Excmo. señor Presidente interino de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Juan Álvarez, general de división, Presidente interino de la República, a sus habitantes, sabed: que en uso de las facultades que me concede el Plan proclamado en Ayutla y reformado en Acapulco, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1º.- Se deroga el decreto dado el 7 de octubre del presente año, por el que se facultó al Consejo de Gobierno para nombrar Presidente sustituto de la República en cualquiera caso en que faltare el Presidente interino.

Artículo 2º.- En uso de las facultades que me concede el Plan de Ayutla, nombro Presidente sustituto de la República, por mi separación temporal del gobierno, al ciudadano general Ignacio Comonfort.

Artículo 3º.- La falta temporal del Presidente sustituto que queda nombrado por este decreto, se suplirá inmediatamente por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia con dos asociados nombrados por el mismo Presidente sustituto.

Artículo 4º.- El gobierno que establece el artículo anterior continuará hasta que cese el impedimento del Presidente sustituto que va a encargarse del gobierno del Presidente interino de la República.

Y para que llegue a noticia de todos, mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio Nacional de México, a 8 de diciembre de 1855.

Juan Álvarez,

Lucas de Palacio y Magarola,
Oficial mayor 2º, encargado del
Ministerio de Relaciones

Y lo traslado a V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.

Dios y Libertad, México, diciembre 8 de 1855.

L. de Palacio y Magarola
Excmo. Sr. Gobernador del Distrito

Y para que llegue a noticia de todos, mando se publique y circule por bando nacional y se le dé el debido cumplimiento, fijándose en los puntos de costumbre.

México, diciembre 9 de 1855.

Juan José Baz

José María del Castillo Velasco,
Secretario

COMONFORT INTEGRA SU GABINETE

Remitido de México, diciembre 13 de 1855
Recibido en Guanajuato, diciembre 16 de 1855,
a las 11 y 80 minutos de la mañana

Ministerio de Relaciones Exteriores

Señor gobernador de Guanajuato:

El Excmo. señor Presidente substituto se ha servido ordenar su gabinete, y lo forman los excelentísimos señores que a continuación se expresan:

Relaciones Exteriores, don Luis de la Rosa; Justicia, don Ezequiel Montes; Gobernación, don José M, Lafragua; Fomento, don Manuel Siliceo; Guerra, Gral. don José María Yáñez; Hacienda, don Manuel Payno.

Cuyos señores han tomado posesión de los ministerios que respectivamente les están encomendados, con excepción del Sr. Gral. Yáñez, por no hallarse en esta capital.

De orden del mismo Excmo. señor Presidente substituto, lo comunico a V. E, para su conocimiento, y que inmediatamente le dé la debida publicidad.

Lucas de Palacio y Magarola

LA FRAGUA EMPLAZA A DOBLADO

México, diciembre 13 de 1855

Excelentísimo señor don Manuel Doblado

Muy estimado compañero y amigo:

La premura del tiempo y las ocupaciones que usted calculará que tendré en este momento, me impiden escribir a usted cual quisiera. Me remito, pues, a lo que dice a usted Silíceo y le ruego, a nombre de nuestra pobre patria, que nos ayude con todo su poder. Tenemos todavía esperanza de hacer algo bueno y usted puede ser el eficaz cooperador.

Muy pronto saldrá el programa y entonces escribiré a usted más largo su afectísimo compañero, amigo y servidor, q. b. s. m.

José María Lafragua

DOBLADO NO CEDE

Remitido de México, diciembre 14 de 1855

Recibido en Guanajuato, diciembre 15 de 1855,
a las 11 y 32 minutos de la mañana

Excelentísimo señor gobernador don Manuel Doblado:

Quería el señor Presidente que yo me fuera ayer, llevando instrucciones que tienden a que usted revoque su plan; mas he creído debía esperar nuevas de usted, puesto que el ministerio se forma de los señores de la Rosa, Payno, Silíceo, general Yáñez, Montes y Lafragua.

Aún no termino con Téllez; dígame usted qué hago. Un aviso a mi casa.

Antonio Acevedo.

(A continuación del anterior telegrama está escrito lo siguiente, de puño y letra del señor Doblado)

Pienso contestar lo siguiente:

Un plan no se revoca nunca; si es uno vencido, sucumbe. Me gusta todo el ministerio. Obtenga usted de Téllez una contestación definitiva, de sí o no, para que nos entendamos. Diga usted a Silíceo que me escriba, que su carácter de ministro no le quita el de amigo.

Doblado

Dígame usted señor general, si aprueba mi contestación.

COMONFORT INSISTE EN OBTENER
LA COOPERACIÓN DE DOBLADO

Correspondencia particular
del Presidente interino
de la República

México, diciembre 16 de 1855

Excmo. Sr. don Manuel Doblado
Guanajuato

Mi siempre apreciable amigo:

No me es posible explicar a usted la amargura que derramó en mi corazón la lectura de su carta de 8 del actual, ni el sentimiento con que vi por ella la ninguna influencia que la mía de 14 de noviembre último ejerció en el ánimo de usted,²¹ pues que no bastó a conseguir que desistiese de la funesta idea de buscar en una nueva revolución el remedio de los males que hacen tan aflictiva la situación de nuestro país; y he debido sentir y sorprenderme tanto más de que al fin se decidiese a tomar aquel camino, cuanto que llegué a descansar y confiarme en la declaración formal que me había usted comunicado, de abandonar tal pensamiento cuando le hice presente las graves y trascendentales consecuencias que causaba.

Puede usted recordar que siempre rehusé con firmeza la idea de cambiar el personal del gobierno y la de ser llamado a regir los destinos de la nación. Mi oposición no era producida por un sentimiento de modestia, ni solamente por la debida consecuencia al venerable caudillo

²¹ Probablemente se refiere a la del día 19 del mismo mes.

del Sur, pues tenía, además, otras razones muy sólidas que manifesté a usted entonces, entre ellas, la persuasión íntima que tengo de que romper el Plan de Ayutla sería renunciar a las esperanzas que nos ofrece el triunfo de la anterior revolución y desvirtuar, desde luego, a la que la substituyera; y a la más profunda convicción en que estoy de que esa misma revolución ha sido la última posible en el país, pues que otra posterior nos llevaría a la completa disolución de la República, pasando a la irreparable pérdida de nuestra nacionalidad.

¿Podría yo, con tal conciencia, prestar mi asentimiento para un paso que nos condujese a tan funestos resultados? Ciertamente, no. Mi deber es sacrificarme antes de que lleguemos a un término tan fatal y, ahora, como entonces, conjuro a usted, en nombre de la patria y de su leal amistad, para que vuelva sobre sus pasos, desistiendo del plan que ha proclamado.

La caballerosidad de usted, su buen juicio y su patriotismo, me hacen esperar ese resultado, porque no puedo persuadirme de que ignore el horroroso abismo a que nos conduciría una nueva revolución y de que quisiera usted cargar la inmensa responsabilidad de tan horribles consecuencias. Además, usted mismo me había ofrecido, espontáneamente, para el caso de recaer en mí el mando supremo, que sería mi mejor apoyo. ¿Puedo creer que suceda lo contrario, ahora, que ese caso ha llegado naturalmente, sin que yo lo procurase y sin necesidad de violencias? No, a la verdad. Pero si desgraciadamente así fuera, me quedaría la satisfacción de haber hecho el último esfuerzo salvar al país y a usted mismo, y salvarme yo también del penosísimo deber de combatirlo, estando, como estoy, precisado a defender la tranquilidad, el orden y la unidad de la República.

El señor Acevedo, que va bien impuesto del programa político que me propongo seguir en la marcha de la administración, lo comunicará a usted con todas las explicaciones conducentes, y si de todo resulta que usted vuelva al sendero que nuestro deber y la patria nos marcan, habrá dado un día de júbilo a su sincero amigo y afectísimo servidor, q. b. s. m.

Ignacio Comonfort

JESUS TERAN DEPLORA LA POSICIÓN DE DOBLADO

Aguascalientes, diciembre 15 de 1855

Señor licenciado don Manuel Doblado
Guanajuato

Mí estimado compañero y amigo:

Por su favorecida del 12, veo la parte que usted toma en la pesadumbre que ha causado el fallecimiento de Petra y, por ello, tanto mis hermanos como yo, le estamos reconocidos.

Tuve una formal pesadumbre al recibir el Plan proclamado en ese estado, pues además de que contrariaba todas mis convicciones, entendí que iba a acarrear la desgracia de usted, porque cualquiera fuerza es impotente contra la opinión general y ésta no podía favorecer una reacción, porque se conservan aún grandes esperanzas en la revolución.

Con nuestro amigo Guedea he hablado muy largamente sobre el Plan de Guanajuato, y he deplorado con él que se hallen cerca de usted personas que, por sus ideas retrógradas, no solamente no le ayudarán a trabajar en el sentido de la revolución, sino que le pondrán embarazos y procurarán comprometerlo.

Mi primera idea, al saber las ocurrencias de Guanajuato, fue ir a hablar con usted pero las cosas estaban tan adelantadas que mi visita hubiera sido inútil.

Confío en que el nombramiento de Comonfort me evitará el sentimiento de tener por enemigo político a uno de mis amigos mas queridos, y a la República el disgusto de verse contrariada en sus intereses por una persona de quien, sin adulación, debe esperar mucho.

Sean cuales fueren las intenciones de [López] Uraga, sus acciones revelan un hombre tan falto de cordura que por sí mismo se nulifica.

De nuevo doy a usted el parabién por el desenlace feliz que las cosas han tenido, y me repito su amigo y compañero.

Jesús Terán

UN NUEVO PLAN: DE ZACAPOAXTLA

Los que abajo firmamos, reunidos en junta, tomando en consideración:

1º.- Que la revolución iniciada contra el gobierno del general Santa Anna era altamente nacional y, por lo tanto, debió llevarse a cabo en provecho de los intereses generales de la nación.

2º.- Que las principales causas de la revolución fueron la falta de garantías para los ciudadanos, el exclusivismo más riguroso en la administración y el desorden en la repartición en las rentas nacionales.

3º.- Que el actual gobierno presenta los mismos vicios, pues existe la misma falta de garantías, el mismo exclusivismo en la administración y un desorden todavía mayor en las rentas nacionales.

4º.- Que el nombramiento del actual presidente no es la expresión de la voluntad nacional.

5º.- Que si se permite que continúe por más tiempo el actual gobierno, no debe aguardarse otro resultado que la continuación de la anarquía, del desorden más espantoso, de la división de la República y de la escisión de algunos de sus estados.

6º.- Que tales resultados deban atraer, en un tiempo tal vez muy corto, la ruina de la República y de su nacionalidad.

Declaramos que:

1º.- Se ha falseado el objeto de la revolución, haciendo que redunde en favor de algunos intereses particulares, con perjuicio de los generales.

2º.- Se desconoce al actual gobierno.

3º.- Se proclaman las Bases Orgánicas juradas en junio de 1843, y por lo mismo comenzarán a regir inmediatamente en la República

4º.- Mientras se reúne el Congreso, en cumplimiento de lo prevenido por dichas Bases, se nombrará un Presidente provisional, ampliamente facultado para gobernar.

5º.- La persona a quien se nombre como jefe para llevar a debido efecto el presente Plan, asistido de un Consejo de personas conocidas por su moralidad, talento y patriotismo, y que a la vez represente los intereses de todas las clases y localidades, sin distinción de partidos, procederá a la elección de Presidente provisional.

6º.- El primer Congreso que se reúna, en virtud de lo prevenido por las Bases Orgánicas, queda facultado para revisar dichas Bases Orgánicas, y hacer en ellas las reformas que aseguren el progreso de la República y afiancen su independencia y nacionalidad.

7º.- los individuos que componen el actual gobierno, darán cuenta de sus actos ante el primer Congreso que deba reunirse según el presente plan.

Zacapoaxtla, diciembre 19 de 1855.

Francisco Guitián

Luis G, de Osollo

Juan de Olloqui

Siguen las firmas de los señores jefes y oficiales, y de las autoridades y principales vecinos de esta villa.

Es copia.

Juan Ortiz Monasterio

Adheridos al presente plan, el día 12 de enero de 1856, en la villa de San Juan de los Llanos:

Severo Castillo.—Manuel Aljovín.—Manuel Echeverría.—Mariano Camacho.—Apolinar Velasco.—Agustín Tobar.—Agustín C. de Iturbide.—Carlos Basauri.—Francisco de P. Heras.—Pedro A. Garay.—Fernando Nieva.—Pedro García.—Lázaro Pérez.—Como Mayor de órdenes. José María Ruiz.—Antonio Uribe.—Esteban Tamés.—Joaquín Guapillo.—Por la clase de Capitanes 1os. del Batallón de Ingenieros, Pantaleón Curibay.—Por la de Capitanes 2os., Luciano Becerra.—Por la de Tenientes, Jacinto Ordóñez.—Por la de Subtenientes, Juan Enríquez.—Por la clase de Tenientes de Artillería, Ramón Alcorta.—Por la de Subtenientes, José María Gambiña. Por la clase de Capitanes del 3°. Ligerio, Camilo Mesa.—Por la de Tenientes, Camilo Jalamión.—Por la de Subtenientes, Julio Salazar.—2°. Activo de Guanajuato.—Por la de Capitanes, A. L. Espinosa.—Por la de Tenientes, Jesús Lobato.—Por la de Subtenientes, Sabino Martínez.—1er. Regimiento de Caballería.—Por la de Capitanes, Fernando Martínez.—Por la de Tenientes, Domingo Zelaya.—Por la de Alférez, Diego de Cándano.—Escuadrón de Guanajuato.—Por la de Capitanes, Rodrigo Porras.—Por la de Tenientes, Ramón G. Lecuona.—Por la de Alférez, Juan García.—Cuerpo Médico Militar.—Por la de Primeros Ayudantes, Rafael Degollado.—Subteniente de Ambulancia, Agustín de la Torre.—Mayor General de la División, Manuel María Fuentes.—Teniente Coronel, Joaquín Miramón.—Dé la misma clase, José María Segura.—Capitan de auxiliares, Juan Diego de Tobar.—De la misma clase, José María Martínez.—ídem, José de la Luz Grijalva.

Es copia de su original.

Lic. Vicente Soto Caraza
Secretario

JUÁN ÁLVAREZ DA UNA LECCIÓN
DE PATRIOTISMO Y BONDAD

Correspondencia particular
del Presidente Interino de
la República

Tlalpan, diciembre 20 de 1855

Señor licenciado don Manuel Doblado
Guanajuato

Muy señor mío:

Tengo el gusto, como usted habrá visto, de haberme anticipado a los inmoderados deseos de usted, que ciertamente no tienden al bien y felicidad nacional, sino a llenar esa ambición desmedida que tantos males ha causado a nuestra desventurada patria, desgarrada por la empleomanía y las miras personales de algunos hombres que desprecian la noble idea del bien general.

Aunque no debía a usted reseña alguna de los servicios que he prestado a mi patria, lo haré someramente para que comprenda la distancia que en este punto nos separa, sin que se atreva a darle otra interpretación que la misma que nace de mis palabras.

Desde mucho antes de la memorable época de 1810 comencé mi carrera militar, demostrando siempre que tengo honor, dignidad y verdadero patriotismo; que jamás he aspirado al primer puesto de la Patria, aun a costa tal vez de la patria misma, porque he estado siempre persuadido de los grandes pesares que produce tan elevado destino; y si en este período que acaba de pasar tomé posesión del sitial de la

Presidencia, fue porque así lo quiso la representación nacional y contra mi voluntad tuve que ceder a la expresión de un voto libre, espontáneo y nacido del sentimiento en pro de la libertad del pueblo mexicano. Para ello no hubo intrigas ni chicanas miserables, que repele el buen sentido y el sano criterio, porque ni yo la habría permitido, ni los hombres que constituyeron la representación del país son de esos tantos que medran a la sombra de las desgracias nacionales. Ni ellos ni yo procuramos arribar al gran círculo de la fortuna para ver con ojos serenos el crimen y la impunidad; y si me lancé a una revolución tan justa como necesaria, no fue como otros para prosperar en el cieno vil de nuestras contiendas domésticas, sino para libertar a la familia mexicana de una dominación de hierro.

Enemigo de la tiranía, luché contra el gobierno colonial, derramando mi sangre en los campos de batalla en defensa de los imprescriptibles derechos y soberanía de la nación; y jamás he apoyado a los tiranos como usted, que empuñando las armas en favor del hombre funesto del país manchó el suelo patrio con la sangre de sus hermanos, porque es lo mismo ejecutar que mandar o consentir en la ejecución.

Entre nuestros disturbios, jamás he figurado con ese doble carácter que imprime la intriga; no lloran por mí huérfanos ni viudas; no he arrebatado los bienes del ciudadano con bárbaras leyes de confiscación para sostenerme en un poder arbitrario; mi espejo ha sido la justicia, la moderación y el buen juicio, y mal que les pese a mis gratuitos enemigos, mi conducta pública no tiene una mancha hasta el día.

He desempeñado la primera magistratura de la República con lealtad y forzado por los hombres de todos los partidos que me demostraron ser el hombre de la época; mas conociendo que el puesto era difícil y espinoso, que tenía que luchar con intereses contrapuestos, que las exigencias de tantos entre ellos y yo todo punto de contacto, pues en mí sólo se encontraba y el verdadero deseo del bien y felicidad del en que nací, me resolví a dejar ese puesto de amarguras, de sinsabores y tormento para el hombre honrado y deposité el poder y mi confianza en mi hermano y compañero de armas, que [compartió] conmigo las fatigas

y sacrificios de la campaña, y que juzgo salvará a la nación si se le ayuda.²²

Pobre entré a la Presidencia y pobre salgo de ella; pero con la satisfacción de que no pese sobre mí la censura pública y, porque, dedicado desde mi tierna infancia al trabajo personal, sé manejar el arado para sostener a mi familia, sin necesidad de los puestos públicos, donde otros enriquecen con ultraje de la orfandad y de la miseria.

No he sido yo el hombre del doblez y de la mentira, del sacrilegio y del adulterio, del peculado y del contrabando, de la intriga y de la superchería, del robo y de la infamia, de la injusticia y de la venalidad, y, en una palabra, no soy ese feto monstruoso de la maldad que cubriéndose con hipócrita antifaz ha sido siempre el ídolo de un partido execrable y envilecido. Soy, señor Doblado, el veterano de la independencia que tiene un corazón sencillo y patriota, y mi apellido no tiene mancha ni doblez; mis acciones concuerdan con mi nombre, como las tuyas con el que lleva.

No crea usted que esta manifestación es un desahogo personal, un encono o resentimiento, porque aspire a ese puesto encumbrado que yo desprecio, aunque respeto al que lo obtiene; sea usted Presidente en buena hora; mas tenga siempre en su memoria que el honor y la reputación del hombre es muy sagrada y que el que la lastima sin motivo, es un audaz y un calumniador. Si cuando usted indebidamente tomó las armas para rebelarse contra mi administración, hubiera querido usar del poder que aun hubiera podido retener en mis manos, yo le habría enseñado cómo se respeta a un patriota y a un gobernante, porque mi idea es rectitud y energía para acallar y castigar a los sediciosos; pero ya pasó y quiero consignar al olvido un hecho tan punible como escandaloso.

²² La edición que de esta carta se hizo en el tomo V de *México a través de los siglos*, tiene con el autógrafo, que actualmente obra en nuestro poder —dijo Genaro García—, algunas variantes de no escasa importancia, por ejemplo, el principio del sexto párrafo dice así: “He desempeñado la primera magistratura de la República con lealtad, informado por los hombres de todos los partidos que me demostraron ser el de la época.” Como se ve, el sentido de estas frases es distinto del que tienen las del original.

Usted añadió al crimen la hipocresía, que sólo sirve para hacerlo resaltar más, diciendo en un artículo de su Plan que a mí y a mis compañeros, los caudillos de la revolución, se nos consideraría por nuestros servicios. Gracias por su ridícula protección: no es de usted sino a la patria, a quien he debido, tiempo ha, esa distinción.

Baste de sangre, baste de contiendas que arruinan a la patria; cíñase cada cual al círculo que le toque en la sociedad y procuremos sostener al gobierno para que la nación pueda constituirse, y así seremos verdaderos ciudadanos y hombres de provecho al país a quien debemos la existencia.

Esto es lo que desea su atento servidor.

Juan Álvarez

EL PLAN DE DOBLADO NO TIENE JUSTIFICACIÓN
AL IRSE LOS PUROS

México, diciembre 22 de 1855

(Sr., Lic. Manuel Doblado)

Mi siempre querido Manuel:

Largo seria de referirte todas y cada unas de las fases que la cosa pública ha estado teniendo aquí hace días; los despachos de Acevedo, puestos todos de acuerdo conmigo, te habrán dado algunas indicaciones de lo que ha pasado, y el mismo Acevedo, que sale de aquí precisamente pasado mañana, te hablará largo sobre todo esto y te explicaré las ideas de Comonfort, respecto de las que lleva amplias instrucciones.

Ayer, por fin, tomó posesión aquél de la Presidencia, y desde luego ha comenzado a ocuparse de la formación del gabinete, encomendándolo al señor (Luis de la) Rosa, para fijar inmediatamente el programa administrativo y circularlo a todos los estados a efecto de que sepan cuáles son las ideas y tendencias del Presidente sustituto, Este es el primer paso de una importancia vital que, bien meditado, podrá llenar de prestigio a la nueva administración, contando siempre con el apoyo de hombres como tú, interesados en la subsistencia de un régimen prudentemente liberal, pero de progreso, de reforma y de moralización.

No veo todavía el Plan proclamado por ti el 6 o el 7 del corriente mes; pero los amigos que lo han visto, y entre ellos Comonfort, te diré con franqueza que están muy disgustados con él. Ven que si llegase a ser admitido en toda la República se levantaría una escisión legal, reduciendo al poder del centro a una nulidad más grande todavía que la que tuvo en la última época de la Federación, es decir, que haría

imposible la existencia de ese gobierno, siendo sólo de nombre la unidad nacional; ven que dando a los estados una indebida preponderancia e independencia del centro, se hace imposible toda reforma administrativa, porque el Gobierno General, convertido en rey de comedia, no podría ejercer su influencia y su poder sino dentro de las garitas de México, supuesto que carecería de los medios necesarios de hacerse respetar fuera, y supuesto que los gobernadores de los estados, más potentes sin duda que aquél, podrían calificar si era de ponerse en práctica una disposición suprema y desobedecerla impunemente; ven que al clero y al ejército y, sobre todo al primero, al respetarse y sancionarse sus privilegios e inmunidades, se les da una preponderancia contra la que hemos estado siempre todos los liberales, porque sujeta al gobierno a una tutela vergonzosa, porque hace imposible toda especie de progreso y reforma y porque sus constantes tendencias al *statu quo*, que son las mismas del partido conservador, imposibilitan al liberal para entrar en el verdadero camino del bien; ven, por último, que la revolución se nulifica en todos los sentidos, y que si su resultado hubiera de ser el que se conservasen los males y los abusos que hemos deplorado constantemente, mas valiera no haberla emprendido.

Yo, que creo conocer mucho tus ideas de libertad bien entendida, de progreso y de reformas útiles, y he supuesto que algunas ideas de las que han alarmado aquí llevan sólo por mira halagar y hacerte de prosélitos y llegar al término más pronto y fácilmente; pero, de todas maneras, la impresión ha sido muy desfavorable y creo que, si las cosas fueran adelante, te enajenarías absolutamente al partido moderado.

Por otra parte, me parece que tu plan hasta cierto punto era sostenible conservándose don Juan (Álvarez) y los puros apoderados de los negocios públicos; pero cuando el uno y los otros han sido derrotados absolutamente; cuando al frente del gobierno tu candidato, que es el nuestro, que a ti, como a nosotros, inspira la ciega y fundada confianza; cuando es preciso rodearlo de prestigio, de respetabilidad y de fuerza, he llegado a creer, y así lo he asegurado a Comonfort, que tú prescindirías, y que, reconociendo al Presidente sustituto, serías el primer sostenedor de su programa administrativo. Me temo con fundamento que cualquiera

otra nos llevaría de nuevo a la guerra civil, nos despedazaría y concluiría con nosotros, sin que, por otra parte, tuvieras tú el gusto de ver satisfechos tus deseos, tanto porque Comonfort no se dejaría imponer condiciones ningunas, y menos la que pugnasen con sus principios y convicciones, como porque esas clases, apoyadas hoy por ti, más tarde y no muy tarde, te relegarían al desprecio, después de haberles servido de instrumento.

Según tu despacho de ayer en la tarde, tienes dos temores: primero, el de que siendo nombrado Comonfort por Álvarez, su permanencia en el gobierno será efímera, dependiendo del capricho de éste y de los que lo rodean o rodeen después; segundo, el de que continúe Comonfort con el actual Consejo de Gobierno. Respecto del primero, sabe que don Juan se marcha con la firme resolución de no volver, y que Comonfort tiene en su poder un documento que nos garantiza absolutamente [eso]; y en cuanto a lo segundo, el Consejo actual se ha suicidado con su conducta de estos dos últimos días, y puedes estar seguro de que no continuará con Comonfort, tanto porque ésta es una exigencia nacional, como porque no podría entenderse aquél dos minutos con esa célebre corporación. Ten confianza en lo que te digo, porque es la verdad, y porque, conociéndome, sabes que no faltaría a los deberes de la amistad.

Respecto de recursos, Acevedo ha hablado ya con Comonfort, y también estoy seguro de que serás auxiliado de toda preferencia.

El correo se tardó extraordinariamente y hasta ayer en la tarde llegó, sin que yo tuviese carta ni noticia alguna tuya; esto me tiene con cuidado y hasta cierto punto con mortificación, porque no sé explicarme tu silencio en las actuales circunstancias. No sé si lo mismo habrá sucedido con A. Acevedo.

Tuyo, como siempre.

Manuel Silíceo

COMONFORT ESTÁ VIGILANTE
DE LAS MANIOBRAS DEL CLERO

Correspondencia particular
del Presidente de la República

Reservada

México, abril 26 de 1858

Excmo. Sr. don Manuel Doblado
Guanajuato

Mi querido amigo:

Tengo buenas razones para creer que el clero trabaja en una nueva revolución que pretende iniciar en Puebla y ese Estado; yo no la temo y creo que podríamos combatirla felizmente si llegara a estallar, pero usted conocerá que es mejor ahogarla en su cuna, por la vigilancia y otras medidas de precaución. Con este fin dirijo a usted la presente, no dudando que empleará toda su actividad y talento en ayudarme a descubrirla y conjurarla.

Treinta personas me han interrumpido esta carta, que concluyo ya por acercarse la hora del correo.

Sea usted feliz en todo y disponga de su sincero y verdadero amigo, q. b. s. m.

Ignacio Comonfort

SE CAMBIA LA SEDE DEL CONGRESO CONSTITUYENTE

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Sección Segunda

El Excmo. señor Presidente substituto, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El ciudadano Ignacio Comonfort,²³ Presidente substituto de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:

Que en uso de las facultades que me concede el Plan de Ayutla, reformado en Acapulco, y considerando:

1º.- Que son insuperables las dificultades que se presentan para que el Congreso Constituyente se reúna en la ciudad de Dolores.

2º.- Que es un deber del gobierno facilitar la reunión de esa augusta Asamblea.

A reserva de lo que después de reunido determine el mismo Congreso, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1º.- Se deroga el artículo 66 de la Convocatoria.

²³ El Gral. Comonfort fue nombrado Presidente substituto de la República, por decreto de 8 de diciembre de 1855, expedido por el Presidente interino, general don Juan Álvarez, fundándose en las facultades que le concedía el Plan de Ayutla, reformado en Acapulco. Dicho nombramiento fue aprobado por el Congreso Constituyente en sesión de 21 de febrero de 1856.

Artículo 2º.- El Congreso Constituyente se reunirá en la capital de la República.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Ignacio Comonfort

José María Lafragua

Dado en el Palacio Nacional de México, a 26 de diciembre de 1855.

Y lo comunico a V. E. para su inteligencia y fines consiguientes.

Dios y Libertad. México, diciembre 26 de 1855.